ACTA DE LA SESIÓN
DEL 13 DE JULIO DE 2016

Número: **ACT-PUB/13/07/2016**

Anexos: **Documentos anexos de los punto 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13.**

A las once horas con cincuenta y dos minutos del miércoles trece de julio de dos mil dieciséis, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita en Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, el Coordinador Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del Pleno:

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente.
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado.
Areli Cano Guadiana, Comisionada.
Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado.
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada.
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado.
Joel Salas Suárez, Comisionado.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

1. En desahogo del primer punto del orden del día, el Coordinador Técnico del Pleno dio lectura al mismo:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales, en su caso.

2. Medios de impugnación interpuestos.

3. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales remitir al sujeto obligado competente

los recursos de revisión promovidos en contra de respuestas a solicitudes en materia de datos personales, en atención a lo dispuesto en los artículos tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ampliar el plazo originalmente establecido en la fracción I del artículo Primero Transitorio de los Lineamientos en Materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobados mediante Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, con objeto de dar cabal atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al servicio profesional.

5. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales las modificaciones a las Políticas y al Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto.

6. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 150/2016; misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 277/2016; dejar sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto, en el expediente relativo al recurso de revisión RPD 0645/15, de fecha cinco de noviembre de dos mil quince.

7. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 003/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

8. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de

atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 005/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

9. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 006/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

10. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 007/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

11. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026616, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.

12. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026516, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.

13. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026416, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.

14. Asuntos generales.

A continuación, la Comisionada Presidente puso a consideración de los presentes el orden del día y, previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.01
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, cuyo documento se identifica como anexo del punto 01.
Los Comisionados no adicionaron asuntos generales.

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, que concierne a los recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de respuesta, así como al listado de los proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno del INAI, por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen en el orden del día, los Comisionados tomaron nota de los documentos respectivos. Con relación a las resoluciones definitivas sometidas a votación, los Comisionados presentes emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.02

a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno del INAI por parte de los Comisionados ponentes, cuyos números son:

I. Protección de datos personales

RPD 0410/16, RPD 0417/16, RPD 0453/16, RPD 0462/16, RPD 0470/16, RPD 0484/16, RPD 0491/16, RPD 0504/16, RPD 0506/16, RPD 0510/16, RPD 0511/16, RPD 0513/16, RPD 0521/16, RPD 0525/16, RPD 0535/16, RPD 0541/16, RPD 0550/16 y RPD 0565/16.

II. Acceso a la información pública

RDA 1614/15-BIS, RDA 5415/14-BIS, RDA 1912/16, RDA 2247/16, RDA 2265/16, RDA 2489/16, RDA 2704/16, RDA 2737/16, RDA 2835/16, RDA 2891/16, RDA 2937/16, RDA 3003/16, RDA 3031/16, RDA 3041/16, RDA 3046/16, RDA 3047/16, RDA 3052/16, RDA 3053/16, RDA 3054/16, RDA 3056/16, RDA 3060/16, RDA 3061/16, RDA 3067/16, RDA 3073/16, RDA 3075/16, RDA 3078/16, RDA 3081/16, RDA 3082/16, RDA 3084/16, RDA 3086/16, RDA 3088/16, RDA 3094/16, RDA 3095(RDA 3096)/16, RDA 3097/16, RDA 3106/16, RDA 3109/16, RDA 3113/16, RDA 3114/16, RDA 3117/16, RDA 3131/16, RDA 3143/16, RDA 3152/16, RDA 3153/16, RDA 3154/16, RDA 3162/16, RDA 3167/16, RDA 3168/16, RDA 3169/16, RDA 3170/16, RDA 3203/16, RDA 3206/16, RDA 3208/16, RDA 3239/16, RDA 3246/16, RDA 3247/16, RRA 0008/16, RRA 0032/16, RRA 0036/16, RRA 0043/16, RRA 0050/16, RRA 0078/16, RRA 0095/16, RRA 0099/16, RRA 0116/16 y RRA 0200/16.

b) Resoluciones definitivas que se someten a votación de los Comisionados:

I. Protección de datos personales

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0398/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100709216) (Comisionada Presidente Puente).

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0417/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101092916) (Comisionada Kurczyn).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0476/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400088416) (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0478/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400081916) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0484/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100722516) (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0488/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400079916) (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0503/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400091516) (Comisionada Presidente Puente).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0504/16 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal (Folio No. 0413100136515) (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0506/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101372516) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0513/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200138316) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0521/16 en la que se ordena dar cumplimiento al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra).

II. Acceso a la información pública

El Coordinador Técnico del Pleno dio cuenta del siguiente documento que se identifica como anexo del punto 02:

- Oficio que el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas envió a los Comisionados, en el que expone las razones y fundamento para excusarse de resolver el recurso de revisión con número de expediente RRA 0095/16, radicado en la ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 1614/15-BIS en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000007915) (Comisionada Kurczyn).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 1999/14-BIS en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400299213) (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 5415/14-BIS en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000050814) (Comisionado Salas).

- El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 1272/16, interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Folio No. 1612100002016), señalando que se requirió los estudios, acuerdos, circulares, dictámenes técnicos y periciales, que hablen del impacto ambiental en aguas mexicanas, así como todas las consecuencias que existieron, que existen y podrán existir a consecuencia del derrame de petróleo ocurrido en la Plataforma Deepwater Horizon, en el Golfo de México, el 20 de abril del año 2010.

  En respuesta, el sujeto obligado clasificó la información de acuerdo con lo establecido en el artículo 13, fracciones II, III, IV, V y 14, fracciones IV y VI de la Ley de la materia, ante lo cual el particular interpuso recurso de revisión, al considerar que se deben dar a conocer las acciones que las autoridades han realizado al respecto.

  Se llamó como tercero interesado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, se tuvo acceso a documentos clasificados por el sujeto obligado y se advirtió que la expresión documental que atiende la solicitud de información consiste en 22 estudios.

  Cabe destacar que los estudios respectivos contienen información de relevancia y trascendencia medioambiental relacionada con índices de sensibilidad ambiental, las modelaciones oceanográficas e hidrodinámicas que por su naturaleza pública se propone entregar sin la necesidad de actualizar la reserva y después romperla por interés público.

  La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos señaló no coincidir con el argumento para la apertura de la información de carácter medio ambiental relacionado con los índices de sensibilidad, las modelaciones oceanográficas y la moderación hidrodinámica del derrame ocurrido en la plataforma Deepwater Horizon en abril de 2010.

Lo anterior, por una cuestión de interés público y no así por la naturaleza de la información; es decir, en el caso concreto dicha información actualiza la causal de reserva establecida en la fracción V del artículo 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que la misma forma parte de una estrategia procesal. No obstante, al tratarse de información de carácter medio ambiental existe un interés público mayor de publicitarla; por lo tanto, señaló coincidir con el sentido de abrir la información, pero emitiendo un voto particular.

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó estar de acuerdo en que la información debe entregarse, pero sin compartir los argumentos emitidos, en los cuales se llegó a la conclusión de por qué se trata de información pública.

Lo anterior, ya que se a su consideración es necesario analizar las causales de reserva invocadas por el sujeto obligado en torno a la información relacionada con los índices de sensibilidad ambiental, las modelaciones oceanográficas contenidas y la moderación hidrodinámica del derrame, y una vez revisados los supuestos de reserva debería concluirse que no se actualizan, incluyendo el relativo a la estrategia procesal en tanto que este tipo de datos no dan cuenta de ella y, en consecuencia, se puede ordenar su entrega.

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló estar a favor de la apertura de la información y, previo a su determinación de la difusión hay que estudiar causales de reserva para revisar si se actualizan o no, y optar por su publicidad. Por lo tanto, manifestó emitir un voto particular.

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora señaló estar a favor del proyecto pero con voto particular, por las mismas consideraciones vertidas por la Comisionada Kurczyn.

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto de resolución y los Comisionados acordaron:

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 1272/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Folio No. 1612100002016) (Comisionado Monterrey).
  Dicha resolución contó con los votos particulares de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos y la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora.
  Corresponde a la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas elaborar el engrose respectivo.

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 1722/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 1615100004616) (Comisionado Salas).

- La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 1845/16, interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500020216), señalando que se requirió el expediente de la Operación Huésped, con la que se impidió la entrada a México del señor Saadi Gadafi, hijo de Muamar Gadafi -y su familia- por un ingreso que no era exactamente el de las vías legales.

  En respuesta, el sujeto obligado clasificó la información en términos de los artículos 13, fracciones I, II y IV, así como 14, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ante lo cual el particular se inconformó, señalando que por el interés público que reviste el asunto, se puede proporcionar una versión pública de dicha información.

  En vía de alegatos, el sujeto obligado manifestó que no existe un expediente específico sobre la Operación Huésped; no obstante, señaló que sí se cuenta con un expediente sobre el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la Resolución 1970 relativa a Libia, que contiene múltiples referencias a esta Operación.

  Una vez enlistados e identificados los documentos relacionados con la Operación Huésped, se llevó a cabo una audiencia de acceso a la información en la que la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su reserva. Asimismo, se tuvo a la vista notas diplomáticas relacionadas con dicha Operación Huésped y se constató que existen 55 documentos entre correos electrónicos, oficios y memoranda.

  Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Kurczyn Villalobos se advirtió que la información que da cuenta únicamente de datos relacionados con solicitudes y consultas de organismos internacionales pudiera ser utilizada para obstaculizar las actividades de inteligencia o contrainteligencia, las estrategias o acciones contra la delincuencia organizada o las estrategias para combatir la comisión de los delitos contra la seguridad nacional, por lo que no se actualiza la causal de reserva contenida en el artículo 13, fracción I de la Ley de la materia.

Asimismo, no se advirtió que la entrega de correos electrónicos, memoranda y oficios de comunicación donde se solicita permiso para la visita de paneles de expertos pudiera afectar la labor de investigación del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad o las relaciones y/o negociaciones internacionales del estado mexicano con la ONU u otros Estados, aunado a que se tiene certeza de que la visita de ese panel de expertos no se realizó y tampoco hay constancia en la que se observe que algún Estado u organismo internacional haya solicitado o referido la confidencialidad de la información, por lo que no se considera que se actualice la causal de reserva establecida en el artículo 13, fracción II de la Ley de la materia.

Por otra parte, en relación a la clasificación por el artículo 13, fracción IV de la Ley de la materia, se encontró que entre la documentación materia de la solicitud hay nombres de un grupo de expertos para la situación en Libia, lo cual aunado a las funciones a desempeñar por parte de este grupo, es posible concluir que se trata de actividades en materia de seguridad internacional, razón por la cual dar a conocer sus nombres vulneraría su seguridad e integridad, se pondría en riesgo su vida. En virtud de ello, se considera que este punto concretamente, sí actualiza la causal de clasificación invocada.

Por tanto, la Comisionada Kurczyn propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle que:

1. Clasifique como información reservada en términos del artículo 13, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las notas diplomáticas que obren en el expediente denominado "Comité de sanciones Libia", relacionadas con la Operación Huésped.

2. Entregue los 55 documentos que hacen referencia a la Operación Huésped, consistentes en correos electrónicos, memoranda y oficios de comunicación en los que deberá testar el nombre de los expertos que tengan funciones operativas y se hallen adscritos al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en los términos del artículo 13, fracción IV de la Ley de la materia, así como los datos personales que obren en dichos documentos, en términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción II y 18 de la misma Ley.

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que no todas las notas diplomáticas ni todo el contenido de las notas diplomáticas tiene que ser forzosamente considerado mecánicamente como merecedor de reserva y por consecuencia, estar restringido por un tiempo, mientras que estas cuestiones se disipan, resuelven o pasar a ser incluso historia.

Por tanto, manifestó coincidir con el proyecto presentado por la Comisionada Kurczyn.

El Comisionado Joel Salas Suárez señaló que el 7 de diciembre de 2011, el entonces Secretario de Gobernación Alejandro Poiré, anunció la realización exitosa de la "Operación Huésped" que impidió la entrada ilegal de Saadi Gadafi, hijo de Moammar Gadafi y de su familia a México. Saadi Gadafi fue acusado por el Gobierno Nacional de Transición Libio de estar al mando de los comandos que reprimieron a sus connacionales meses antes de la "Operación Huésped" y la Interpol emitió una ficha roja. En ese sentido, coincidió con el proyecto presentado por la Comisionada Kurczyn.

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló que coincidía con la reserva que se hace de las notas diplomáticas, pues hay 7 documentos que ya han sido publicados, sin embargo, respecto al resto de los documentos -47-, consideró que no es dable argumentar que su difusión no lesiona las relaciones internacionales, por sólo el hecho de que no se tiene constancia de que han sido entregados con carácter confidencial, porque el artículo 13, fracción II de la Ley de la materia, establece diversos supuestos en virtud de los cuales pueda actualizarse este supuesto de reserva.

En consecuencia, mencionó estar de acuerdo en que obviamente las notas diplomáticas sean reservadas, pero los demás, al no tener un detalle más específico y la valorización de por qué no podrían poner en riesgo o menoscabar las relaciones, éstos deberían tener el carácter de reservados.

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que respecto de algunas documentales que atienden lo requerido, de acuerdo con la descripción que se coloca en el proyecto, no es posible distinguir el tipo de información que contiene pues solo se trata de solicitudes y respuestas entre las instituciones mexicanas para efectos de la vista de un panel de expertos sino de informes de la Operación Huésped, los cuales se podrían colocar en la causal prevista en el artículo 3, fracción II de la Ley de la materia.

Ahora bien, en el proyecto únicamente se menciona que existen informes de manera general, elaborados por dependencias del Gobierno Mexicano referentes a la llamada Operación Huésped, sin que se detalle el tipo de información que conlleve para verificar claramente si la misma podría causar un perjuicio a las relaciones internacionales de México con la ONU o con la propia Libia. Al ser un asunto que le atañe, en dicha investigación participaron diversas instituciones mexicanas y son producto de la cooperación de diversas autoridades para efectuar la Operación Huésped

y con ello dar cumplimiento a las Resoluciones 1970 y 1973 emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

En este sentido, se puede advertir que dicha información se generó en el marco del cumplimiento de las Resoluciones antes citadas, razón por la cual el proporcionarlas podría afectar el desarrollo de las relaciones internacionales.

Asimismo, señaló que no es determinante el que no esté en un listado de informes confidenciales para que el órgano garante determine su naturaleza de publicidad o de confidencialidad.

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora manifestó que más allá que no se tenga expresamente la mención en este catálogo de información reservada, como parte de esta responsabilidad y misión del mismo Instituto es analizar o entrar en un análisis de la naturaleza misma de la información. En ese sentido, en principio se comparte la clasificación con fundamento en el artículo 13, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental respecto a las notas diplomáticas contenidas en el apartado denominado "Operación Huésped" del segundo tomo del expediente "Consejo de Seguridad Libia Sanciones".

De igual modo, expresó su disenso en desclasificar los correos electrónicos, ya que podrían afectar el diálogo político y la relación con Libia y otros países en el ámbito bilateral, aunado a que se mermaría la relación que sostiene nuestro país frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov señaló no compartir el proyecto en sus términos, en razón de no se advierte de forma certera el elemento sustancial que permita distinguir los documentos del expediente en cuanto a su contenido debido a que, por un lado, se considera procedente la reserva de las notas diplomáticas relacionadas, en cumplimiento del principio de inviolabilidad reconocido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el artículo 13, fracción II de la Ley de la materia. Sin embargo, por otro lado se instruye la entrega de 55 documentos consistentes en correos electrónicos, memorándums y oficios relacionados con el mismo expediente.

Por tal motivo, al no existir ese elemento de distingo que permita conceder certeza para dar publicidad a la información en la forma en que se propone, consideró que dichos elementos documentales al encontrarse relacionados con la ejecución de resoluciones del Consejo de la ONU, deberían ser susceptible de clasificación al igual que las notas diplomáticas que se encuentran inmersas en el mismo.

Por tanto, la decisión de proporcionar tal información no puede basarse únicamente en la nomenclatura de los documentos o en el hecho de que de la revisión de los mismos no se advierte que hayan sido tildados con la leyenda confidencial o clasificados con tal carácter por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Finalmente, señaló que tanto las notas diplomáticas como los documentos cuya entrega se pretende, son susceptibles de reserva en términos del artículo 13, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que se usan indistintamente negociaciones internacionales con relaciones internacionales y no es lo mismo. Una negociación en curso tiene que ver con una posición que coloca en bilateral o en multilateralidad inclusive a un conjunto de Estados respecto de un objetivo concreto y específico, que está todavía vigente y que se mantiene en tensión; es decir, en construcción para llegar a una solución.

Las relaciones son capítulo genérico, que tiene que ver con el trato obsesivo de una concordia o de buena voluntad, o de buen interés, estoy de acuerdo. Pero hay otro elemento más interesante, no se está proponiendo que se abran completa y absolutamente todos los correos, se está ofreciendo una versión pública y la versión pública en este caso la tendría que hacer la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lo que se ofrece no es la apertura total de estos documentos sino de las partes que pudieran quedar exentas de una versión pública que cuidara, todavía en segunda oportunidad, pulcritudes que pueden sí, en disección, en extracto, poner en conflicto situaciones de interpretación relacionadas con relaciones internacionales.

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto de resolución y los Comisionados acordaron:

- Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, no aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 1845/16, interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500020216) (Comisionada Kurczyn).
  Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez.

Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora aprobar la resolución del recurso de revisión número RDA 1845/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500020216), instruyendo al sujeto obligado a clasificar 48 documentos consistentes en correos electrónicos, memoranda y oficios diversos, con fundamento en lo establecido en el artículo 13, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y quedando el resto del proyecto en sus términos, específicamente por cuanto hace a las notas diplomáticas.
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez.
La ponencia del Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford se encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión número RDA 1845/16.

- A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 1912/16, interpuesto en contra de la respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300014516), señalando que se requirió diversa información relacionada con el diagnóstico detallado sobre los sueldos y el catálogo de prestaciones que actualmente reciben los policías municipales y estatales de todo el país, así como la propuesta de salario mínimo policial y de prestaciones básicas.

  En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada se encontraba clasificaba como reservada con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13, fracciones I y V, y 14, fracción VI de la Ley de la materia.

  Inconforme con dicha respuesta, la particular interpuso recurso de revisión manifestando como agravio la clasificación de la información por parte del sujeto obligado.

  Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Acuña, se propone modificar la respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública e instruirle a que entregue versión pública de los documentos que dan cuenta de lo requerido por el particular.

  La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló no compartir el análisis realizado en el proyecto propuesto, por cuanto hace a la procedencia de la clasificación de la información con fundamento en el artículo 14, fracción VI de la Ley de la materia, que prevé que es reservada la

información que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte de un proceso deliberativo de servidores públicos en trámite, pues para que se actualice la citada causal de reserva es necesario que exista un proceso deliberativo; que la información concierne a opiniones, recomendaciones o puntos de vista; que se presenten de un proceso deliberativo y que no se haya tomado una determinación final.

En cuanto al primer requisito, señaló coincidir con el proyecto que se actualiza en tanto que la documentación requerida se solicitó para dar cumplimiento al acuerdo por medio del cual se le instruyó al sujeto obligado la elaboración de una propuesta de salario mínimo policial y dicha propuesta no ha sido llevada ante el Consejo para su aprobación.

Por cuanto hace al segundo elemento, el proyecto señala que la información materia de la solicitud contiene observaciones respecto de los salarios de los policías de las 32 entidades federativas que forman parte de un proceso deliberativo que lleve a cabo el sujeto obligado para dar cumplimiento al citado acuerdo, pero el contrato ya fue cumplido por parte de la empresa y por consiguiente, el estudio de mérito fue entregado al Secretario Ejecutivo.

Por lo que respecta al tercer requisito, el proyecto sugiere que los entregables son parte fundamental para la toma de decisión que en su momento adopte el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero aun cuando el proceso deliberativo instaurado por el sujeto obligado no ha concluido, la información solicitada no constituye opiniones o recomendaciones propias de éste pues se trata únicamente de un insumo de utilidad para la deliberación que, de ninguna manera, da cuenta de las opiniones o recomendaciones pues se trata del resultado de una etapa previa finalizada, la cual culminó con la entrega de los documentos en cuestión.

Por lo tanto, la Comisionada Cano señaló que emitiría un voto disidente al considerar que no se actualiza la causal de reserva prevista en la fracción VI del artículo 14 de la Ley de la materia.

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó no coincidir con la reserva propuesta por el Comisionado Acuña, pues la información solicitada no puede considerarse en sí misma como un proceso deliberativo ya que resultan ser insumos. Si bien estos documentos se dan en plazos para iniciar un proceso deliberativo para la posible mejora de los salarios de los propios de Seguridad Pública a nivel nacional, lo cierto es que sólo son documentos de apoyo e insumos para la posterior deliberación.

En ese sentido, el Comisionado Guerra anunció que de aprobarse el proyecto tal y como se presenta, emitiría un voto disidente.

El Comisionado Joel Salas Suárez señaló que en congruencia con el sentido de su voto en asuntos precedentes, como lo fue la resolución del expediente RDA 4309/15, en contra de Presidencia de la República y el RDA 0995/15, en contra del propio sujeto obligado, estima que los entregables tres, cuatro y cinco sólo constituyen insumos informativos y que no se relacionan directamente con la deliberación que está a cargo de servidores públicos, por lo cual votaría en contra del proyecto, emitiendo un voto disidente.

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó coincidir con el proyecto propuesto, ya que se modificaría la respuesta a efecto de que el sujeto obligado entregue la versión pública del referido contrato y remita el anexo de dicho instrumento legal; que informe la fuente y la forma para consultar los entregables 1 y 2; entregue la versión pública de los anexos de los entregables 1 y 2, con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley de la materia.

Son entregables, por lo tanto 3, 4 y 5, que ya fueron proporcionados al sujeto obligado, pero los otros que su contenido no ha sido sometido a consideración del Consejo Nacional de Seguridad Pública, consideró que no deben divulgarse hasta en tanto no los haya aprobado el propio Consejo.

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto de resolución y los Comisionados acordaron:

- Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, aprobar la resolución del recurso de revisión número RDA 1912/16, en la que se modifica la respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300014516) (Comisionado Acuña).
  Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez.

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 1997(RDA 2007 y RDA 2256)/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Economía (Folios Nos. 0001000013316, 0001000016916 y 0001000022816) (Comisionada Cano).

- El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 2033/16, interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100728116), señalando que se requirió el listado con nombre y categoría del personal que obtuvo crédito hipotecario, crédito a mediano plazo y crédito de automóvil en los estados de Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México, separada por estado, para el período del 6 de mayo de 2013 al 29 de mayo de 2016 y las fechas de presentación de las solicitudes.

  En respuesta, el sujeto obligado proporcionó el listado de su personal que obtuvo algún crédito, indicando el tipo de crédito hipotecario, a mediano plazo, de automóvil y la Delegación a la que corresponde de los estados de Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México.

  El particular se inconformó porque la identificación del estado no era la correcta porque se da por números "08", "09" y en ese sentido, consideraba que no había dado la información de las entidades federativas solicitadas, ante lo cual interpuso recurso de revisión.

  En respuesta complementaria, durante la sustanciación, el sujeto obligado corrigió el dato y precisó al particular que la información remitida sí correspondía a la entidad de su interés.

  Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Guerra Ford se propuso revocar la respuesta del sujeto obligado, para que el Comité de Información emita y notifique una resolución fundada y motivada en la que deberá clasificar el nombre del personal que tuvo algún tipo de crédito en las Delegaciones de los estados de Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México, dando vista al Órgano Interno de Control en virtud de que el Instituto Mexicano del Seguro Social entregó información de carácter confidencial.

  El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó no compartir el sentido del proyecto, ya que concluye que el sujeto obligado no debió entregar los nombres de funcionarios que obtuvieron créditos, por lo que propone modificar la respuesta con el propósito de que emita el acta de Comité que confirme la confidencialidad de estos datos, además de que se propone dar vista al Órgano Interno de Control derivado de la entrega de información confidencial.

  A este respecto, señaló que la difusión de los nombres de quienes obtuvieron créditos favorecería la rendición de cuentas sobre el otorgamiento de los mismos, pues en principio debe tomarse en cuenta que los créditos derivan del ejercicio de prestaciones de servidores públicos; los créditos estriban sobre la condición de funcionarios, por lo

que dar a conocer los nombres permitiría conocer que los créditos son otorgados justamente a servidores públicos que cumplen con los requisitos para que les sea otorgado dicho préstamo.

La información solicitada permite conocer la actuación del sujeto obligado respecto de las condiciones de asignación, verificación de requisitos, cumplimiento de procedimientos, selección, etcétera, no debe olvidarse además que los créditos en sí mismos contemplan una relación contractual entre el sujeto obligado y el acreditado, información que también se prevé como una propia obligación de transparencia.

Por lo anterior, consideró que el sujeto obligado entregó información pública y no así que entregó información confidencial sin el consentimiento de los titulares, ante lo cual manifestó la emisión de un voto disidente con el proyecto.

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló compartir el sentido del proyecto, así como los argumentos expuestos por parte de no dar publicidad a los nombres de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que obtuvieron un crédito.

Al respecto, consideró que los nombres de los servidores que recibieron un préstamo refleja la voluntad de la persona para solicitarlo, lo que se traduce en una decisión en relación con su patrimonio para decidir, pues decidieron solicitar un préstamo en las categorías antes mencionadas.

En este orden de ideas, coincidió con la protección del nombre de los servidores públicos que recibieron un préstamo, pues si bien éstos ven constreñido su ámbito de privacidad por las funciones que desempeñan, ello no significa que no gocen del derecho fundamental de protección de sus datos personales, sobre todo tratándose de información sobre su situación patrimonial que da cuenta de su vida privada.

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que en este caso sí evidenciaría innecesariamente el nombre del acreditado una situación o condición patrimonial.

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto de resolución y los Comisionados acordaron:

- Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, aprobar la resolución del recurso de revisión número RDA 2033/16, en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100728116) (Comisionado Guerra).

Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez.

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2035/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100046916) (Comisionado Monterrey).

- A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 2247/16, interpuesto en contra de la respuesta de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700013416), señalando que se requirieron 30 contenidos de información relacionada con la baja de servidores públicos por la reducción de la estructura orgánica.

  En respuesta, el sujeto obligado declaró la inexistencia de diversos contenidos de información. Asimismo, confirmó la reserva respecto de otros con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción VI de la Ley de la materia, y finalmente proporcionó diversa información.

  Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión manifestando como agravio la negativa de acceso a la información.

  Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Salas, se propone modificar la respuesta de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, e instruirle a efecto de que entregue al particular la resolución que confirme la inexistencia de la información solicitada respecto de algunos contenidos. De igual forma deberá realizar una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, a efecto de localizar y entregar al particular los documentos que den cuenta de lo requerido en otros contenidos de información.

  La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que emitiría un voto particular sobre la consideración de formalizar la figura de la inexistencia.

  Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto de resolución y los Comisionados acordaron:

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2247/16, en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700013416) (Comisionado Salas). Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la Comisionada Areli Cano Guadiana.

- La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 2265/16, interpuesto en contra de la respuesta de la Policía Federal (Folio No. 0413100025016), señalando que se requirió, con relación a los hechos de Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de 2015, el informe o el reporte, o datos de investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal.

  En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada se encuentra bajo el rubro temático de Investigación Sobre el Cumplimiento de las Obligaciones de los Integrantes y que, por lo tanto, está reservada en términos del artículo 14, fracción VI de la Ley de la materia, bajo el argumento que, de entregarla, afectaría el desarrollo y cumplimiento de las actuaciones, así como su conclusión, pues la Unidad de Asuntos Internos realiza funciones de inspección e investigación a fin de detectar deficiencias e irregularidades de las distintas áreas, observando el cumplimiento de las obligaciones de sus integrantes así como las faltas en la aplicación de procesos administrativos, por lo que todas las investigaciones que son sustanciadas en dicha Unidad de Asuntos Internos forman parte de un proceso deliberativo.

  Ante lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión, señalando que la información que requirió tiene que ver con violaciones graves a derechos humanos y que, por lo tanto, procedía su entrega.

  Derivado del análisis realizado en la ponencia de la Comisionada Kurczyn Villalobos, propuso modificar la clasificación invocada por la Policía Federal, pues en relación al Informe y al Reporte de la investigación que fueron solicitados, el sujeto obligado modificó su respuesta y declaró la inexistencia de dichos documentos. No obstante, omitió declararla formalmente, razón por la cual se propone instruir a la Policía Federal a efecto de que su Comité de Información confirme dicha inexistencia.

  Por otra parte, respecto a los datos de la investigación de la Unidad de Asuntos Internos, se determinó que el Acuerdo de Inicio de Investigación de fecha 19 de abril de 2015 es la expresión documental que da respuesta a la solicitud del particular toda vez que por medio del documento en cita se da a conocer la Unidad Administrativa en la que se lleva a cabo la investigación, así como la fecha y el número de expediente que se le asignó al asunto, el servidor público encargado, los datos y oficio que dan origen a la investigación, la Unidad Administrativa que lo suscribió y la descripción de los actos que originaron su emisión, así como la descripción de los volantes con los que se gestionó e incluso la descripción de las actuaciones y diligencias que se llevarán a cabo dentro del expediente. Es decir, los datos que requiere el particular son los que identifican dicha investigación, no así las constancias de la misma.

Sin embargo, el sujeto obligado clasificó dichos documentos en términos de los artículos 13, fracciones I, IV y V; 14, fracciones IV y VI, y 18 de la Ley de la materia.

Por lo que se refiere a la procedencia de la clasificación, en términos de los artículos 13, fracción I; 14, fracciones IV y VI, así como 18, fracciones I y II de la Ley citada, se pudo determinar que la información contenida en el Acuerdo de Inicio de Investigación no actualiza dichas causales invocadas por el sujeto obligado. No obstante, en relación a la causal prevista en la fracción IV del artículo 13 de la Ley de la materia, debe señalarse que en el Acuerdo de Inicio de la Investigación constan el nombre y firma del Director General de Investigación Interna de la Unidad de Asuntos Internos así como de un Suboficial y un Oficial dentro de los cuales se encuentra el servidor público encargado de la investigación.

En ese sentido, toda vez que los nombres y la firma de esos servidores públicos contenidos en el acuerdo de inicio de la investigación corresponden a personal operativo adscrito a la Dirección General de Investigación Interna de la Unidad de Asuntos Internos del sujeto obligado, se determinó que procede la reserva de dicha información, pues la revelación podría colocarnos en una situación de vulnerabilidad al poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares, ya que al ser identificados podrían verse amenazados o presionados dado que están obligados a cumplir en todo momento el seguimiento y vigilancia de los procedimientos de investigación y, en su caso en el cumplimiento de las sanciones impuestas a los integrantes de la Policía Federal.

Por otra parte, respecto a la procedencia de la clasificación en términos del artículo 13, fracción V de la Ley de la materia, se advirtió que no toda la información que contiene el acuerdo de inicio de investigación actualiza dicha causal. Sin embargo, el acuerdo tercero del referido documento contiene la instrucción para efectuar las actuaciones y diligencias necesarias con el objeto de dar inicio a la investigación correspondiente, en las que se incluye a descripción específica de cada una de ella y su objetivo.

Por lo cual es posible advertir el tipo de información que será requerida para dar inicio a la investigación, aunado a que se podrían desprender las propias líneas de investigación. Al respecto, toda vez que la información contenida en dicho punto se refiere claramente a la investigación de infracciones al régimen disciplinario o por incumplimiento a los requisitos de permanencia previstos en la Ley de la Policía Federal, se puedo concluir que el primero de los supuestos para actualizar dicha causal se encuentra acreditado y que se constató la existencia de un procedimiento

de verificación al cumplimiento de leyes. Asimismo, derivado de que contiene la descripción específica de cada una de las diligencias a realizar por la Dirección General de Investigación Interna respecto de la investigación que motivo la apertura del expediente, se advierte que el segundo de los elementos para la procedencia de la clasificación se encuentra acreditado, ya que la información contenida en dicho punto del acuerdo de inicio se encuentra directamente vinculada con las actividades que respecto del mismo realiza la actividad que las lleva a cabo.

En ese sentido, es importante reiterar que el procedimiento que se está llevando a cabo la Dirección General de Investigación Interna, actualmente se encuentra en etapa de investigación, en la que deben realizarse las actuaciones y diligencias referidas en el acuerdo tercero ya citado para poder determinar la existencia de elementos que puedan configurar una infracción de los integrantes de la Policía Federal, una infracción al régimen disciplinario o un incumplimiento a los requisitos de permanencia. Por lo anterior, se advierte que la difusión de la documentación podría entorpecer el procedimiento de investigación llevado a cabo por dicha Dirección General. Por lo tanto, el tercero de los elementos para la procedencia de la clasificación se encuentra acreditado.

En ese sentido, en el proyecto se concluye que procede la reserva de la información contenida en el acuerdo tercero del acuerdo de inicio de la investigación, con fundamento en el artículo 13, fracción V de la Ley de la materia, toda vez que publicitar dicha información puede causar un perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de leyes, instruyendo que se entregue versión pública del acuerdo de inicio de la investigación del 19 de abril de 2015, contenido en el expediente radicado en la Unidad de Asuntos Internos, en el cual únicamente se deberá testar el nombre y la firma del Director General de Investigación Interna de la Unidad de Asuntos Internos, así como de un suboficial y un oficial adscritos a dicha Unidad, así como la información contenida en el acuerdo Tercero del Acuerdo de Inicio de la Investigación.

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que este tema debe abrirse por interés público, ya que de las constancias que obran en el expediente que se actúa, no es posible determinar si en efecto se actualiza el supuesto invocado por la Policía Federal, ya que ésta manifestó que el procedimiento inició el 19 de abril del 2015, y en dicho documento se encuentran las actuaciones y diligencias necesarias para dar inicio a la investigación correspondiente, de tal suerte que no se cuentan con los elementos objetivos que permitan desprender si esas diligencias ya se llevaron a cabo por parte del personal de la Policía Federal, considerando que hace más de un año inició la investigación.

Lo anterior, resulta toral para poder determinar si podría actualizarse la reserva invocada y, con ello, poder concluir que en efecto se podrían obstaculizar las actividades de investigación que se encuentran realizadas por la Dirección General de Investigación Interna en relación con la Ley Federal de la Policía Federal, pues ello sólo ocurrirá si las diligencias aún no se han practicado.

Aunado a lo anterior, de la propia recomendación número 3BG/2015, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se desprende que existen diversos oficios emitidos por la Comisión Nacional de Seguridad, en los que se advirtió que el 29 de abril de 2015 se dio vista a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, de una grabación de los hechos ocurridos el 6 de enero de este año, respecto de las probables conductas irregulares que incurrieron servidores públicos de esta institución, a fin de determinar la existencia de responsabilidad administrativa. Asimismo, el 4 de mayo la Comisión Nacional de Seguridad informó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el 18 y 19 de abril de 2015, se dio vista a fin de que se realizaran las investigaciones convenientes que, conforme a derecho proceda, al agente del ministerio público de la federación y al titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal.

El 25 de septiembre de 2015, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal manifestó que se había llevado a cabo una diligencia a las 7:30 horas, en el lugar de los hechos e informó la estructura de la cadena de mando con los nombres, grados y adscripción de los servidores públicos involucrados en los hechos, así como los tipos de armas que portaban, marca, matrícula, calibre y el número de cartuchos que se percutieron.

De lo anterior se puede concluir que hay fechas coincidentes respecto del inicio de investigación por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal y de las propias manifestaciones emitidas por parte del sujeto obligado que se han llevado a cabo, diligencias posteriores a la fecha de inicio de investigación en el lugar de los hechos.

Por lo anterior, en el proyecto que se presenta no se advierten los suficientes elementos objetivos para concluir que las líneas de investigación podrían verse obstruidas si no contamos con datos tan esenciales como el hecho de saber si estas diligencias de investigación ya se llevaron a cabo por parte de la Unidad de Asuntos Internos. Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó como violaciones graves a los Derechos Humanos los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015.

Si bien los hechos que está investigando la Policía Federal como faltas administrativas tienen como objetivo el acreditar la probable responsabilidad de una acción u omisión de los policías involucrados, estas conductas tuvieron como resultado el uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de la vida de cinco personas así como la ejecución extrajudicial de una persona, por lo que por interés público, tenía que entregarse una versión pública en la que únicamente se proteja los nombres del personal operativo que llevó a cabo la investigación así como las víctimas involucradas.

En este sentido, señaló que emitiría un voto disidente, pues a su consideración no se cuenta con los elementos suficientes para determinar si las actividades o diligencias que se refieren en el documento requerido ya se llevaron a cabo, lo cual es indispensable para determinar si podría generarse un daño al procedimiento de verificación en el cumplimiento de leyes, y por otro lado, al investigarse conductas que derivaron de violaciones graves a derechos humanos debe proporcionarse por el interés público que reviste la información.

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló que coincidía con los argumentos de la Comisionada Cano, pues debe destacarse que el acuerdo de inicio en el que obra la información que se ordena testar data del 19 de abril de 2015, lo que permitiría inferir que las actuaciones y diligencias que se instruyeron en el acuerdo en comento ya probablemente fueron realizadas. Por interés público de los acontecimientos podría y debiese entregarse una versión pública de este documento.

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto de resolución y los Comisionados acordaron:

- Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, aprobar la resolución del recurso de revisión número RDA 2265/16, en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal (Folio No. 0413100025016) (Comisionada Kurczyn).
  Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana y Óscar Mauricio Guerra Ford.

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2269/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400055816) (Comisionado Acuña).

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2451/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600092516) (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2481/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600088316) (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2519/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100957516) (Comisionada Presidente Puente).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2544/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200090116) (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2546/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100146216) (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2660/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. (Folio No. 0917500000816) (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2683/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100491816) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2698(RDA 2700)/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de la República (Folios Nos. 0001700103116 y 0001700103316) (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2704/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100052916) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2737/16 en la que se modifica la respuesta del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Folio No. 1115000008616) (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2804/16 en la que se revoca la respuesta de PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500073716) (Comisionada Kurczyn).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2826/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100738316) (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2839/16 en la que se modifica la respuesta de PEMEX Transformación Industrial (Folio No. 1867900035216) (Comisionada Kurczyn).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2871/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700067416) (Comisionado Acuña).

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2873/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700067516) (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2893/16 en la que se modifica la respuesta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000017916) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2923/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100692416) (Comisionada Kurczyn).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2927/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900117416) (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2928/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Energía (Folio No. 0001800031616) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2937/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Cultura (Folio No. 1114100024416) (Comisionada Kurczyn).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2955/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700073516) (Comisionado Acuña).

- El Comisionado Joel Salas Suárez presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 2996/16, interpuesto en contra de la respuesta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500012116), señalando que se requirió el Diagnóstico Inicial y las Propuestas de Programa de Trabajo, Calendario y Presupuestos que establece el Protocolo para la Implementación de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas respecto de la siembra de soya genéticamente modificada en municipios de Campeche.

  En respuesta, el sujeto obligado señaló que utilizó varios instrumentos como diagnóstico y proporcionó los vínculos electrónicos al Catálogo de Comunidades Indígenas en el Estado de Campeche, la Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas Local, la Resolución de la Suprema Corte de Justicia respecto al Amparo en Revisión 410/2015 y la Recomendación número 23/15 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Respecto al Calendario de Consulta, informó que tiene programada la Segunda Reunión de Actores Previos con las comunidades del municipio de Hopelchén y que una vez que se establezcan acuerdos con las comunidades indígenas, se elaborará un Calendario para el resto de los municipios.

Ante lo anterior el particular interpuso recurso de revisión, pues consideró que los vínculos electrónicos no contienen la información que solicitó.

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Salas se advirtió que el agravio del particular es fundado, pues los documentos entregados por la CDI no cumplen con los parámetros definidos en el protocolo para la implementación de la consulta a pueblos y comunidades Indígenas para la realización de un diagnóstico inicial.

Este proceso persigue diversos propósitos:
Uno. Ser una guía general de la ruta que seguirá el proceso.
Dos. Obtener la información básica, de carácter técnico, sustantivo del proyecto.
Tres. Hacer un primer acercamiento a los impactos positivos y negativos del proyecto en la población.
Cuatro. Caracterizar a los actores que podrían estar inmersos o tener algún interés o influencia en el proyecto.
Cinco. Identificar posibles obstáculos para la consecución de acuerdos y, en su caso, identificar antecedentes y estado actual de conflictividad relativa al proyecto.

La información proporcionada al particular no constituye un documento de diagnóstico en sí. Los documentos de los vínculos electrónicos solo instruyen y brindan al sujeto obligado las máximas generales para que se realice una consulta previa de las comunidades indígenas involucradas en este caso. Además, se advirtió que no se realizó una búsqueda exhaustiva de la información, ya que la comisión omitió turnar la solicitud a unidades administrativa que pudiesen ser competentes.

Este recurso es relevante, porque el derecho de acceso a la información permitirá a las autoridades competentes demostrar que cumplen con el principio de pluriculturalidad consagrado en el artículo 2 Constitucional y en el Convenio 169 de la OIT, con el que se comprometió México y mediante el cual el Estado Mexicano garantiza que no tomará acciones que pongan en riesgo la vida y florecimiento de los pueblos originarios.

Desde 2012 comunidades mayas de Campeche denunciaron la violación a este principio a causa de la siembra de soya transgénica en sus territorios autorizada a la Empresa Transnacional Monsanto, sin que las comunidades mayas estuvieran al tanto y lo consintieran por parte de la SAGARPA, con el aval de la propia SEMARNAT. Existen denuncias de que el cultivo de soya transgénica inició desde 2001 y se han comprobado daños a las actividades de las comunidades y que por generaciones les han asegurado un desarrollo humano sustentable.

El cultivo de soya transgénica demanda deforestación de grandes extensiones de tierra y el uso de plaguicidas como el glifosato que matan a las abejas generadoras de la miel que provee sustento a gran parte de estas comunidades y cuya función polinizadora es clave en la preservación de especies de la selva maya. De acuerdo con Fundar, de permitirse este cultivo en 253 mil 500 hectáreas, se afectarían a más de 15 mil familias a pico, las campesinas e indígenas y se destruiría su patrimonio bicultural y podría tener daños ambientales irreparables.

La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró que a varias comunidades indígenas de estos estados les fue violado el derecho a la consulta libre, previa e informada y culturalmente adecuada en relación al tema, por lo que emitió una recomendación a la SAGARPA y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. Las comunidades mayas de Campeche y Yucatán se han mantenido activas denunciando la violación a este derecho y en octubre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio la razón mediante un fallo histórico contra la propia SAGARPA.

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas debe brindarles asesoría técnica y metodológica para asegurar un diálogo constructivo entre las partes.

La información pública es un insumo para construir el México que todos deseamos, un país incluyente de todas sus comunidades y que trabajan en conjunto para fomentar el desarrollo económico sin detrimento del medio ambiente. La información pública es la vía para que las autoridades competentes demuestren que llevan a cabo la consulta, según lo establecido en el Protocolo respectivo.

Los sujetos obligados, acompañados por este Instituto, podrían implementar una estrategia de transparencia proactiva, publicando información en formatos accesibles, compresibles y suficientes para facilitarles a estas comunidades el acceso a la información. Un ejercicio de apertura gubernamental de esta naturaleza podría no tener precedentes en el país y probaría el compromiso de todos estos sujetos obligados para trabajar en colaboración con la población para construir este México justo que todos deseamos.

Por tanto, el Comisionado Salas propuso modificar la respuesta de la CDI e instruirle buscar exhaustivamente en todas las unidades administrativas que puedan considerar competentes el diagnóstico inicial en relación con la consulta pueblos y comunidades indígenas respecto de la siembra de soya genéticamente modificada en el estado de Campeche para que ésta sea entregada al particular.

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución y los Comisionados acordaron:

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2996/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500012116) (Comisionado Salas).

- A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 3003/16, interpuesto en contra de la respuesta de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200005916), señalando que se requirieron los documentos, fichas técnicas, estadísticas y propuestas generadas para atender el fenómeno relativo al robo de identidad.

  En respuesta, el sujeto obligado señaló al particular que respecto de la estadística de las quejas atendidas relacionadas con el robo de identidad, se habían recibido 58 quejas. Asimismo, informó que dichos expedientes están clasificados como reservados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 13, fracción V y 18, fracciones I y II de la Ley de la materia.

  Inconforme con la respuesta, la particular interpuso recurso de revisión manifestando como agravio la clasificación de la información.

  Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Salas, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle a que realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida a efecto de localizar y entregar al particular las estadísticas relacionadas con el robo de identidad. De igual forma, deberá poner a disposición del particular versión pública de las constancias que integran los expedientes de queja concluidos.

  La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó ir a favor del proyecto, emitiendo un voto particular, en el sentido de no reservar la totalidad de las constancias que integran el expediente en trámite, toda vez que las constancias que no constituyen pruebas o promociones, es decir las diligencias que realiza la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en ejercicio de sus funciones, su difusión no traería consigo una afectación al bien jurídico tutelado previsto en el artículo 14, fracción IV de la Ley de la materia ya que esta causal protege el buen curso del procedimiento administrativo y la publicidad de la información no obstaculiza la determinación de la autoridad resolutoria.

De lo anterior, consideró necesario conocer las constancias que integran cada uno de los expedientes que no afectan el resultado del procedimiento, pues en su caso estas no actualizarían el supuesto de reserva previsto en el artículo 14, fracción IV y hubiese sido procedente una versión pública de las mismas.

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló ir a favor del proyecto, pero emitiendo un voto particular.

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto de resolución y los Comisionados acordaron:

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3003/16, en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200005916) (Comisionado Salas).
  Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los Comisionados Areli Cano Guadiana y Óscar Mauricio Guerra Ford.

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3019/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700170616) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3025/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría Agraria (Folio No. 1510500007716) (Comisionado Acuña).

- El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 3046/16, interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101223716), señalando que se requirieron las quejas y/o inconformidades ocurridas del 2004 a lo que va del año 2016 en las que se haya dictaminado en contra del médico.

  En respuesta, el sujeto obligado proporcionó una estadística en la que le reconoció al solicitante que del total de quejas presentadas del 2004 al 30 de abril de 2016, fecha en que fue realizada o se llevó a cabo la solicitud, asciende esa cifra a 73 mil 403 casos de quejas de personas en contra de algún tipo de servicio médico, ante lo cual el particular presentó recurso de revisión, por no estar conforme con la respuesta proporcionada.

  Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Acuña, se propuso modificar la respuesta al Instituto Mexicano del Seguro Social e instruirle que proporcione el nombre de aquellos médicos que hayan sido

sancionados en virtud de una resolución derivada del trámite de queja administrativa.

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos señaló estar de acuerdo en que dar a conocer el nombre de médicos respecto de un problema de carácter profesional, por muchas razones podría ser infundado y esto perjudicar terriblemente la condición profesional de un médico, que lo puede llevar inclusive a perder no solamente la clientela, sino a lo mejor hasta la cédula profesional.

Pero al mismo tiempo, cuando se trata de temas de salud es evidente que tenemos que señalar a aquellos médicos que actúan negligentemente o aquellos médicos que muchas veces sin tener conocimientos deciden hacer cirugías o dar tratamientos para los cuales no están preparados.

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto de resolución y los Comisionados acordaron:

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3046/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101223716) (Comisionado Acuña).

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3056/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101187416) (Comisionada Kurczyn).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3073/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1117100027416) (Comisionado Salas).

- El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 3078/16, interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101066916), señalando que se requirió, respecto a los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Verde Ecologista para los años 2012, 2013 y 2014, diversa información relacionada con cuotas obrero-patronales y de seguridad social liquidadas por estos institutos políticos al sujeto obligado.

  En respuesta, el sujeto obligado indicó que la información requerida por el particular respecto al entero de cuotas obrero-patronales se encontraba clasificada como reservada con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el diverso 22 de la Ley del Seguro Social, además de declararse incompetente para pronunciarse respecto al número de personas físicas

contratadas bajo el régimen de sueldos y salarios, honorarios profesionales, así como el monto de pago del Impuesto Sobre Nómina, aquel respecto de cada uno de los regímenes fiscales y remuneraciones por actividades políticas pagadas, circunstancia en relación con lo cual, se consideró correcta tal determinación y la orientación al Servicio de Administración Tributaria.

Ante lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión, impugnando la clasificación de la información en posesión del IMSS, debido a que señaló que varios requerimientos se refieren, incluso, a información estadística que no puede estar sujeta a reserva.

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Monterrey, se advirtió que en el caso concreto, si bien la información solicitada se trata de obligaciones que los partidos deben cumplir derivado de la relación laboral con su personal, lo cierto es que resulta de interés público conocer el gasto que realizan como patrones frente al IMSS ya que se trata de recursos que son erogados con cargo al financiamiento público, que tienen derecho a recibir de conformidad con el artículo 41 de la Constitución.

Asimismo, se advirtió que para el caso concreto se supera la reserva aludida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en términos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el diverso 22 de la Ley del Seguro Social.

En consecuencia, el comisionado Monterrey propuso modificar la respuesta emitida por el IMSS e instruirle a que entregue respecto de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Verde Ecologista para los años 2012, 2013 y 2014, versión pública de la cédula de liquidación de la nómina y el dictamen fiscal de cuotas obrero-patronales, en donde identifique si la opinión fue favorable o bien el documento con el que se pruebe la vista domiciliaria o revista directa en los que únicamente se protejan datos personales.

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó que la transparencia reduce el impacto electoral de las aportaciones que reciben los partidos políticos al requerir que divulguen información detallada acerca del origen y monto de donaciones y gasto, incluso de contribuciones en especie.

Si bien este recurso fue interpuesto ante el IMSS, es necesario recordar que los partidos políticos reciben considerables cantidades de recursos públicos por los que hoy ya son sujetos obligados de la nueva legislación en materia de transparencia, concretamente la Ley General de Transparencia, que establece en su artículo 76, fracción XVI que los

partidos políticos están obligados a publicar y a actualizar el tabulador de remuneraciones que perciben sus funcionarios.

Esto significa que el público, una vez conociendo esta información, puede solicitarles mayores detalles en cuanto a la obligación de sus obligaciones fiscales relacionadas con estos pagos, lo cual debería ser atendido por los partidos en aras de mejorar su legitimidad a partir de procesos reales de rendición de cuentas.

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto de resolución y los Comisionados acordaron:

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3078/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101066916) (Comisionado Monterrey).

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3081/16 en la que se revoca la respuesta de Liconsa, S.A. de C.V. (Folio No. 2014300005316) (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3082/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500084616) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3084/16 en la que se modifica la respuesta de PEMEX Transformación Industrial (Folio No. 1867900035016) (Comisionada Kurczyn).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3094/16 en la que se confirma la respuesta de PEMEX Transformación Industrial (Folio No. 1867900037816) (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3097/16 en la que se confirma la respuesta del Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100035116) (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3106/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600156516) (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3113/16 en la que se confirma la respuesta de Nacional Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000124416) (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3114/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100098816) (Comisionada Presidente Puente).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3131/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000028216) (Comisionada Cano).

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3143/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100136716) (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3153/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100028416) (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3154/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700191816) (Comisionada Kurczyn).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3162/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400053116) (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3167/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700208316) (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3168/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700208416) (Comisionada Kurczyn).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3169/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700208516) (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3170/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700208716) (Comisionada Presidente Puente).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0008/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300009816) (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0021/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900137616) (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0023/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1117100045516) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0032/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800102616) (Comisionada Kurczyn).

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0034/16 en la que se confirma la respuesta de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Folio Inexistente) (Comisionada Presidente Puente).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0036/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700021316) (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0037/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800102616) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0048/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Cultura (Folio No. 1114100028516) (Comisionada Presidente Puente).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0050/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300009916) (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0052/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300010116) (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0065/16 en la que se revoca la respuesta de PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500097716) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0078/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600177216) (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0083(RRA 0084)/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folios Nos. 0000900134316 y 0000900134316) (Comisionada Presidente Puente).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0087/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600167816) (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0091/16 en la que se revoca la respuesta de la Cámara de Diputados (Folio No. 0120000002016) (Comisionado Salas).
  En la siguiente resolución no participó el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, en virtud de la excusa aprobada en la presente sesión.
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0095/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800112216) (Comisionada Kurczyn).

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0099/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200028816) (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0100/16 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. (Folio No. 6017100002316) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0101/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800111316) (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0110/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de Cancerología (Folio No. 1221500009716) (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0112/16 en la que se confirma la respuesta de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Folio No. 0908500009216) (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0116/16 en la que se revoca la respuesta de la Auditoría Superior de la Federación (Folio No. 0110000006316) (Comisionada Kurczyn).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0117/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600171416) (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0118/16 en la que se modifica la respuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000008316) (Comisionada Presidente Puente).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0119/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700105316) (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0128/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 1615100020516) (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0159/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud (Folio No. 0001200204816) (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0161/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800111116) (Comisionado Salas).

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0182/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700085516) (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0196/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800106816) (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0200/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud (Folio No. 0001200211416) (Comisionada Kurczyn).

c) Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los Comisionados:

II. Acceso a la información pública

- Aprobar por unanimidad la resolución de la verificación por falta de respuesta número VFR 0029/16 interpuesto en contra de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Folio No. 1507500007016), en la que se determina poner fin al procedimiento (Comisionado Acuña).

d) Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los Comisionados:

Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la Ley, a fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos suficientes para abordar el asunto y se allegue de la información necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose al comisionado ponente para que determine el día, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma como representante, además de poder acceder a la información clasificada, respecto de los siguientes recursos de revisión:

I. Protección de datos personales

- Recurso de revisión número RPD 0435/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100910216) (Comisionado Acuña).
- Recurso de revisión número RDA-RCPD 2864/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100107716) (Comisionado Acuña).

II. Acceso a la información pública

- Recurso de revisión número RDA 2641/16 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700083816) (Comisionada Cano).
- Recurso de revisión número RDA 2645/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100078416) (Comisionada Presidente Puente).
- Recurso de revisión número RDA 2708/16 interpuesto en contra de la Procuraduría Federal del Consumidor (Folio No. 1031500022916) (Comisionada Presidente Puente).
- Recurso de revisión número RDA 2726/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100085616) (Comisionado Guerra).
- Recurso de revisión número RDA 2733/16 interpuesto en contra de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V (Folio No. 0917600002216) (Comisionado Guerra).
- Recurso de revisión número RDA 2740/16 interpuesto en contra de PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500029616) (Comisionado Guerra).
- Recurso de revisión número RDA 2741/16 interpuesto en contra de Nacional Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000102516) (Comisionada Kurczyn).
- Recurso de revisión número RDA 2752/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100795516) (Comisionado Acuña).
- Recurso de revisión número RDA 2794/16 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100033416) (Comisionado Acuña).
- Recurso de revisión número RDA 2825(RDA 2834)/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folios Nos. 1615100014116 y 1615100014416) (Comisionada Kurczyn).
- Recurso de revisión número RDA 2855/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700118816) (Comisionada Presidente Puente).
- Recurso de revisión número RDA 2891/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400035316) (Comisionado Salas).
- Recurso de revisión número RDA 2910/16 interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100066216) (Comisionado Monterrey).
- Recurso de revisión número RDA 2958/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700018116) (Comisionada Kurczyn).
- Recurso de revisión número RDA 2972/16 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700073516) (Comisionada Kurczyn).

Recurso de revisión número RDA 2993/16 interpuesto en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100014216) (Comisionada Kurczyn).

Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V del artículo 55 de la Ley, a fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos suficientes para abordar el asunto y se allegue de la información necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose al comisionado ponente para que determine el día, hora y lugar para que se celebre dicha audiencia y actúe en la misma como representante, además de poder acceder a la información clasificada, respecto de los siguientes recursos de revisión:

I. Protección de datos personales

- Recurso de revisión número RPD 0459/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101173216) (Comisionada Kurczyn).
- Recurso de revisión número RPD 0487/16 interpuesto en contra de la Policía Federal (Folio No. 0413100037816) (Comisionada Kurczyn).
- Recurso de revisión número RPD 0515/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101324616) (Comisionada Kurczyn).
- Recurso de revisión número RPD 0522/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn).
- Recurso de revisión número RPD 0536/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101491716) (Comisionada Kurczyn).
- Recurso de revisión número RPD 0543/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400070116) (Comisionada Kurczyn).

II. Acceso a la información pública

- Recurso de revisión número RDA 2872/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600123016) (Comisionada Cano).
- Recurso de revisión número RDA 3098/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Folio No. 0612100007716) (Comisionada Kurczyn).
- Recurso de revisión número RDA 3156/16 interpuesto en contra de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200006116) (Comisionada Presidente Puente).

- Recurso de revisión número RDA 3182/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100117616) (Comisionada Kurczyn).
- Recurso de revisión número RDA 3196/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700209016) (Comisionada Kurczyn).
- Recurso de revisión número RDA 3217/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600157416) (Comisionada Kurczyn).
- Recurso de revisión número RDA 3224/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700127416) (Comisionada Kurczyn).
- Recurso de revisión número RDA 3238/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700231216) (Comisionada Kurczyn).

e) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad que se someten a votación de los Comisionados:

I. Protección de datos personales

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0410/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100874216), en la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0428/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101164616), en la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0462/16 interpuesto en contra de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (Folio No. 0917100002516), en la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0467/16 interpuesto en contra de Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio Inexistente), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0510/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700243316), en la que se determina tener por no presentado (Comisionada Presidente Puente).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0511/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas).

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0525/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700265016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0526/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (Folio Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0535/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101463316), en la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0541/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101462816), en la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0550/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800132016), en la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn).

II Acceso a la información pública

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2390/16 interpuesto en contra del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (Folio No. 1221400052316), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2404/16 interpuesto en contra de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 0912000008616), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2489/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100073116), en la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2577/16 interpuesto en contra de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000006216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2628/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600121616), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra).

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2659/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100105716), en la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidente Puente).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2721/16 interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400048116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2795/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800078216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2829/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100252416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2835/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100041816), en la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 2985/16 interpuesto en contra de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1113500002316), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3031/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100014816), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3088/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100879016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3109/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (Folio No. 0001000039616), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3152/16 interpuesto en contra de Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400057116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3203/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700184316), en la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn).

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3206/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100096316), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3208/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100235515), en la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0043/16 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (Folio No. 0320000007016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Acuña).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0055/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Forestal (Folio No. 1616100015316), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0058/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800105616), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0076/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700020016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0082/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600163416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0096/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700242716), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0121/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100339516), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada Cano).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0143/16 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 0120000020816), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0164/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No.

0001200220816), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra).

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0166/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100019016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0185/16 interpuesto en contra de la Procuraduría Agraria (Folio No. 1510500008516), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0223/16 interpuesto en contra de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Folio No. 0656500004416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 0238/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (Folio No. 2210000017416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas).

f) Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por extemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación de los Comisionados:

I. Protección de datos personales

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 0565/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400076316), en la que se determina desecharlo (Comisionado Monterrey).

II. Acceso a la información pública

- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3239/16 interpuesto en contra de Diconsa, S.A. de C.V. (Folio No. 2015000003013), en la que se determina desecharlo (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3246/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700104316), en la que se determina desecharlo (Comisionado Monterrey).
- Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 3247/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100183716), en la que se determina desecharlo (Comisionada Presidente Puente).

g) Recursos de revisión que para su resolución requieren que los Comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en

los artículos 17 y 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y sus correlativos del Reglamento, con el fin de que cuenten con los elementos suficientes para abordarlos y se alleguen de la información necesaria que permitan resolverlos.

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, el Coordinador Técnico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales remitir al sujeto obligado competente los recursos de revisión promovidos en contra de respuestas a solicitudes en materia de datos personales, en atención a lo dispuesto en los artículos tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

   Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, entre las que destaca la de cumplir las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que resultan aplicables.

   En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se prevé que en tanto no se expida la Ley General en materia de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia en sus respectivos ámbitos de aplicación.

   En ese sentido, el Instituto considera que con la emisión de las disposiciones antes mencionadas resulta necesario brindar certeza a la ciudadanía y sujetos obligados respecto de la instancia competente para sustanciar los recursos de revisión que hayan sido promovidos en contra de las respuestas otorgadas en materia de datos personales por los sujetos obligados regulados por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

   Por lo expuesto, se pone a consideración el Acuerdo mediante el cual se aprueba remitir al sujeto obligado competente para la sustanciación y resolución los recursos de revisión promovidos en contra de respuestas a solicitudes en materia de datos personales, en atención a lo dispuesto en los artículos Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.03

Acuerdo mediante el cual se remiten al sujeto obligado competente los recursos de revisión promovidos en contra de respuestas a solicitudes en materia de datos personales, en atención a lo dispuesto en los artículos Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo documento se identifica como anexo del punto 03.

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Coordinador Técnico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ampliar el plazo originalmente establecido en la fracción I del artículo Primero Transitorio de los Lineamientos en Materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobados mediante Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, con objeto de dar cabal atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al servicio profesional.

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes y los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le son aplicables, así como aprobar las disposiciones presupuestales y administrativas que sean necesarias para su funcionamiento.

Derivado de un proceso de reestructura organizacional dentro del Instituto, se hizo patente la necesidad de contar con un marco jurídico que permitiera establecer de manera integral la planeación, organización, implementación, gestión y administración de su capital humano a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales.

Aunado a lo anterior, es posible advertir que el nuevo marco normativo federal incorpora la obligación del Instituto de establecer normas y procedimientos para la puesta en operación de un servicio profesional otorgándole también la posibilidad de diseñar e implementar un sistema acorde a sus necesidades, con sus propias reglas de operación y procedimientos.

Para ello, a efecto de dar cabal cumplimiento al mandato del Congreso de la Unión, es que resulta necesario realizar una revisión acuciosa de los lineamientos en materia de recursos humanos con el propósito de armonizar su estructura y contenido con los requerimientos propios del servicio profesional, lo cual permitirá contar con un solo documento normativo en materia de administración de recursos humanos del Instituto.

Por lo expuesto, se pone a consideración el acuerdo mediante el cual mediante el cual se amplía el plazo originalmente establecido en la fracción I del artículo Primero Transitorio de los Lineamientos en Materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobados mediante Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, con objeto de dar cabal atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al servicio profesional.

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford, manifestó que se les había mandado un acuerdo en el cual hubo consideraciones de diversos comisionados y una de las consideraciones era dejar la modificación en términos de la Ley Federal como lo ordena la ley, en seis meses, el 6 de noviembre, solamente ese plazo y que ya cuando se presenten esos lineamientos o reglamentos, etcétera, tienen plazo máximo, evidentemente para generar estos lineamientos, se requiere el reglamento, por lo cual tendrá que haber consecuencia de uno a otro, pero lo que se tiene que tener claro es que el 6 de noviembre tienen como fecha límite todos estos documentos, lo que se sugirió es que el día que se presenten, tendrán ahí las etapas, los plazos y el cronograma y todas las especificaciones de en qué constará este servicio profesional de carrera y sugirió que toda esta parte se pudiera omitir y sólo quedara esta cuestión de actualizar el lineamiento se tenía en términos de un mandato que está en la Ley Federal.

La Comisionada Areli Cano Guadiana, precisó que en el referido acuerdo se debía modificar la fecha, que es hasta noviembre, debiendo modificar todo lo que se requiera a efecto de que el mismo quede en esos términos

Al no haber comentarios adicionales, previa votación los Comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.04

Acuerdo mediante el cual se amplía el plazo originalmente establecido en la fracción I del artículo Primero Transitorio de los Lineamientos en Materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto, aprobados mediante Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, con objeto de

dar cabal atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al servicio profesional, cuyo documento se identifica como anexo del punto 04, con las inclusiones a las que se hizo referencia.

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, el Coordinador Técnico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales las Modificaciones a las Políticas y al Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto.

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le son aplicables.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé que el Instituto, a través de mecanismos de coordinación podrá desarrollar programas de formación de usuarios del derecho de acceso a la información, a efecto de incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población, garantizando condiciones de accesibilidad a través de formatos establecidos e impulsando estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad, los medios para su ejercicio.

En ese sentido, resulta necesario realizar una actualización a las políticas y al Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad, a efecto de que estén en concordancia con lo establecido en los lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad vigentes, lo que permitirá a los servidores públicos adscritos a dicho Centro y a los enlaces designados por las unidades administrativas que conforman el Instituto, seguir las directrices, procesos y procedimientos definidos para la atención de los usuarios en los servicios de consulta, orientaciones asesoría y promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

Por lo expuesto, se pone a consideración el acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a las Políticas y al Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que en cuanto a las políticas de atención, se trata de actualizar el Catálogo de Servicios que ofrece el

CAS, precisar los días inhábiles de esta instancia, definir de mejor manera los tres niveles de atención de las asesorías brindadas por el CAS y prever la implementación de mecanismos para otorgar los servicios a personas con discapacidad o de habla indígena en función de la suficiencia presupuestal.

Por lo que hace a los cambios del Manual de Procedimientos, consistieron en actualizar el objetivo y el marco normativo que rige el CAS, incluir algunas definiciones y precisar el contenido de otras ya existentes, realizar ajustes a los niveles de responsabilidad del personal y de los enlaces en las Unidades Administrativas, definir el Catálogo de Servicios, incorporar el Sistema de Gestión de Servicios, integrar en la operación el Módulo Manual del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia para el Registro de Solicitudes.

Asimismo, con el propósito de establecer de manera puntual los pasos a seguir en la atención de diferentes servicios, se incorporó al Manual de Procedimientos los subprocesos específicos siguientes:

1.- Captura de solicitud de información o datos personales a través del TELINAI.
2.- Apoyar la elaboración del recurso de revisión contra sujetos obligados de la Federación.
3.- Orientación a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos, así como sobre las atribuciones y actividades del Instituto.
4.- Asesoría y asistencia técnica que se deriven del uso de Sistemas de Solicitudes de Información, e
5.- Incorporación de las denuncias por posibles incumplimientos a las Obligaciones de Transparencia.

El Comisionado Joel Salas Suárez señaló que históricamente este Instituto ha privilegiado su relación con la población mediante sistemas electrónicos, así lo hace el CAS concretamente en función del TELINAI que casi a 11 meses de su puesta en marcha se han realizado más de dos mil 900 solicitudes de información, y ahora que el Instituto tendrá una competencia nacional, muy probablemente el CAS podrá orientar a comunidades o a grupos en posición de vulnerabilidad que están excluidos en función de la gran brecha digital que sigue prevaleciendo en este país, pues la puesta del INAI a través del CAS y concretamente mediante el TELINAI, es tratar de reducir esa brecha. Asimismo, refirió que las solicitudes de información van a tener el potencial de poder atender a grupos que por el momento no están muy familiarizados o muy beneficiados por el pleno uso del derecho de acceso a la información y que justamente en esos grupos de población es en donde el derecho de acceso sí se vuelve un derecho instrumental o un derecho llave para

ejercer plenamente otros derechos como lo es el de la Salud y el de la Educación.

Al no haber comentarios adicionales, previa votación los Comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.05
Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a las Políticas y al Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cuyo documento se identifica como anexo del punto 05.

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, el Coordinador Técnico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 150/2016; misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 277/2016; dejar sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión RPD 0645/15, de fecha cinco de noviembre de dos mil quince.

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de acuerdo deriva de una solicitud de acceso a datos personales presentada por un particular ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, requiriendo tres tantos de copias certificadas de los documentos, estudios y expediente clínico que se hayan formado en el año 2014 en el Hospital General de Tacuba con respecto a un derechohabiente finado.

En respuesta a dicha solicitud, el sujeto obligado notificó al particular la disponibilidad de 276 fojas a certificar, previa acreditación de su personalidad y representación legal y pago de costos de reproducción.

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión, mismo que quedó erradicado bajo la clave RPD 0645/15, a lo cual el Pleno del Instituto resolvió confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, toda vez que se trata de una segunda solicitud presentada por el mismo particular en un periodo menor a 12 meses respecto del mismo sistema de datos personales.

Inconforme con la resolución dictada por el Pleno del Instituto, el quejoso promovió juicio de amparo, en el que se resolvió concederlo con el objeto de dejar insubsistente la resolución dictada en el recurso de revisión radicado bajo el número de expediente RPD 0645/15, y emitir otra en la que determine que el quejoso por concepto de pago de derechos para la expedición de copias certificadas que solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pague por cada hoja, tamaño carta u oficio, la cantidad de un peso a fin de lograr una restitución de los derechos que indebidamente le fueron afectados.

En contra de la sentencia referida, el Instituto interpuso recurso de revisión en el que se resolvió confirmar la sentencia recurrida.

Por lo expuesto, en acatamiento a la ejecutoria que resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo, se propone a los integrantes del Pleno dejar sin efectos la resolución emitida en el recurso de revisión RPD 0645/15, de fecha 5 de noviembre de 2015.

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.06

Acuerdo mediante el cual en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 150/2016; misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 277/2016; se deja sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión RPD 0645/15, de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, cuyo documento se identifica como anexo del punto 06.

7. En desahogo de los puntos séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo y décimo tercero del orden del día, el Coordinador Técnico del Pleno realizó una presentación conjunta, por tratarse de asuntos íntimamente ligados, para su posterior votación de manera individual.

A continuación, el Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del fondo de los asuntos señalados en el orden del día, a efecto de que el Pleno determine lo correspondiente.

Al respecto, señaló que los proyectos de acuerdo encuentran sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, entre las que destaca las de ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resultan aplicables.

Los días 4 y 5 de julio de 2016 se recibieron cuatro solicitudes del organismo garante del Estado de Jalisco y tres solicitudes del organismo garante del Estado de San Luis Potosí, para que este Instituto ejerciera la facultad de atracción respecto de diversos recursos de revisión en los cuales los propios organismos garantes fueron señalados como sujetos obligados.

En ese sentido, una vez realizado el turno de dichas solicitudes, de conformidad con el procedimiento diseñado para tal efecto, correspondió a la ponencia de la Comisionada Cano Guadiana y al Comisionado Guerra Ford atender asuntos del organismo garante de Jalisco.

No obstante, de conformidad con los argumentos esgrimidos por dichos Comisionados en sesiones previas, así como en atención a los acuerdos de turno que remitieron, se llevó a cabo el returno respectivo recayendo en los asuntos en las ponencias de la Comisionada Kurczyn Villalobos y el Comisionado Monterrey Chepov, respectivamente.

En ese contexto, una vez analizada la información que se adjuntó a dichas solicitudes, las ponencias de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora proponen no ejercer la facultad de atracción pues los recursos en cuestión no reúnen los elementos de interés y trascendencia necesarios.

Lo anterior, en razón de que los temas motivo de las solicitudes, así como los medios de impugnación respectivos, se relacionan con cuestiones establecidas expresamente en la Ley de la materia, así como en normas de carácter local sin que ello implique una cuestión novedosa, se relacione con un problema público relevante o que, por su impacto económico, político o social abone al derecho de acceso a la información.

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno los Acuerdos de referencia.

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló que reiteraba los argumentos dados en la sesión pasada, emitiendo un voto en contra.

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov señaló reiterar su posición respecto de los asuntos que se han tratado previamente en esta materia.

El Comisionado Joel Salas Suárez pidió reiterar sus argumentos y postura de la sesión anterior de Pleno, de ir en contra de estos proyectos de acuerdo.

La Comisionada Areli Cano Guadiana, manifestó estar en contra y reiteró sus argumentos de las sesiones del 14 de junio y 7 de julio del presente año, cuando se votaron asuntos en lo particular o relacionados con este tema y expresó que emitiría voto disidente, precisando que dichos argumentos aplican a todos los acuerdos.

Al no haber comentarios adicionales, previa votación los Comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.07
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 003/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, cuyo documento se identifica como anexo del punto 07.
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez.

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, se presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 005/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.08
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 005/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, cuyo documento se identifica como anexo del punto 08.
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez.

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, se presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 006/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

   Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el siguiente:

   Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.09
   Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 006/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, cuyo documento se identifica como anexo del punto 09.
   Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez.

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, se presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 007/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

    Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el siguiente:

    Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.10
    Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 007/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, cuyo documento se identifica como anexo del punto 10.
    Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez.

11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, se presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número

RR00026616, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.11
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026616, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí, cuyo documento se identifica como anexo del punto 11.
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez.

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, se presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026516, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.

    Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el siguiente:

    Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.12
    Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026516, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí, cuyo documento se identifica como anexo del punto 12.
    Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez.

13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, se presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026416, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el siguiente:

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.13
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026416, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí, cuyo documento se identifica como anexo del punto 13.
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos del miércoles trece de julio de dos mil dieciséis.

Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidente

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

Formuló el acta:
Yuri Zuckermann Pérez
Coordinador Técnico del Pleno

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del trece de julio de dos mil dieciséis.

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 13 DE JULIO DE 2016 A CELEBRARSE A LAS 11:00 HRS.

1. Aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales, en su caso.

2. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora/SAI/SPDP).

2.1. Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a consideración de los integrantes del pleno del INAI por parte de los comisionados ponentes, a través de medios electrónicos.

I. Protección de datos personales

1. Recurso de revisión número RPD 0410/16
2. Recurso de revisión número RPD 0417/16
3. Recurso de revisión número RPD 0453/16
4. Recurso de revisión número RPD 0462/16
5. Recurso de revisión número RPD 0470/16
6. Recurso de revisión número RPD 0484/16
7. Recurso de revisión número RPD 0491/16
8. Recurso de revisión número RPD 0504/16
9. Recurso de revisión número RPD 0506/16
10. Recurso de revisión número RPD 0510/16
11. Recurso de revisión número RPD 0511/16
12. Recurso de revisión número RPD 0513/16
13. Recurso de revisión número RPD 0521/16
14. Recurso de revisión número RPD 0525/16
15. Recurso de revisión número RPD 0535/16
16. Recurso de revisión número RPD 0541/16
17. Recurso de revisión número RPD 0550/16
18. Recurso de revisión número RPD 0565/16

II. Acceso a la información pública

1. Recurso de revisión número RDA 1614/15-BIS
2. Recurso de revisión número RDA 5415/14-BIS
3. Recurso de revisión número RDA 1912/16
4. Recurso de revisión número RDA 2247/16
5. Recurso de revisión número RDA 2265/16
6. Recurso de revisión número RDA 2489/16

7. Recurso de revisión número RDA 2704/16
8. Recurso de revisión número RDA 2737/16
9. Recurso de revisión número RDA 2835/16
10. Recurso de revisión número RDA 2891/16
11. Recurso de revisión número RDA 2937/16
12. Recurso de revisión número RDA 3003/16
13. Recurso de revisión número RDA 3031/16
14. Recurso de revisión número RDA 3041/16
15. Recurso de revisión número RDA 3046/16
16. Recurso de revisión número RDA 3047/16
17. Recurso de revisión número RDA 3052/16
18. Recurso de revisión número RDA 3053/16
19. Recurso de revisión número RDA 3054/16
20. Recurso de revisión número RDA 3056/16
21. Recurso de revisión número RDA 3060/16
22. Recurso de revisión número RDA 3061/16
23. Recurso de revisión número RDA 3067/16
24. Recurso de revisión número RDA 3073/16
25. Recurso de revisión número RDA 3075/16
26. Recurso de revisión número RDA 3078/16
27. Recurso de revisión número RDA 3081/16
28. Recurso de revisión número RDA 3082/16
29. Recurso de revisión número RDA 3084/16
30. Recurso de revisión número RDA 3086/16
31. Recurso de revisión número RDA 3088/16
32. Recurso de revisión número RDA 3094/16
33. Recurso de revisión número RDA 3095(RDA 3096)/16
34. Recurso de revisión número RDA 3097/16
35. Recurso de revisión número RDA 3106/16
36. Recurso de revisión número RDA 3109/16
37. Recurso de revisión número RDA 3113/16
38. Recurso de revisión número RDA 3114/16
39. Recurso de revisión número RDA 3117/16
40. Recurso de revisión número RDA 3131/16
41. Recurso de revisión número RDA 3143/16
42. Recurso de revisión número RDA 3152/16
43. Recurso de revisión número RDA 3153/16
44. Recurso de revisión número RDA 3154/16
45. Recurso de revisión número RDA 3162/16
46. Recurso de revisión número RDA 3167/16
47. Recurso de revisión número RDA 3168/16
48. Recurso de revisión número RDA 3169/16
49. Recurso de revisión número RDA 3170/16
50. Recurso de revisión número RDA 3203/16
51. Recurso de revisión número RDA 3206/16
52. Recurso de revisión número RDA 3208/16

53. Recurso de revisión número RDA 3239/16
54. Recurso de revisión número RDA 3246/16
55. Recurso de revisión número RDA 3247/16
56. Recurso de revisión número RRA 0008/16
57. Recurso de revisión número RRA 0032/16
58. Recurso de revisión número RRA 0036/16
59. Recurso de revisión número RRA 0043/16
60. Recurso de revisión número RRA 0050/16
61. Recurso de revisión número RRA 0078/16
62. Recurso de revisión número RRA 0095/16
63. Recurso de revisión número RRA 0099/16
64. Recurso de revisión número RRA 0116/16
65. Recurso de revisión número RRA 0200/16

2.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de los comisionados ponentes y que fueron sometidas conforme al numeral 3.1 anterior.

I. Protección de datos personales

1. Recurso de revisión número RPD 0398/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100709216) (Comisionada Presidenta Puente).
2. Recurso de revisión número RPD 0417/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101092916) (Comisionada Kurczyn).
3. Recurso de revisión número RPD 0476/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400088416) (Comisionado Salas).
4. Recurso de revisión número RPD 0478/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400081916) (Comisionada Cano).
5. Recurso de revisión número RPD 0484/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100722516) (Comisionado Acuña).
6. Recurso de revisión número RPD 0488/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400079916) (Comisionado Monterrey).
7. Recurso de revisión número RPD 0503/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400091516) (Comisionada Presidenta Puente).
8. Recurso de revisión número RPD 0504/16 interpuesto en contra de la Policía Federal (Folio No. 0413100136515) (Comisionado Salas).

9. Recurso de revisión número RPD 0506/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101372516) (Comisionada Cano).
10. Recurso de revisión número RPD 0513/16 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200138316) (Comisionada Cano).
11. Recurso de revisión número RPD 0521/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra).

II. Acceso a la información pública

1. Recurso de revisión número RDA 1614/15-BIS interpuesto en contra del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000007915) (Comisionada Kurczyn).
2. Recurso de revisión número RDA 1999/14-BIS interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400299213) (Comisionado Salas).
3. Recurso de revisión número RDA 5415/14-BIS interpuesto en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000050814) (Comisionado Salas).
4. Recurso de revisión número RDA 1272/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Folio No. 1612100002016) (Comisionado Monterrey).
5. Recurso de revisión número RDA 1722/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 1615100004616) (Comisionado Salas).
6. Recurso de revisión número RDA 1845/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500020216) (Comisionada Kurczyn).
7. Recurso de revisión número RDA 1912/16 interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300014516) (Comisionado Acuña).
8. Recurso de revisión número RDA 1997(RDA 2007 y RDA 2256)/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (Folios Nos. 0001000013316, 0001000016916 y 0001000022816) (Comisionada Cano).
9. Recurso de revisión número RDA 2033/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100728116) (Comisionado Guerra).
10. Recurso de revisión número RDA 2035/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100046916) (Comisionado Monterrey).
11. Recurso de revisión número RDA 2247/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700013416) (Comisionado Salas).
12. Recurso de revisión número RDA 2265/16 interpuesto en contra de la Policía Federal (Folio No. 0413100025016) (Comisionada Kurczyn).

13. Recurso de revisión número RDA 2269/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400055816) (Comisionado Acuña).
14. Recurso de revisión número RDA 2451/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600092516) (Comisionado Acuña).
15. Recurso de revisión número RDA 2481/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600088316) (Comisionado Guerra).
16. Recurso de revisión número RDA 2519/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100957516) (Comisionada Presidenta Puente).
17. Recurso de revisión número RDA 2544/16 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 1857200090116) (Comisionado Guerra).
18. Recurso de revisión número RDA 2546/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100146216) (Comisionado Monterrey).
19. Recurso de revisión número RDA 2660/16 interpuesto en contra de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. (Folio No. 0917500000816) (Comisionado Salas).
20. Recurso de revisión número RDA 2683/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100491816) (Comisionada Cano).
21. Recurso de revisión número RDA 2698(RDA 2700)/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República (Folios Nos. 0001700103116 y 0001700103316) (Comisionado Guerra).
22. Recurso de revisión número RDA 2704/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100052916) (Comisionada Cano).
23. Recurso de revisión número RDA 2737/16 interpuesto en contra del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Folio No. 1115000008616) (Comisionado Salas).
24. Recurso de revisión número RDA 2804/16 interpuesto en contra de PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500073716) (Comisionada Kurczyn).
25. Recurso de revisión número RDA 2826/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100738316) (Comisionado Monterrey).
26. Recurso de revisión número RDA 2839/16 interpuesto en contra de PEMEX Transformación Industrial (Folio No. 1867900035216) (Comisionada Kurczyn).
27. Recurso de revisión número RDA 2871/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700067416) (Comisionado Acuña).

28. Recurso de revisión número RDA 2873/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700067516) (Comisionado Guerra).
29. Recurso de revisión número RDA 2893/16 interpuesto en contra de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000017916) (Comisionada Cano).
30. Recurso de revisión número RDA 2923/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100692416) (Comisionada Kurczyn).
31. Recurso de revisión número RDA 2927/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900117416) (Comisionado Acuña).
32. Recurso de revisión número RDA 2928/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Energía (Folio No. 0001800031616) (Comisionada Cano).
33. Recurso de revisión número RDA 2937/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Cultura (Folio No. 1114100024416) (Comisionada Kurczyn).
34. Recurso de revisión número RDA 2955/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700073516) (Comisionado Acuña).
35. Recurso de revisión número RDA 2996/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500012116) (Comisionado Salas).
36. Recurso de revisión número RDA 3003/16 interpuesto en contra de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200005916) (Comisionado Salas).
37. Recurso de revisión número RDA 3019/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700170616) (Comisionada Cano).
38. Recurso de revisión número RDA 3025/16 interpuesto en contra de la Procuraduría Agraria (Folio No. 1510500007716) (Comisionado Acuña).
39. Recurso de revisión número RDA 3046/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101223716) (Comisionado Acuña).
40. Recurso de revisión número RDA 3056/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101187416) (Comisionada Kurczyn).
41. Recurso de revisión número RDA 3073/16 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1117100027416) (Comisionado Salas).
42. Recurso de revisión número RDA 3078/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101066916) (Comisionado Monterrey).
43. Recurso de revisión número RDA 3081/16 interpuesto en contra de Liconsa, S.A. de C.V. (Folio No. 2014300005316) (Comisionado Acuña).
44. Recurso de revisión número RDA 3082/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500084616) (Comisionada Cano).

45. Recurso de revisión número RDA 3084/16 interpuesto en contra de PEMEX Transformación Industrial (Folio No. 1867900035016) (Comisionada Kurczyn).
46. Recurso de revisión número RDA 3094/16 interpuesto en contra de PEMEX Transformación Industrial (Folio No. 1867900037816) (Comisionado Salas).
47. Recurso de revisión número RDA 3097/16 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100035116) (Comisionado Guerra).
48. Recurso de revisión número RDA 3106/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600156516) (Comisionado Monterrey).
49. Recurso de revisión número RDA 3113/16 interpuesto en contra de Nacional Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000124416) (Comisionado Monterrey).
50. Recurso de revisión número RDA 3114/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100098816) (Comisionada Presidenta Puente).
51. Recurso de revisión número RDA 3131/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000028216) (Comisionada Cano).
52. Recurso de revisión número RDA 3143/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100136716) (Comisionado Salas).
53. Recurso de revisión número RDA 3153/16 interpuesto en contra de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100028416) (Comisionado Guerra).
54. Recurso de revisión número RDA 3154/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700191816) (Comisionada Kurczyn).
55. Recurso de revisión número RDA 3162/16 interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400053116) (Comisionado Monterrey).
56. Recurso de revisión número RDA 3167/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700208316) (Comisionado Guerra).
57. Recurso de revisión número RDA 3168/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700208416) (Comisionada Kurczyn).
58. Recurso de revisión número RDA 3169/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700208516) (Comisionado Monterrey).
59. Recurso de revisión número RDA 3170/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700208716) (Comisionada Presidenta Puente).
60. Recurso de revisión número RRA 0008/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300009816) (Comisionado Acuña).

61. Recurso de revisión número RRA 0021/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900137616) (Comisionado Salas).
62. Recurso de revisión número RRA 0023/16 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1117100045516) (Comisionada Cano).
63. Recurso de revisión número RRA 0032/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800102616) (Comisionada Kurczyn).
64. Recurso de revisión número RRA 0034/16 interpuesto en contra de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Folio Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente).
65. Recurso de revisión número RRA 0036/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700021316) (Comisionado Acuña).
66. Recurso de revisión número RRA 0037/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800102616) (Comisionada Cano).
67. Recurso de revisión número RRA 0048/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Cultura (Folio No. 1114100028516) (Comisionada Presidenta Puente).
68. Recurso de revisión número RRA 0050/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300009916) (Comisionado Acuña).
69. Recurso de revisión número RRA 0052/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300010116) (Comisionado Guerra).
70. Recurso de revisión número RRA 0065/16 interpuesto en contra de PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500097716) (Comisionada Cano).
71. Recurso de revisión número RRA 0078/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600177216) (Comisionado Acuña).
72. Recurso de revisión número RRA 0083(RRA 0084)/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folios Nos. 0000900134316 y 0000900134316) (Comisionada Presidenta Puente).
73. Recurso de revisión número RRA 0087/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600167816) (Comisionado Guerra).
74. Recurso de revisión número RRA 0091/16 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 0120000002016) (Comisionado Salas).
75. Recurso de revisión número RRA 0095/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800112216) (Comisionada Kurczyn).
76. Recurso de revisión número RRA 0099/16 interpuesto en contra del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200028816) (Comisionado Acuña).

77. Recurso de revisión número RRA 0100/16 interpuesto en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. (Folio No. 6017100002316) (Comisionada Cano).
78. Recurso de revisión número RRA 0101/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800111316) (Comisionado Guerra).
79. Recurso de revisión número RRA 0110/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Cancerología (Folio No. 1221500009716) (Comisionado Monterrey).
80. Recurso de revisión número RRA 0112/16 interpuesto en contra de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Folio No. 0908500009216) (Comisionado Salas).
81. Recurso de revisión número RRA 0116/16 interpuesto en contra de la Auditoría Superior de la Federación (Folio No. 0110000006316) (Comisionada Kurczyn).
82. Recurso de revisión número RRA 0117/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600171416) (Comisionado Monterrey).
83. Recurso de revisión número RRA 0118/16 interpuesto en contra de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000008316) (Comisionada Presidenta Puente).
84. Recurso de revisión número RRA 0119/16 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700105316) (Comisionado Salas).
85. Recurso de revisión número RRA 0128/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 1615100020516) (Comisionada Cano).
86. Recurso de revisión número RRA 0159/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No. 0001200204816) (Comisionado Monterrey).
87. Recurso de revisión número RRA 0161/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800111116) (Comisionado Salas).
88. Recurso de revisión número RRA 0182/16 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700085516) (Comisionado Salas).
89. Recurso de revisión número RRA 0196/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800106816) (Comisionado Salas).
90. Recurso de revisión número RRA 0200/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No. 0001200211416) (Comisionada Kurczyn).

2.3 Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los comisionados.

II. Acceso a la información pública

1. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 0029/16 interpuesto en contra de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Folio No. 1507500007016) (Comisionado Acuña).



2.4 Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los comisionados.

I. Protección de datos personales

1. Recurso de revisión número RPD 0435/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100910216) (Comisionado Acuña).
2. Recurso de revisión número RPD 0459/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101173216) (Comisionada Kurczyn).
3. Recurso de revisión número RPD 0487/16 interpuesto en contra de la Policía Federal (Folio No. 0413100037816) (Comisionada Kurczyn).
4. Recurso de revisión número RPD 0515/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101324616) (Comisionada Kurczyn).
5. Recurso de revisión número RPD 0522/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn).
6. Recurso de revisión número RPD 0536/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101491716) (Comisionada Kurczyn).
7. Recurso de revisión número RPD 0543/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400070116) (Comisionada Kurczyn).
8. Recurso de revisión número RDA-RCPD 2864/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100107716) (Comisionado Acuña).

II. Acceso a la información pública

1. Recurso de revisión número RDA 2641/16 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700083816) (Comisionada Cano).
2. Recurso de revisión número RDA 2645/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100078416) (Comisionada Presidenta Puente).
3. Recurso de revisión número RDA 2708/16 interpuesto en contra de la Procuraduría Federal del Consumidor (Folio No. 1031500022916) (Comisionada Presidenta Puente).
4. Recurso de revisión número RDA 2726/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100085616) (Comisionado Guerra).

5. Recurso de revisión número RDA 2733/16 interpuesto en contra de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V (Folio No. 0917600002216) (Comisionado Guerra).
6. Recurso de revisión número RDA 2740/16 interpuesto en contra de PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500029616) (Comisionado Guerra).
7. Recurso de revisión número RDA 2741/16 interpuesto en contra de Nacional Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000102516) (Comisionada Kurczyn).
8. Recurso de revisión número RDA 2752/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100795516) (Comisionado Acuña).
9. Recurso de revisión número RDA 2794/16 interpuesto en contra del Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100033416) (Comisionado Acuña).
10. Recurso de revisión número RDA 2825(RDA 2834)/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folios Nos. 1615100014116 y 1615100014416) (Comisionada Kurczyn).
11. Recurso de revisión número RDA 2855/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700118816) (Comisionada Presidenta Puente).
12. Recurso de revisión número RDA 2872/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600123016) (Comisionada Cano).
13. Recurso de revisión número RDA 2891/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400035316) (Comisionado Salas).
14. Recurso de revisión número RDA 2910/16 interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100066216) (Comisionado Monterrey).
15. Recurso de revisión número RDA 2958/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700018116) (Comisionada Kurczyn).
16. Recurso de revisión número RDA 2972/16 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700073516) (Comisionada Kurczyn).
17. Recurso de revisión número RDA 2993/16 interpuesto en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100014216) (Comisionada Kurczyn).
18. Recurso de revisión número RDA 3098/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Folio No. 0612100007716) (Comisionada Kurczyn).
19. Recurso de revisión número RDA 3156/16 interpuesto en contra de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200006116) (Comisionada Presidenta Puente).

20. Recurso de revisión número RDA 3182/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100117616) (Comisionada Kurczyn).
21. Recurso de revisión número RDA 3196/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700209016) (Comisionada Kurczyn).
22. Recurso de revisión número RDA 3217/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600157416) (Comisionada Kurczyn).
23. Recurso de revisión número RDA 3224/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700127416) (Comisionada Kurczyn).
24. Recurso de revisión número RDA 3238/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700231216) (Comisionada Kurczyn).

2.5. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se someten a votación de los comisionados:

I. Protección de datos personales

1. Recurso de revisión número RPD 0410/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100874216) (Comisionada Kurczyn).
2. Recurso de revisión número RPD 0428/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101164616) (Comisionado Acuña).
3. Recurso de revisión número RPD 0462/16 interpuesto en contra de la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. (Folio No. 0917100002516) (Comisionado Salas).
4. Recurso de revisión número RPD 0467/16 interpuesto en contra de Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey).
5. Recurso de revisión número RPD 0510/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700243316) (Comisionada Presidenta Puente).
6. Recurso de revisión número RPD 0511/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente) (Comisionado Salas).
7. Recurso de revisión número RPD 0525/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700265016) (Comisionado Salas).
8. Recurso de revisión número RPD 0526/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (Folio Inexistente) (Comisionado Acuña).

9. Recurso de revisión número RPD 0535/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101463316) (Comisionado Guerra).
10. Recurso de revisión número RPD 0541/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101462816) (Comisionada Cano).
11. Recurso de revisión número RPD 0550/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800132016) (Comisionada Kurczyn).

II. Acceso a la información pública

1. Recurso de revisión número RDA 2390/16 interpuesto en contra del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (Folio No. 1221400052316) (Comisionado Guerra).
2. Recurso de revisión número RDA 2404/16 interpuesto en contra de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 0912000008616) (Comisionado Guerra).
3. Recurso de revisión número RDA 2489/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100073116) (Comisionada Kurczyn).
4. Recurso de revisión número RDA 2577/16 interpuesto en contra de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000006216) (Comisionado Acuña).
5. Recurso de revisión número RDA 2628/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600121616) (Comisionado Guerra).
6. Recurso de revisión número RDA 2659/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100105716) (Comisionada Presidenta Puente).
7. Recurso de revisión número RDA 2721/16 interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400048116) (Comisionado Monterrey).
8. Recurso de revisión número RDA 2795/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800078216) (Comisionada Cano).
9. Recurso de revisión número RDA 2829/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100252416) (Comisionado Acuña).
10. Recurso de revisión número RDA 2835/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100041816) (Comisionado Salas).
11. Recurso de revisión número RDA 2985/16 interpuesto en contra de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 1113500002316) (Comisionado Guerra).
12. Recurso de revisión número RDA 3031/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100014816) (Comisionado Salas).
13. Recurso de revisión número RDA 3088/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100879016) (Comisionado Acuña).

14. Recurso de revisión número RDA 3109/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (Folio No. 0001000039616) (Comisionado Acuña).
15. Recurso de revisión número RDA 3152/16 interpuesto en contra de Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400057116) (Comisionada Cano).
16. Recurso de revisión número RDA 3203/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700184316) (Comisionada Kurczyn).
17. Recurso de revisión número RDA 3206/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100096316) (Comisionado Salas).
18. Recurso de revisión número RDA 3208/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100235515) (Comisionada Cano).
19. Recurso de revisión número RRA 0043/16 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (Folio No. 0320000007016) (Comisionado Acuña).
20. Recurso de revisión número RRA 0055/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Forestal (Folio No. 1616100015316) (Comisionada Presidenta Puente).
21. Recurso de revisión número RRA 0058/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800105616) (Comisionada Cano).
22. Recurso de revisión número RRA 0076/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700020016) (Comisionada Presidenta Puente).
23. Recurso de revisión número RRA 0082/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600163416) (Comisionado Monterrey).
24. Recurso de revisión número RRA 0096/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700242716) (Comisionado Monterrey).
25. Recurso de revisión número RRA 0121/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100339516) (Comisionada Cano).
26. Recurso de revisión número RRA 0143/16 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 0120000020816) (Comisionado Guerra).
27. Recurso de revisión número RRA 0164/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No. 0001200220816) (Comisionado Guerra).
28. Recurso de revisión número RRA 0166/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100019016) (Comisionado Monterrey).
29. Recurso de revisión número RRA 0185/16 interpuesto en contra de la Procuraduría Agraria (Folio No. 1510500008516) (Comisionado Guerra).
30. Recurso de revisión número RRA 0223/16 interpuesto en contra de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Folio No. 0656500004416) (Comisionada Presidenta Puente).
31. Recurso de revisión número RRA 0238/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (Folio No. 2210000017416) (Comisionado Salas).

2.6. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados:

I. Protección de datos personales

1. Recurso de revisión número RPD 0565/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400076316) (Comisionado Monterrey).

II. Acceso a la información pública

1. Recurso de revisión número RDA 3239/16 interpuesto en contra de Diconsa, S.A. de C.V. (Folio No. 2015000003013) (Comisionado Monterrey).
2. Recurso de revisión número RDA 3246/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700104316) (Comisionado Monterrey).
3. Recurso de revisión número RDA 3247/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100183716) (Comisionada Presidenta Puente).

2.7. Recursos de revisión que para su resolución requieren que los comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en los artículos 17 y 55 de la Ley y sus correlativos del Reglamento, con el fin de que cuenten con los elementos suficientes para abordarlos y se alleguen de la información necesaria que permitan resolverlos.

3. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales remitir al sujeto obligado competente los recursos de revisión promovidos en contra de respuestas a solicitudes en materia de datos personales, en atención a lo dispuesto en los artículos tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ordenar la revisión y actualización de los Lineamientos en Materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto, aprobados mediante Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, con objeto de dar cabal atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al servicio profesional.

5. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales las

Modificaciones a las Políticas y al Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto.

6. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 150/2016; misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 277/2016; dejar sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión RPD 0645/15, de fecha cinco de noviembre de dos mil quince.

7. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 003/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

8. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 005/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

9. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 006/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

10. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 007/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

11. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026616, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.

12. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026516, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.

13. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026416, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.

14. Asuntos generales.

Pleno 13 Julio 2016

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
ORGANISMO AUTÓNOMO

OFICINA DEL COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS
INAI-FJALL-124/2016

Ciudad de México, a 12 de julio de 2016.

Asunto: Solicitud de excusa sobre el recurso de revisión RRA 0095/16 en contra del INAI, a cargo de la Ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, para la Sesión Ordinaria del Pleno del 13 de julio de 2016.

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DEL PLENO

Ximena Puente de la Mora,
Areli Cano Guadiana,
Oscar Mauricio Guerra Ford,
María Patricia Kurczyn Villalobos,
Joel Salas Suárez,
Rosendoevgueni Monterrey Chepov,

Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Presente.

Estimadas Comisionadas y Comisionados:

De conformidad con el *Acuerdo que fija las reglas aprobadas en materia de impedimentos, excusas y recusaciones,* aprobado por el Pleno de este Instituto el 22 de noviembre de 2006, un Comisionado debe **abstenerse** de intervenir o **conocer algún recurso de revisión**, de reconsideración, solicitud de verificación de falta de respuesta u algún otro procedimiento administrativo cuando exista algún **impedimento** de los establecidos en los artículos 21 de la *Ley Federal de Procedimiento Administrativo* y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° de la *Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.*

En ese sentido, en la solicitud de acceso a la información con número de folio **0673800112216** que dio origen al recurso de revisión **RRA 0095/16,** interpuesto en contra del **Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (antes IFAI)**, radicado en la Ponencia de la **Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos**, el particular requiere la información siguiente:

> *"Solicito al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y a la Ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, cualquier documento, información o insumo que*

INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
ORGANISMO AUTÓNOMO

OFICINA DEL COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS
INAI-FJALL-124/2016

Ciudad de México, a 12 de julio de 2016.

respalde la afirmación que realizó en el pleno del 11 de mayo del año en curso. Información que puede comprobar que ha conocido montajes sobre detenciones y operaciones de uso de fuerza." (sic)

Atendiendo a que el requerimiento presentado por el solicitante versa sobre **información que involucra a mi propia persona**, es que considero que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, fracción I, de la *Ley Federal de Procedimiento Administrativo*, que hace referencia al **impedimento que tiene quien es servidor público para intervenir o conocer de un procedimiento administrativo cuando éste tenga interés directo o indirecto en el asunto de que se trate** o en otro semejante, cuya resolución pudiera influir en la de aquél.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 8, fracción XI, de la *Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos* y en las Reglas Primera, Cuarta inciso b), y Sexta del *Acuerdo que fija las reglas aprobadas en materia de impedimentos, excusas y recusaciones* del Pleno de este Instituto, es que se presenta la **petición de excusa** respectiva, con el señalamiento fundado y motivado del impedimento correspondiente, para **conocer y emitir mi voto** sobre dicho expediente.

Agradezco de antemano la atención al presente.

A t e n t a m e n t e

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

C.c.p.- Adrián Alcalá Méndez.-Coordinador de Acceso a la Información.- Presente.
Yuri Zuckermann Pérez. - Coordinador Técnico del Pleno. – Presente.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.03

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA REMITIR AL SUJETO OBLIGADO COMPETENTE PARA LA SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN, LOS RECURSOS DE REVISIÓN PROMOVIDOS EN CONTRA DE RESPUESTAS A SOLICITUDES EN MATERIA DE DATOS PERSONALES, EN ATENCIÓN A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

C O N S I D E R A N D O

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, entre otros, el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto antes invocado, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional.

4. Que en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la LGTAIP, el nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.

5. Que el Reglamento Interior del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece en sus artículos 3, fracciones II y IV; 5, fracción I; 6; 7; 14 y 15, fracciones I, VI y XXII que el Pleno es el órgano máximo de dirección y decisión, mismo que tomará sus decisiones y desarrollará las funciones de manera colegiada, y será la autoridad frente a los Comisionados; que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno y podrá delegarlas en órganos, unidades administrativas y servidores públicos, y que le corresponde ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución y demás ordenamientos legales.

6. Que de conformidad con el artículo 44 del Reglamento Interior, en el que se establece que los casos no previstos en dicho ordenamiento serán resueltos por acuerdo del Pleno, es que este Instituto considera necesario emitir el presente Acuerdo con el objeto de brindar certeza a la ciudadanía y sujetos obligados respecto de la instancia competente para la sustanciación de los recursos de revisión derivados de solicitudes en materia de datos personales.

7. Que la LGTAIP establece en su artículo Tercero Transitorio que en tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos ámbitos de aplicación.

8. Que el segundo párrafo del artículo Segundo Transitorio de la LFTAIP establece que en tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia.

9. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) es la norma aplicable en materia de datos personales en posesión de los sujetos obligados por ésta regulados, asimismo los sindicatos y/o personas físicas y morales que traten datos personales están obligados al cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez.

10. Que en la LFTAIPG, no se contemplaba a los fideicomisos, fondos públicos, sindicatos y/o personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos, como sujetos obligados, tal como lo refiere ahora la LFTAIP y, en ese sentido, no se encuentran compelidos normativamente a dar respuesta a solicitudes de acceso y corrección de datos personales, y por tanto tampoco proceden recursos de revisión para impugnar las posibles respuestas de éstos, ya que es esta última norma la que rige la materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, hasta en tanto se defina dicha circunstancia en la ley general que sobre el particular se expida. Lo anterior, con excepción de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se encuentran vinculados en razón de las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, los sindicatos y/o personas físicas y morales que traten datos personales ya eran

considerados como obligados al cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares desde el dos mil diez.

11. Que el Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, de la Comisión Permanente y de la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieron mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el ejercicio de sus derechos en materia de datos personales.

12. Que los nuevos sujetos obligados de la LFTAIP que no se encontraban previstos en LFTAIPG y que eran sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares deberán dar respuesta a solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en términos de la normatividad aplicable, hasta en tanto se defina dicha circunstancia en la ley general que sobre el particular se expida. Lo anterior, con excepción de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se encuentran vinculados en razón de las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral.

13. Que por las razones y fundamentos expuestos, este Instituto carece de atribuciones para conocer sobre los medios de impugnación interpuestos en contra de las respuestas otorgadas, en materia de acceso y rectificación de datos personales, por los sujetos obligados a que se refiere el considerando 11 de este Acuerdo, por lo que el recurso de revisión correspondiente deberá atenderse conforme a la normatividad que al efecto hayan establecido éstos, o en su defecto, hasta que se emita le ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y las normas que de esta deriven.

14. Que de conformidad con lo establecido en la disposición V, numeral 2 del Anexo del Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04 mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio de dos mil quince, es atribución de la Coordinación Técnica del Pleno verificar el cumplimiento de las tareas de recepción, tramitación y notificación de los medios de impugnación presentados ante el Instituto conforme al procedimiento que para tal efecto sea emitido por el Pleno.

15. Que en virtud de lo expuesto en el considerando inmediato anterior, a fin de lograr mayor eficiencia en la sustanciación de los diferentes recursos y procedimientos que, conforme a la legislación vigente son competencia de otros sujetos obligados distintos a este organismo autónomo, así como favorecer el derecho de protección de datos personales,

es necesario establecer que la Coordinación Técnica del Pleno, por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, será la instancia encargada de remitir a los sujetos obligados descritos en el Considerando 11 de este Acuerdo, los documentos que reciba a través de los cuales se interpongan recursos de revisión ante este Organismo Autónomo, en contra de las respuestas a solicitudes en materia de datos personales.

16. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 24, fracción I del Reglamento Interior, la Coordinación de Protección de Datos Personales tiene entre sus atribuciones la de auxiliar a la Comisionada Presidente en la notificación de acuerdos que se emitan en la materia.

17. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción III, la facultad del Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados.

18. Que la LFTAIP establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno.

19. Que en términos del artículo 31, fracción XII de la LFTAIP y 21, fracciones II, III y IV del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba remitir al sujeto obligado competente para la sustanciación y resolución, los recursos de revisión promovidos en contra de respuestas a solicitudes en materia de datos personales, en atención a lo dispuesto en los artículos Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia; Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29 fracción I, 31, fracción XII y Segundo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracciones II y IV, 5, fracción I, 6, 7, 14, 15, fracciones I, III, VI y XXII, 21 fracciones II, III y IV, 24 fracción I y 44 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; disposición V, numeral 2 del Anexo del Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04 mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba remitir al sujeto obligado competente para la sustanciación y resolución, los recursos de revisión promovidos en contra de respuestas a solicitudes en materia de datos personales, en atención a lo dispuesto en los artículos Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, remita a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado competente para la sustanciación y resolución, los recursos de revisión promovidos en contra de respuestas a solicitudes en materia de datos personales, en atención a lo dispuesto en los artículos Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la mencionada Ley Federal.

TERCERO. Se instruye a la Coordinación de Protección de Datos Personales para que haga del conocimiento de los sujetos obligados referidos en el Considerando 11 el presente Acuerdo, con el apoyo de la Coordinación de Acceso a la Información, por conducto de las Direcciones Generales de Enlace competentes atendiendo al sujeto obligado de que se trate.

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, en caso de recibir un recurso de revisión en contra de sindicatos y/o personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos, lo remita a la Coordinación de Protección de Datos Personales para que sea tramitado como una solicitud de protección de derechos conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

QUINTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del INAI.

SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidente

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

Yuri Zuckermann Pérez
Coordinador Técnico del Pleno

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.03 aprobado por unanimidad en sesión del Pleno de este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.04

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLÍA EL PLAZO ORIGINALMENTE ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LOS *LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES*, APROBADOS MEDIANTE EL ACUERDO ACT-PUB/16/12/2015.04, CON OBJETO DE DAR CABAL ATENCIÓN A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, RELATIVO AL SERVICIO PROFESIONAL.

CONSIDERANDO

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando entre otros, el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación; así, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 3 de la Ley General en cita, el órgano garante, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se denomina Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto).

4. Que el artículo 15, fracciones I y V del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior) señala que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables, así como aprobar las disposiciones presupuestales y administrativas que sean necesarias para el funcionamiento y ejercicio del mismo. Por

su parte, el artículo 16, fracción III del citado ordenamiento, otorga al Pleno la facultad de aprobar las normas que regirán la operación y administración del Instituto, así como sus reformas o adiciones.

5. Que en tal virtud, el Pleno del INAI ante las nuevas facultades otorgadas por la Constitución, llevó a cabo un proceso de reestructura organizacional con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las disposiciones constitucionales y aquellas que emanen de las leyes generales, así como de las correspondientes a los marcos normativos específicos en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

6. Que este rediseño institucional permitió, además de crear un proceso de transformación para definir una nueva arquitectura organizacional que respondiera a las necesidades actuales del INAI, la revisión y el análisis acucioso de la normatividad interna con el objetivo principal de lograr su alineación frente a la naturaleza, competencias y alcances del Instituto como organismo constitucional autónomo.

7. Que en este contexto se hizo patente la necesidad de contar con un marco jurídico que permitiera establecer de manera integral la planeación, organización, implementación, gestión y administración del capital humano con el que contaba el INAI a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales.

8. Que en congruencia con lo expuesto en los Considerandos Quinto, Sexto y Séptimo del presente Acuerdo, es que la Dirección General de Administración, como unidad administrativa responsable de instrumentar, coordinar y supervisar los mecanismos para el establecimiento y operación de los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, aprendizaje, desarrollo, evaluación y licencias, así como procedimiento de separación; además de proponer y aplicar las políticas y los procesos de contratación, los movimientos de personal y la administración de los sueldos y prestaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracciones VII, VIII y IX del Reglamento Interior, inició los trabajos para la elaboración de los *Lineamientos en materia de administración de recursos humanos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales*, desarrollando en su estructura temática el siguiente capitulado:

- De las Generalidades;
- De la Planeación Institucional;
- De los Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos;
- De la Selección, Ingreso y Movilidad;
- De la Revisión del Fallo Definitivo;
- De los Servicios para los Servidores Públicos;
- Del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo;
- De la Evaluación Bienal del Desempeño;
- De los Estímulos, y

- Del Procedimiento de Separación.

9. Que con fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, la Dirección General de Administración presentó a consideración del Pleno del INAI, el proyecto de marco normativo y procedimental relativo a la planeación, organización y administración de los recursos humanos, denominado *Lineamientos en materia de administración de recursos humanos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales* (*Lineamientos*), mismo que fue aprobado mediante Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero de dos mil dieciséis.

10. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual fue publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor al día siguiente de su publicación.

11. Que el párrafo segundo del artículo 25 de la LFTAIP dispone que el Instituto "*...deberá establecer normas y procedimientos que sienten las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo de un Sistema de Servicio Profesional de Carrera, que garantice la capacitación, profesionalización y especialización de sus Servidores Públicos, en las materias de acceso y protección de datos*"; otorgando un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento, para que el INAI expida su Estatuto Orgánico y los *Lineamientos* necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la referida Ley.

12. Que con base en lo expuesto es posible advertir, por un lado, que el nuevo marco normativo federal incorpora la obligación de establecer normas y procedimientos para la puesta en operación de un Servicio Profesional en el Instituto, y por el otro, que el artículo 17 de la LFTAIP define al INAI como un organismo autónomo, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.

13. Que en congruencia, la LFTAIP establece únicamente las bases generales para la definición y aplicación del Servicio Profesional, otorgando al Instituto la posibilidad de diseñar un sistema acorde a sus necesidades; es decir, le permite diseñar e implementar sus propias reglas de operación y procedimientos, tomando en consideración las condiciones generales de trabajo, así como los derechos y las obligaciones de sus servidores públicos, además de los subsistemas y requerimientos de un Servicio Profesional que responda a la naturaleza institucional, entre otros aspectos.

14. Que en este orden de ideas, la Dirección General de Administración de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 26, fracciones VII, VIII y IX del Reglamento Interior, previamente expuestas en el Considerando 8 del presente Acuerdo, presenta la propuesta de llevar a cabo un proceso de armonización de los *Lineamientos*, en virtud que éstos además de regular la organización y planeación de los recursos humanos, definen los derechos y obligaciones de los servidores públicos y desarrollan con toda precisión cada uno de los subsistemas que son necesarios para la administración de los recursos humanos del INAI, tomando como base los requerimientos mínimos para la implementación de un Servicio Profesional, a saber: Selección, Ingreso y Movilidad; Capacitación, Especialización y Desarrollo; Evaluación del Desempeño; Estímulos y Procedimiento de Separación.

15. Que en tal sentido, los *Lineamientos* incorporan los subsistemas de administración necesarios para la planeación, organización, desarrollo y coordinación de la gestión de personal, toda vez que fueron elaborados a partir de una visión integral de aplicación para todos los servidores públicos del Instituto y asimismo, fueron fundamentados en los principios de mérito, transparencia, igualdad de oportunidades, profesionalización y especialización, reconocimiento e incentivo al desempeño laboral destacado, además de promover la permanencia del personal.

16. Que a partir de lo expuesto, y a efecto de dar cabal cumplimiento al mandato del Congreso de la Unión se propone realizar una revisión acuciosa de los *Lineamientos* con el propósito de armonizar su estructura y contenido en relación con los requerimientos propios del Servicio Profesional, lo cual permitirá contar con un sólo documento normativo en materia de administración de recursos humanos del Instituto.

17. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción III la facultad del Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados.

18. Que la LFTAIP establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno.

19. Que en tal virtud, la Comisionada Presidente, en uso de las facultades que le confieren los artículos 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 21, fracciones II, III y IV del Reglamento Interior del Instituto, somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto de Acuerdo mediante el cual se amplía el plazo originalmente establecido en la fracción I del artículo Primero Transitorio de los *Lineamientos en materia de administración de recursos humanos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales*, aprobados mediante el Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, con objeto de dar cabal atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al servicio profesional.

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de transparencia; 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 17, 25, párrafo segundo, 29, fracción I, 31, fracción XII y Sexto Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 15, fracciones I, III y V, 16, fracción III, 21, fracciones II, III y IV y 26, fracciones VII, VIII y IX del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba ampliar el plazo originalmente establecido en la fracción I del artículo Primero Transitorio de los *Lineamientos en materia de administración de recursos humanos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales*, aprobados mediante el Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, con objeto de dar cabal atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al servicio profesional

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que realice las acciones necesarias para la instrumentación, coordinación y supervisión del presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INAI.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por parte del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el trece de julio dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.

Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidente

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

Yuri Zuckermann Pérez
Coordinador Técnico del Pleno

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13-07-2016.04, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.05

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES A LAS POLÍTICAS Y AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD DEL INSTITUTO.

CONSIDERANDO

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando entre otros, el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; así como de promover y difundir estos derechos.

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

3. Que el cuatro de mayo de dos mil quince, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambió su denominación a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto), y adquirió mejores y nuevas atribuciones que lo consolidan como Organismo garante a nivel nacional.

4. Que en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la LGTAIP, el nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.

5. Que la LGTAIP dispone en su artículo 2, fracción III, que entre sus objetivos está la de establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, asimismo

el artículo 43, fracción VII de la LFTAIP prevé que el Instituto a través de mecanismos de coordinación, podrá desarrollar programas de formación de usuarios de este derecho para incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la población.

6. Que el artículo 21, fracciones XV y XXI, en relación con los artículos 35, fracción VIII y 43, fracción VIII de la LFTAIP, establecen que el INAI tiene como atribuciones garantizar y promover condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la información a través de formatos establecidos, así como impulsar estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios para el ejercicio de este derecho.

7. Que la fracción IX, del artículo 43 de la LFTAIP, establece que el INAI, a través de los mecanismos de coordinación, podrá desarrollar con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, programas para la asesoría y orientación de su usuario en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información.

8. Que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) establece en el artículo 38, que dentro del objeto del Instituto se encuentra la promoción del conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana.

9. Que la LFTAIP señala en su artículo 35, fracción V que son atribuciones del Pleno, establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos de la ley.

10. Que el once de noviembre de dos mil quince, mediante Acuerdo ACT-PUB/11/11/2015.04, fueron aprobados por el Pleno del Instituto las Políticas y el Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

11. Que el cuatro de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo ACT-PUB/27/04/2016.04, mediante el cual el Pleno del INAI aprobó las modificaciones a los "Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales", entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

12. Que entre las modificaciones realizadas a los Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad del INAI, se encuentran los siguientes:

a) Se precisa que las solicitudes que realicen los particulares a través del CAS, se tramitarán por medio del Sistema de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia.
b) Se establece que los particulares podrán realizar solicitudes a los sujetos obligados contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del servicio de atención telefónica que proporciona el Tel-INAI.
c) Se prevé la posibilidad de que los particulares puedan interponer denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia, únicamente cuando los presuntos incumplimientos correspondan a los sujetos obligados de la Federación.
d) Se incorporan nuevas definiciones, además de precisarse otras ya existentes, a efecto de armonizar las referencias a la Plataforma Nacional de Transparencia, Módulo manual del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia y del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).

13. Que en el Segundo Punto del Acuerdo ACT-PUB/27/04/2016.04 se establece que la Coordinación Ejecutiva, a través de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad (DGPVS), contará con un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir del día de su entrada en vigor, para que realice las adecuaciones necesarias a las Políticas y al Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad, elaborándose dentro del plazo establecido los proyectos de actualización de ambos documentos, mismos que fueron sometidos al análisis de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho en su segunda sesión ordinaria celebrada el treinta de junio de dos mil dieciséis. .

14. Que la actualización de las Políticas y del Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad tiene como finalidad que estos documentos estén en concordancia con lo que establecen los Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad vigentes.

15. Que tanto en el Manual de Procedimientos, como en las Políticas antes referidas se actualizan los apartados correspondientes a las características del servicio, se incorporan nuevas definiciones, además de precisarse otras ya existentes a efecto de armonizar las referencias a la Plataforma Nacional de Transparencia, al módulo manual del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el CAS.

16. Que lo anterior permitirá a los servidores públicos adscritos al CAS y a los enlaces designados por las unidades administrativas que conforman el Instituto, seguir las directrices, procesos y procedimientos definidos para la atención de los usuarios en los servicios de consultas, orientaciones, asesorías y promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.

17. Que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asimismo que el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables.

18. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción III la facultad del Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados.

19. Que la LFTAIP establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno.

20. Que en términos del artículo 31, fracción XII de la LFTAIP y 21, fracciones II, III y IV del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a las Políticas y al Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en el artículo 6º, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III y Quinto Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracciones XV y XXI, 35, fracciones V y VIII y 43, fracciones VII, VIII y IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 14, 15, fracciones I y III y 21 fracciones II, III y IV del Reglamento Interior del Instituto; 7, fracción III del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las Comisiones del Instituto y Punto Segundo del Acuerdo mediante el cual se aprobaron las modificaciones a los Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones a las Políticas y al Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conforme a los documentos que como anexos forman parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo es de observancia general para todos los servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y de observancia obligatoria para los servidores adscritos al Centro de Atención a la Sociedad y los enlaces designados por las unidades administrativas.

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Ejecutiva para que, a través de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, realice las acciones necesarias para la instrumentación, coordinación y supervisión del presente Acuerdo.

CUARTO. Se abroga el Acuerdo número ACT-PUB/11/11/2015.04, de fecha once de noviembre de dos mil quince, así como los anexos que forman parte integral del mismo, que corresponden a las Políticas y el Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

QUINTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, junto con sus anexos, se publiquen en el portal de Internet del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

SEXTO. El presente Acuerdo, con sus respectivos anexos, entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidente

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

Yuri Zuckermann Pérez
Coordinador Técnico del Pleno

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13-07-2016.05, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016.

Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Disposiciones generales

1. El Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (CAS), es el área especializada del Instituto responsable de orientar y asesorar a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como de otorgar diversos servicios relacionados con el ejercicio de estos derechos, con el apoyo de las unidades administrativas que integran el Instituto.

2. Las Políticas de Atención del CAS tienen como objetivo establecer los criterios generales que deben seguir los servidores públicos para brindar servicios al público a través de los canales de atención habilitados.

3. Los servicios que otorga el CAS a la población están relacionados con el ámbito de competencia del INAI, por lo que otro tipo de servicios o apoyos requeridos que no están dentro de las atribuciones del Instituto no podrán ser atendidos.

4. El CAS debe contar con un directorio de enlaces de cada una de las unidades administrativas que integran el Instituto, quienes asesorarán y resolverán consultas en asuntos de su competencia con base en sus atribuciones. Lo anterior, con la finalidad de brindar un mejor servicio y atender los requerimientos especializados en las materias de sus respectivas competencias. Este directorio debe actualizarse de forma permanente, por lo que cada unidad administrativa deberá dar aviso de inmediato, al titular de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, cuando realice un cambio del enlace designado.

Ámbito de aplicación

5. Las Políticas de Atención son de observancia obligatoria para quienes colaboran directamente en el CAS y para los enlaces designados por las unidades administrativas para apoyar en la atención a los particulares, además de ser de observancia general para el resto del personal del INAI.

6. El funcionamiento del CAS está regulado por los Lineamientos de operación publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2016, así como por el Manual de Procedimientos correspondiente.

7. En el Manual de Procedimientos del CAS se establecen de manera ordenada y gráfica las actividades y responsabilidades que debe llevar a cabo el personal adscrito al CAS, para realizar un seguimiento adecuado, secuencial y cronológico de los servicios brindados, así como los niveles y el tiempo de atención a las consultas de los usuarios, la aplicación de métodos de trabajo y de control para brindar asesorías, orientaciones y servicios de calidad.

8. A los usuarios se les hará de su conocimiento la leyenda de información sobre los datos personales recabados para la prestación del servicio.

Características del Servicio

9. Los servicios que ofrece el CAS a los usuarios son los siguientes:

a) Orientación a las personas sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información, de acceso y corrección de datos personales en posesión de los sujetos obligados de la Federación;

b) Orientación a las personas sobre el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en posesión de particulares;

c) Registro de solicitudes de información pública, en los tres órdenes de gobierno;

d) Registro de solicitudes de protección de datos personales para sujetos obligados de la Federación;

e) Apoyo en la elaboración de solicitud de información y/o datos personales;

f) Seguimiento a solicitudes de información, recursos de revisión, recursos de protección de derechos y procedimientos de verificación de la Federación;

g) Asesoría y asistencia técnica que se deriven del uso del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI).

h) Apoyo en la elaboración de Recurso de Revisión contra sujetos obligados de la Federación;

i) Captura de notificaciones de incumplimientos a las resoluciones del Pleno;

j) Captura de denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la Federación;

k) Atención en el Módulo Itinerante del CAS;

l) Información sobre eventos y actividades institucionales;

m) Apoyo a los particulares para recuperación de contraseñas del sistema electrónico de solitudes de la Federación existente con anterioridad al funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como para la recuperación de contraseñas de la misma, y

n) Los demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como los que le encomiende el Pleno.

10. Los servicios que brinda el CAS a los usuarios son gratuitos y no estarán condicionados por ningún motivo.

11. En la prestación de los servicios que otorga el CAS se observarán los siguientes principios:

a) Calidad: en la atención se procurará en todo momento dejar satisfechos los requerimientos manifestados por los usuarios.

b) Eficiencia: los servicios que otorga el CAS deben ser aprovechando en todo momento los recursos humanos y materiales con que se cuentan para satisfacer las necesidades indicadas por los usuarios del servicio.

c) Eficacia: en la atención de las necesidades manifestadas por los usuarios del CAS se dará prioridad a la atención inmediata, sin que ello demerite la calidad del servicio otorgado.

d) Oportunidad: la información que se proporcione a los usuarios del CAS debe ser de utilidad y entregarse dentro de los plazos establecidos en el Manual de Procedimientos.

e) Certidumbre: los servicios otorgados a los usuarios del CAS deben realizarse en los términos de la normatividad aplicable.

f) Inclusión: el CAS buscará brindar la atención por igual a las personas, independientemente de la edad, género, origen, religión, lengua, etc.

12. El horario de operación en las Instalaciones del CAS es en días hábiles, de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas, en horario continuo.

13. Los días inhábiles del CAS son los establecidos por disposición de Ley y/o mediante acuerdo del Pleno.

14. Las instalaciones del CAS deben de estar permanentemente con condiciones de limpieza y orden, así como con el equipamiento tecnológico necesario para atender a los usuarios.

15. En los servicios que otorga el CAS se debe contar con una imagen institucional homogénea y aprovechar para socializar los productos de promoción de derechos y difusión institucional.

Canales y Modelo de Atención del Centro de Atención a la Sociedad

16. Para brindar los servicios que el CAS ofrece, se ponen a disposición de los usuarios los siguientes canales de atención:

a) Tel-INAI: los usuarios pueden llamar desde cualquier parte de la República al número gratuito 01800 835 43 24.

b) Correo Electrónico: los usuarios pueden enviar sus requerimientos a la siguiente dirección de correo electrónico: atencion@inai.org.mx

c) Presencial: los usuarios pueden acudir personalmente al CAS del INAI, el cual se encuentra ubicado en el siguiente domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México. Asimismo, los usuarios pueden recibir asesoría presencial en el Módulo Itinerante del CAS.

d) Correo Postal: los usuarios pueden enviar sus requerimientos al siguiente domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México.

17. El modelo de atención del CAS del INAI consta de tres niveles, dependiendo de la especialización y complejidad del requerimiento formulado por el usuario, siendo los siguientes:

a) Primer nivel de atención: constituye el primer contacto con las personas que presentan una consulta, ya sea de modo presencial o por medios remotos. Los

agentes adscritos a este nivel de atención otorgarán asesoría y orientación en materia del derecho de acceso y protección de datos.

b) Segundo nivel de atención: es el apoyo al primer nivel para la resolución de consultas que requieren acceso a bases de datos restringidas, así como resolver consultas con base en los criterios formulados por el Pleno y las Unidades Administrativas del Instituto.

c) Tercer nivel de atención: conformado por los representantes de cada una de las Unidades Administrativas que integran al Instituto para asesorar y resolver consultas en asuntos de su competencia con base en sus atribuciones. Para lo anterior, todas las Unidades Administrativas designarán a un enlace para dicha actividad.

Modelo de Interacción

18. El Modelo de Interacción del CAS establece los protocolos a seguir por los agentes, supervisores y enlaces para brindar los servicios requeridos por los usuarios, el cual tiene los siguientes principios:

a) Escuchar y atender lo expresado por los usuarios, considerando con seriedad y respeto todos los requerimientos, independientemente de las características de éstos.

b) Delimitar la interacción a los aspectos relacionados con el motivo del requerimiento, es decir, se evitará indagar información ajena al caso o que el usuario no esté dispuesto a referir.

c) Mantener una actitud objetiva frente a los casos que atiende.

d) Evitar pronunciarse sobre alternativas de solución o sugerir acciones que transgredan algún derecho o lesionen intencionalmente a terceras personas.

e) Enfocarse exclusivamente en brindar asesorías o servicios de acuerdo a la situación planteada por el usuario.

f) Se podrá negar los servicios del CAS a las personas que utilicen ofensas, amenazas o insultos.

Mejora Continua

19. Para la adecuada prestación de los servicios que otorga el CAS, el personal adscrito a esta área y los enlaces designados por las unidades administrativas, deberán recibir capacitación permanente en temas relacionados con el derecho de acceso a

la información, el derecho de protección de datos personales, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), así como temas relacionados con la prestación, gestión y administración de los servicios que otorga el CAS y de las atribuciones de los sujetos obligados.

20. El CAS debe implementar de manera permanente el monitoreo y evaluación de las asesorías y servicios otorgados por los servidores públicos, a fin de verificar la calidad, eficiencia, claridad, veracidad, certidumbre y oportunidad de la atención brindada a los usuarios, a fin de detectar áreas de oportunidad e implementar acciones de mejora continua.

21. El CAS ofrecerá a los usuarios una encuesta de calidad, la cual pueden responder de manera opcional, con la finalidad de que evalúen la calidad del servicio otorgado, que coadyuve a medir el grado de satisfacción de éstos con la atención recibida.

22. El CAS emitirá reportes mensuales sobre monitoreo y evaluación de los servicios otorgados, así como de resultados de las encuestas de calidad.

23. Dentro de las instalaciones del CAS, se habilitarán los espacios físicos adecuados y, en coordinación con las autoridades competentes, se implementarán los mecanismos, las facilidades y los procedimientos necesarios para brindar asesoría y atención a las personas con discapacidad o que hablen lengua indígena, siempre y cuando exista suficiencia presupuestal para ello.



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

COORDINACIÓN EJECUTIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD DEL INAI.

JULIO DE 2016.

Contenido

1.-INTRODUCCIÓN. 4
2.-OBJETIVO DEL MANUAL 5
3.-NORMATIVIDAD. 5
4.- DEFINICIONES: 6
5.- ALCANCE 11
6.- RESPONSABILIDADES: 12
7.- PROCEDIMIENTOS. 14
7.1. Procedimiento de Atención Telefónica. 15
Disposiciones generales: 15
7.2. Procedimiento de Atención vía correo electrónico 22
Disposiciones generales: 22
7.3. Procedimiento de Atención presencial. 28
Disposiciones generales: 28
7.4. Procedimiento de Atención vía postal. 37
Disposiciones generales. 37
7.5 Subprocesos de atención. 46
7.5.1 Subproceso A "captura de solicitud de información o datos personales a través de Tel-INAI." 47
7.5.2 Subproceso B "Apoyo en la elaboración de Recurso de Revisión contra sujetos obligados de la Federación." 49

7.5.3 Subproceso C "Orientaciones a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, así como sobre las atribuciones y actividades del Instituto." 51

7.5.4 Subproceso D "Asesoría y asistencia técnica que se deriven del uso del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)." 53

7.5.5 Subproceso E "Captura de notificaciones de incumplimientos a las resoluciones del Pleno, en contra de los sujetos obligados de la federación." 54

7.5.6 Subproceso F "Facilitar la elaboración e interposición de denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia realizadas en contra de los sujetos obligados de la Federación." 58

8. DATOS DE CONTACTO Y HORARIO DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD (CAS). 61

1.-INTRODUCCIÓN.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), en el artículo 2, fracción III, establece como objetivo, los procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, por su parte el artículo 42, fracción XIV, prevé que se deben garantizar las condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información.

Toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública LFTAIP establece en su artículo 43, fracción IX, que el Instituto a través de los mecanismos de coordinación, podrá desarrollar programas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información, y la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* (LFPDPPP) establece en el artículo 38, que dentro del objeto del Instituto se encuentra la promoción del conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana.

Mediante acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04, del veinticuatro de junio de dos mil quince, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó las modificaciones a su Estructura Orgánica, dentro de las cuales se establece una estructura del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) adscrito a la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad (DGPVS).

El CAS ofrece un servicio activo; que atiende consultas, orienta, asesora, facilita y promueve los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, por lo que el dinamismo de sus atribuciones requiere establecer parámetros que den certeza en los procedimientos administrativos y permitan medir los niveles de calidad en la atención otorgada. En los siguientes apartados se describe el quehacer de los servidores públicos que laboran en el CAS así como los procesos y procedimientos en los que intervienen.

El 12 de agosto de 2015 se aprobaron los "Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales", los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de agosto del mismo año. El 27 de abril de 2016 se aprobaron

modificaciones, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016.

Dichos lineamientos tienen como propósito establecer las reglas de operación del CAS y son de observancia obligatoria para el personal del INAI y de carácter vinculante para los sujetos obligados previstos en la LGTAIP, así como en la LFPDPPP.

El CAS se constituye como el medio autorizado para recibir y responder las consultas que formulen las personas al INAI, otorgar asesoría en materia de acceso a la información y protección de datos personales, así mismo, permite registrar las solicitudes de información en estas materias mediante el módulo manual del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI).

2.-OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo de este Manual de Procedimientos consiste en establecer el esquema de atención que brinda el CAS al público usuario a partir de cada uno de los canales disponibles, TELINAI, correo electrónico, postal y presencial, así como de seis subprocesos de atención que por su naturaleza requieren especificaciones precisas acerca del actuar y de las responsabilidades de los servidores públicos que intervienen en la operación del citado Centro.

3.-NORMATIVIDAD.

Es necesario precisar que se contempla la normatividad vigente.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
- Ley Federal de Archivos.
- Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
- Reglamento Interior del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
- Lineamientos del Centro de Atención a la Sociedad CAS.

4.- DEFINICIONES:

Acuse de recibo: El documento electrónico con número de folio único emitido por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y el Sistema de Medios de Impugnación, que acredita la hora y fecha de recepción de la solicitud presentada y del medio de impugnación interpuesto.

Agentes del CAS: Servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, adscritos al Centro de Atención a la Sociedad, integrantes del primer nivel de atención, responsables de atender las consultas de las personas por medios remotos y presenciales.

Asesoría: La orientación sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que se otorga por medios remotos y presenciales.

Atención presencial: La orientación, asesoría o servicio otorgado a las personas que acuden a las instalaciones del Instituto o en módulos itinerantes.

Bases de datos de acceso restringido: Los sistemas informáticos del INAI que contienen datos de carácter confidencial o reservado sobre trámites, procedimientos o servicios que serán consultados para otorgar los servicios del CAS;

Base de Conocimiento: Es la base de datos organizada, donde se almacena información temática para propósitos de aprendizaje, ofrece soluciones desde consultas ya resueltas.

Canales de Comunicación: Los medios a través de los cuales las personas hacen llegar al CAS sus consultas de manera remota o presencial.

Captura: El ingreso de datos en el sistema de gestión que permite el registro, administración, gestión y monitoreo de las asesorías y servicios otorgados por el CAS;

Centro de Atención a la Sociedad (CAS): El área especializada del INAI responsable de orientar y asesorar a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como de otorgar los servicios descritos en los lineamientos.

Consulta: La petición de orientación, asesoría o servicio formulada por una persona al CAS a través de los canales de comunicación, en la que se registran sus datos de contacto y estadísticos.

Contenidos informativos: Información de interés para los agentes, que los supervisores recaban a través de notas periodísticas, publicaciones, entre otros.

Documentos de apoyo: Son todos los instrumentos disponibles que sirven de soporte para brindar las asesorías, como son Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Manuales, Disposiciones, Acuerdos, entre otros.

Denuncia: El acto mediante el cual las personas hacen del conocimiento del INAI alguno de los siguientes hechos: i) presuntas violaciones a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares; ii) posibles faltas o incumplimientos a las obligaciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales sólo se recibirán

cuando se trate posibles incumplimientos por parte de Sujetos Obligados del ámbito Federal ;

Días hábiles: Todos los días del año a excepción de los sábados, domingos, inhábiles por disposición de Ley así como, los establecidos como tales mediante acuerdo del Pleno;

Elaboración de Recurso de Revisión: Apoyo brindado por parte de los agentes del CAS durante una asesoría presencial y que consiste en facilitar y auxiliar a los particulares en la elaboración de recursos de revisión que decidan tramitar en contra de respuestas emitidas por Sujetos Obligados del ámbito federal;

Elaboración de solicitud de información: Consiste en el apoyo y facilitación, por parte de los agentes a una persona, en la elaboración de una solicitud de información a través del SISAI;

Enlace de Unidad Administrativa: Es la persona designada por los titulares de las diferentes áreas, para coadyuvar en las respuestas que otorga el CAS y responsable de atender el tercer nivel de atención.

Evaluación: Es la acción posterior al servicio que realizan Evaluadores y para obtener resultados traducidos en "valores" con respecto a las respuestas otorgadas por los agentes con base en la normativa aplicable y el Modelo de Interacción. Los criterios que se deben considerar serán cuantitativos y se capturarán.

Evaluadores: Responsables de evaluar la respuesta otorgada con base en la normativa aplicable, los protocolos y la etiqueta de atención apegándose a los parámetros definidos en el manual de procedimientos.

Estrados: Espacio físico mediante el cual, el CAS publica sus acuerdos y notificaciones.

Guiones de respuesta: Se refiere a los textos que sirven como plantillas y que se utilizan en los diversos casos planteados por los usuarios.

Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Lineamientos: Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Medios Remotos: Los canales de comunicación para atender a las personas a distancia, comprenden: línea telefónica, correo electrónico, correo postal, chat y formulario en página web y los que se determinen por el Pleno del Instituto.

Modelo de Interacción: El protocolo que debe seguir por el personal del Centro de Atención a la Sociedad y los Enlaces de las Unidades Administrativas, y el cual es una guía para focalizar y aplicar la escucha activa durante la orientación y/o asesoría y la conclusión de la interacción.

Módulo Itinerante del CAS (MiCAS): El módulo u oficina móvil que permite brindar el servicio de atención presencial a las personas en su localidad.

Módulo manual del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información: Es un componente del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) que permite el registro y la captura de las solicitudes de información por vía telefónica y presencial con el apoyo del CAS. En el caso de las solicitudes recibidas en el CAS a través de correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, escrito libre o cualquier otro medio distinto al Módulo electrónico del SISAI, deberán de contar con los datos necesarios para formular la solicitud en el Módulo manual, de no ser así, se le comunicará por el mismo medio que complemente los datos requeridos;

Monitoreo: Es la acción en tiempo real que realizan los supervisores para dar seguimiento y mejorar la atención que otorgan los agentes en relación a los servicios que brindan del CAS por medios remotos y presencial.

Número de folio: El número identificador de una solicitud de información, que genera automáticamente el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información;

Número de reporte: El número identificador de las consultas que ingresan al CAS generado automáticamente por el sistema;

Operador: Servidor público con categoría de subdirector de área, responsables de diseñar los planes de contingencias; elaborar los contenidos informativos dirigidos a las personas y realizar la propuesta del programa de capacitación del CAS.

Primer Nivel de Atención: Atención mediante la cual se brinda asesoría y orientación en materia de los derechos de acceso y protección de datos personales, el cual constituye el primer contacto con las personas que presentan una consulta, ya sea de modo presencial o por medios remotos y es prestado por los agentes del CAS.

Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el artículo 49 de la Ley General y cuyo sitio de Internet es: www.plataformadetransparencia.org.mx

Registro de solicitudes de información: La actividad que llevan a cabo los agentes a través de la cual capturan solicitudes de información pública y/o de datos personales en el módulo manual del SISAI;

Reporte de Atención: El documento generado por los agentes en el sistema en el cual registran la consulta y que documenta la respuesta otorgada por el servidor público correspondiente.

Responsable del Servicio: Encargado de coordinar, administrar y supervisar la operación del CAS; de aprobar contenidos informativos dirigidos tanto a los agentes como a las personas; presentar y ejecutar el programa anual de capacitación para el personal del CAS, además de establecer y administrar los parámetros de operación.

Segundo Nivel de Atención: Es el apoyo con el que cuentan los agentes que brindan atención de primer nivel para la resolución de consultas que requieren acceso a bases de datos restringidas, o aquellas consultas con base en los criterios formulados por el Pleno y las Unidades Administrativas del Instituto.

Solicitud múltiple: Captura en el módulo manual del Sistema de Solicitudes de Acceso a la información, para procesar de forma simultánea una solicitud a un máximo de 33 sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno, conforme a la capacidad técnica de la Plataforma Nacional;

Supervisores: Responsables de consultar las bases de datos de acceso restringido; elaborar respuesta a consultas de segundo nivel de atención; y elaborar los contenidos informativos dirigidos a los agentes, documentos de apoyo, guiones de respuesta, contenidos de la base de conocimiento, reportes e informes de operación.

Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad: Herramienta tecnológica que se emplea en el CAS para el registro, gestión y monitoreo de las consultas a través de los canales de atención y, en su caso, para el envío de las respuestas.

SISAI: Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información que forma parte de la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del cual las personas presentan sus solicitudes de acceso a la información.

Tercer Nivel de Atención: Es el apoyo brindado al primer y segundo nivel, mismo que recae en los enlaces de las Unidades Administrativas que integran el Instituto, para asesorar y resolver consultas en asuntos de su competencia con base en sus atribuciones. Para lo anterior, todas las Unidades Administrativas designarán a un enlace para dicha actividad.

Usuario: Persona que hace uso de los servicios que otorga el CAS.

5.- ALCANCE.

El presente Manual es de observancia obligatoria para quienes colaboran en el Centro de Atención a la Sociedad, así como para los enlaces de las Unidades Administrativas, y en general para todos los servidores públicos del Instituto.

De conformidad con los lineamientos, la atención del CAS será a través de:

Agentes: Primer nivel de atención.
Supervisores: Segundo nivel de atención, y
Enlaces designados por las Unidades Administrativas: Tercer nivel de atención.

El primer y segundo nivel de atención, corresponden al personal del CAS.

El tercer nivel corresponde a los "Enlaces designados por las Unidades Administrativas". En caso de incompetencia de la unidad administrativa para atender una consulta, ésta deberá ser turnada al área competente al día hábil siguiente de haberla recibido, debidamente motivada y fundada.

El plazo para emitir una respuesta al particular será de 10 días hábiles a partir de que se reciba la consulta en el CAS.

6.- RESPONSABILIDADES.

El CAS es el medio autorizado para recibir y atender las peticiones de servicios que formulen los usuarios al INAI, a través de las figuras de agentes, evaluadores, supervisores, operador y responsable del servicio, quienes tienen las siguientes responsabilidades:

Agentes:

- Darse de alta en el sistema;
- Atender consultas (de primer nivel) de usuarios por medios remotos y presenciales.
- Ejecutar el Modelo de Interacción;
- Registrar en el módulo manual y electrónico del SISAI, solicitudes de información pública y/o de datos personales a petición de usuarios del CAS y, en su caso, dar seguimiento a las mismas;
- Consultar bases de datos necesarias para atender servicios de primer nivel;
- Brindar atención presencial a personas en el Módulo Itinerante del CAS (MiCAS);
- Apegarse a los parámetros establecidos en el presente Manual;

- Registrar diariamente en el sistema los reportes de las consultas designadas;
- Cumplir con lo establecido en las políticas de atención, y
- Otras actividades encomendadas por el superior jerárquico.

Evaluadores:

- Evaluar de manera permanente y de forma aleatoria, las respuestas otorgadas por los agentes con base en la normativa aplicable;
- Apoyar y monitorear en tiempo real la atención otorgada por los agentes, por medios remotos y presenciales;
- Elaborar, evaluar y actualizar los protocolos de atención;
- Supervisar que los agentes se apeguen a lo establecido en el presente Manual y en las políticas de atención;
- Brindar atención presencial a personas en el Módulo Itinerante del CAS (MiCAS), y
- Otras actividades encomendadas por el superior jerárquico.

Supervisores:

- Consultar bases de datos necesarias para atender servicios de segundo nivel;
- Elaborar contenidos informativos dirigidos a los agentes;
- Elaborar documentos de apoyo, guiones de respuesta y contenidos de la base de conocimiento;
- Elaborar y comunicar a superiores jerárquicos reportes e informes de operación;
- Sugerir modificaciones al Manual de Procedimientos y a las políticas de atención;
- Elaborar informes en el ámbito de su competencia;
- Brindar atención presencial a personas en el Módulo Itinerante del CAS (MiCAS) y
- Elaborar las respuestas a consultas de segundo nivel de atención, y
- Otras actividades encomendadas por el superior jerárquico.

Operador:

- Tener acceso a las bases de datos necesarias para atender servicios de primer y segundo nivel;

- Elaborar los contenidos informativos dirigidos a los usuarios;
- Presentar propuestas para el programa anual de capacitación para el personal del CAS;
- Diseñar planes de contingencia;
- Elaborar propuestas de actualización del Manual de Procedimientos del CAS y de las políticas de atención;
- Brindar atención presencial a personas en el Módulo Itinerante del CAS (MiCAS), y
- Otras actividades encomendadas por el superior jerárquico.

Responsable del servicio:

- Coordinar, administrar y supervisar la operación del CAS;
- Aprobar contenidos informativos dirigidos a personas y agentes;
- Revisar, validar, presentar y ejecutar el programa anual de capacitación para el personal del CAS;
- Coordinar e integrar los informes sobre los servicios que brinda el CAS;
- Acceder a las bases de datos necesarias para atender los servicios del CAS;
- Aprobar el Modelo de Interacción;
- Establecer y administrar los parámetros de operación;
- Suscribir documentos en el ámbito de sus atribuciones que permitan evaluar y monitorear la calidad de los servicios, y
- Otras actividades encomendadas por el superior jerárquico.

En caso de ausencia de algunos de los servidores públicos, éstos serán suplidos por aquel que ostenta el cargo inferior inmediato, y así sucesivamente; con excepción de los agentes.

7.- PROCEDIMIENTOS.

El CAS ofrece una amplia gama de servicios, que deben atenderse de manera particular en función de las necesidades específicas manifestadas por el usuario en su requerimiento, para ello el CAS establece los modelos de interacción que permiten focalizar, identificar y resolverlos.

Para tal efecto, se establecen los procedimientos basados en los canales de atención como vía telefónica, presencial, correo electrónico y postal, mismos que se describen a continuación:

7.1. Procedimiento de Atención Telefónica.

Disposiciones generales:

La atención vía telefónica se brinda a través del Tel-INAI con número 01800-835-43-24.

El CAS utiliza el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad para automatizar y gestionar la recepción de llamadas de manera general, a través de él, se pueden obtener datos estadísticos para medir la calidad del servicio. Los agentes deberán darse de alta en este sistema para bridar el servicio a los usuarios.

Las unidades administrativas que reciban consultas vía telefónica, deberán transferirlas de forma inmediata a la extensión 2480, designada al CAS.

De manera permanente y de forma aleatoria, los evaluadores realizarán el monitoreo en tiempo real y evaluaciones de los servicios que se otorguen.

En caso de identificar algún error en el sistema telefónico, deberán reportarlo en el momento a la Dirección General de Tecnologías de la Información, para que de manera inmediata sea atendido.

Se podrá negar el servicio que brinda el cas a las personas que utilicen ofensas, amenazas o insultos, situaciones que se registraran en la bitácora del CAS.

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

COORDINACIÓN EJECUTIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

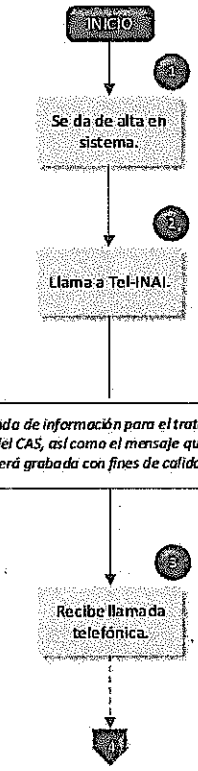
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía telefónica.

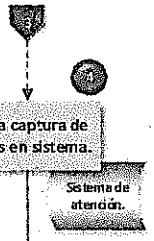
Última actualización: **Mes:** 08 **Año:**2016 **Elaboró:**CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
AGENTE	1	Se da de alta en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
USUARIO	2	Llama a Tel-INAI (01800 835 43 24).	
		Escucha leyenda de información para el tratamiento de datos personales del CAS, así como el mensaje que informa que la llamada será grabada con fines de calidad del servicio.	
AGENTE	3	Recibe llamada telefónica e implementa "Modelo de Interacción".	



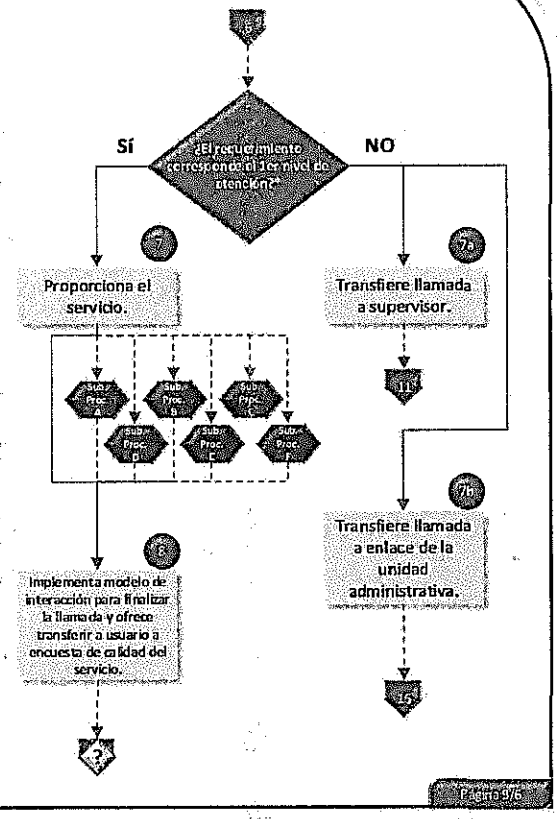
Página 1/6

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía telefónica.	Última actualización: Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
AGENTE	4	Inicia captura de datos en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
USUARIO	5	Expone su petición de servicio.	
AGENTE	6	Analiza el servicio solicitado por el usuario.	

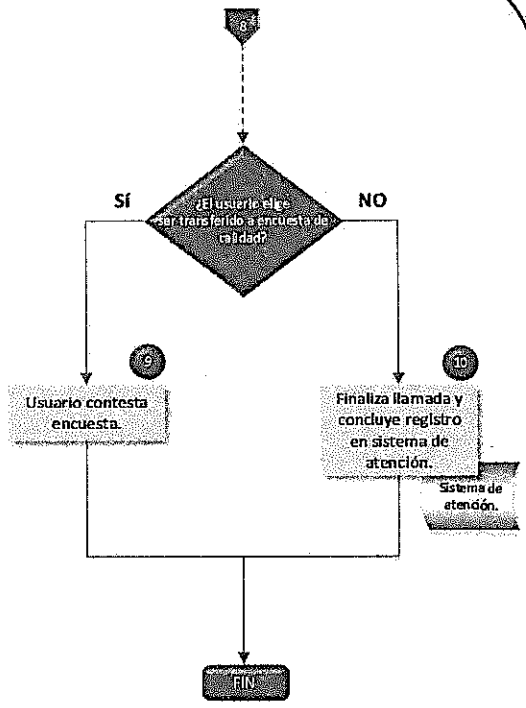
Página 2/6

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.	
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía telefónica.	Última actualización: Mes: 08	Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
AGENTE		***¿El requerimiento corresponde a primer nivel de atención?**** *Esta decisión se aplicará de conformidad con lo establecido en el numeral 17 de las "Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales".*	
	7	**Sí: atención de primer nivel.** Proporciona el servicio. Se puede enlazar con alguno de los subprocesos A, B, C, D, E, F o con la actividad 8.	
	7a	**No: atención de segundo nivel.** Transfiere llamada a supervisor y turna la consulta a través Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). Se enlaza con la actividad 11.	
	7b	**No: atención de tercer nivel.** Transfiere llamada a enlace de la unidad administrativa y turna la consulta a través Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). Se enlaza con la actividad 16.	
	8	Implementa modelo de interacción para finalizar la llamada y ofrece transferir a usuario a encuesta de calidad del servicio.	

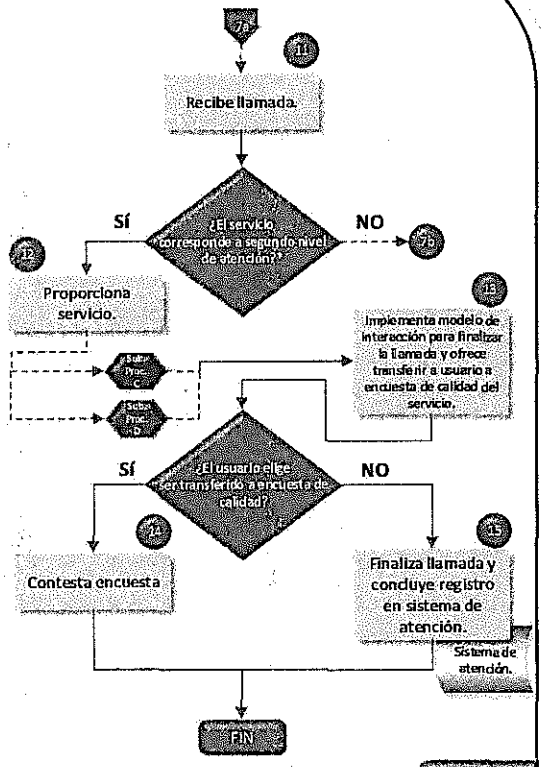
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.	
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI / Procedimiento de atención vía telefónica.	Última actualización: Mes: 08 Año:2016	Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
		¿El usuario elige ser transferido a encuesta de calidad?	
USUARIO	9	Sí: Usuario contesta encuesta.	
AGENTE	10	No: Finaliza llamada y concluye registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
		FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL.	



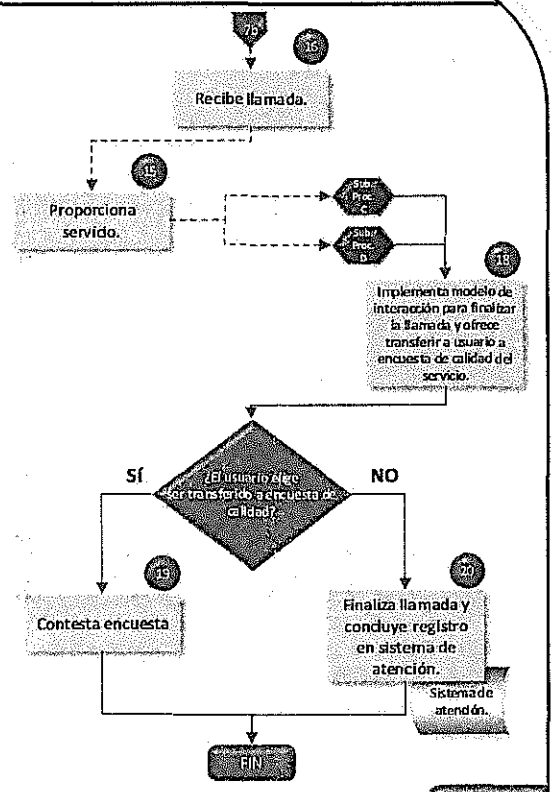
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía telefónica.	Última actualización: Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
SUPERVISOR (SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN)	11	Recibe llamada de usuario, así como la consulta a través Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
		¿El servicio corresponde a segundo nivel de atención?* *Esta decisión se aplicará de conformidad con lo establecido en el numeral 17 de las "Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales".*	
	12	**Sí:** Proporciona el servicio, *(se puede enlazar con alguno de los subprocesos C y D).*	
		No: Se enlaza con la actividad 7b.	
	13	Implementa modelo de interacción para finalizar la llamada y ofrece transferir a usuario a encuesta de calidad del servicio.	
		¿El usuario elige ser transferido a encuesta de calidad?	
USUARIO	14	**Sí:** Usuario contesta encuesta.	
SUPERVISOR (SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN)	15	**No:** Finaliza llamada y concluye registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
		FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE SEGUNDO NIVEL.	



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía telefónica.	Última actualización: Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
ENLACE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (TERCER NIVEL DE ATENCIÓN)	16	Recibe llamada de usuario, así como la consulta a través Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
	17	Proporciona servicio, *(se puede enlazar con alguno de los subprocesos C y D).*	
	18	Implementa modelo de interacción para finalizar la llamada y ofrece transferir a usuario a encuesta de calidad del servicio. **¿El usuario elige ser transferido a encuesta de calidad?**	
USUARIO	19	**Sí:** Usuario contesta encuesta.	
ENLACE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (TERCER NIVEL DE ATENCIÓN)	20	**No:** Finaliza llamada y concluye registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). ***FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL.***	



7.2. Procedimiento de Atención vía correo electrónico.

Disposiciones generales:

El servicio que otorga el CAS a través de correo electrónico, se realiza exclusivamente a través de la cuenta atencion@inai.org.mx, la cual será administrada por los supervisores.

Los agentes deben notificar las asesorías de primer nivel a los usuarios, a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad, por medio de la cuenta atencion@inai.org.mx.

El responsable del servicio podrá acceder a la cuenta atencion@inai.org.mx a efecto de realizar consultas.

Las consultas que se reciban fuera del horario de servicio, se considerarán como recibidas el día hábil siguiente a las 9:00 horas.

Las unidades administrativas que reciban consultas vía correo electrónico, deberán remitirlas a la cuenta atencion@inai.org.mx, en un plazo no mayor a 3 días hábiles. A partir de la fecha de recepción en la referida cuenta, comenzarán a correr los plazos de respuesta para el CAS.

Cuando cualquier servidor público reciba correos electrónicos de particulares que tengan como finalidad interponer cualquier medio de impugnación, deberán hacerlo del conocimiento inmediato del CAS, reenviándolo, para que éste, de conformidad con lo señalado en el numeral 9, inciso h), de las "Características del Servicio", contenido en las Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como con los lineamientos Segundo fracción XII, Tercero, fracciones I, II y V, y Quinto incisos a) y h), de los Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lleve a cabo las acciones correspondientes.

Tiempo de atención de correos electrónicos.

Primer nivel de atención: máximo 48 horas

Segundo nivel de atención: máximo 72 horas

Tercer nivel de atención: máximo de 10 días hábiles, salvo que implique un pronunciamiento del Pleno.

Las unidades administrativas son responsables de elaborar y enviar la respuesta a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad, mismo que será notificada al usuario por el personal del CAS.
En caso de retrasos en la atención, se deberán documentar los motivos para extender los plazos indicados y comunicar a los usuarios las razones y la fecha programada de respuesta.

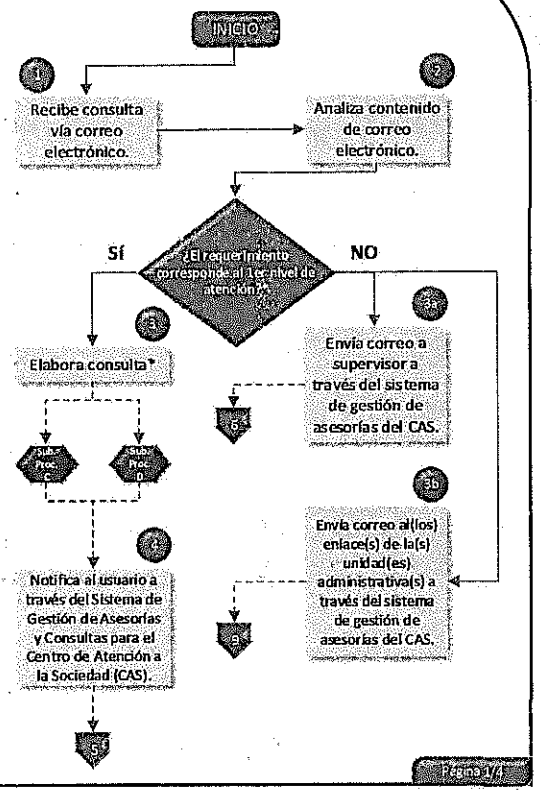
No se atenderán correos electrónicos que utilicen ofensas, amenazas o insultos, en estos casos se deberá registrar el incidente señalando el correo, texto y fecha de recepción en la bitácora del CAS.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía correo electrónico.

Última actualización: Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
AGENTE	1	Recibe consulta vía correo electrónico a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
	2	Analiza el contenido del correo electrónico.	
		¿El requerimiento corresponde a primer nivel de atención?* *Esta decisión se aplicará de conformidad con lo establecido en el numeral 17 de las "Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales".*	
	3	**Sí: atención de primer nivel.** Elabora consulta*, se puede enlazar con alguno de los subprocesos C y D. **En caso de tener dudas consulta con evaluadores y supervisores.*	
	3a	**No: atención de segundo nivel.** Previa consulta, envía correo electrónico al supervisor a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad . Se enlaza con la actividad 5.	
	3b	**No: atención de tercer nivel.** Previa consulta, envía correo electrónico al(los) enlace(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) y turna la consulta a través Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad. Se enlaza con la actividad 8.	
	4	Notifica al usuario a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). Se enlaza con la actividad 5.	

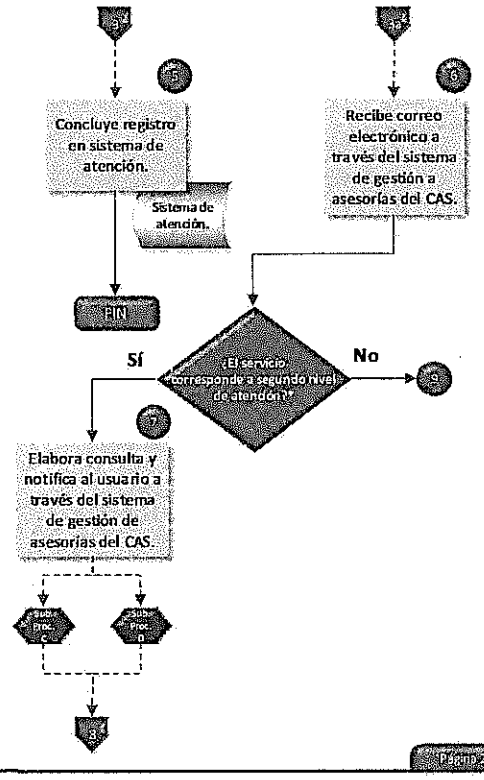


Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

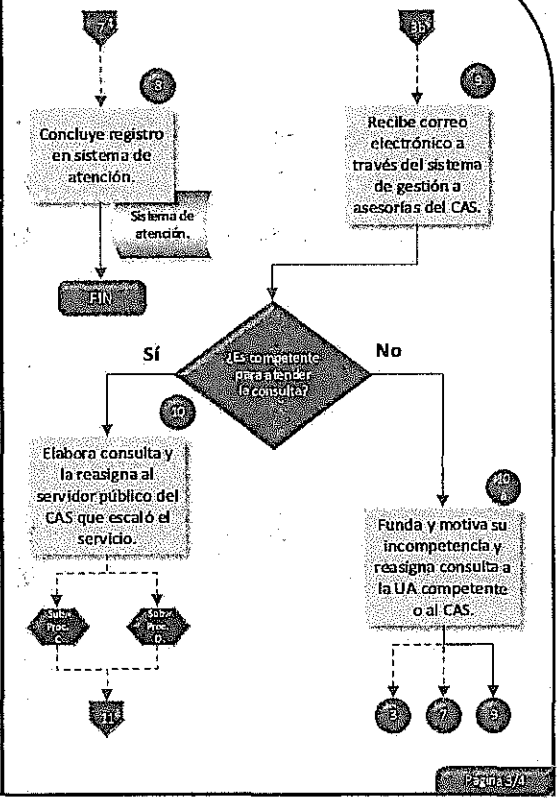
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía correo electrónico.

Última actualización: Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
AGENTE	5	Concluye registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). ***FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL.***	
SUPERVISOR (SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN)	6	Recibe correo electrónico a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). **¿El servicio corresponde a segundo nivel de atención?*** *Esta decisión se aplicará de conformidad con lo establecido en el numeral 17 de las "Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales".*	
	7	**Sí:** Elabora consulta *(se puede enlazar con alguno de los subprocesos C y D)* y notifica al usuario a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). Se enlaza con la actividad 8. **No:** Previa consulta, se enlaza con la actividad 9.	



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.	
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía correo electrónico.	Última actualización: Mes: 08	Año:2016 Elaboró:CAS

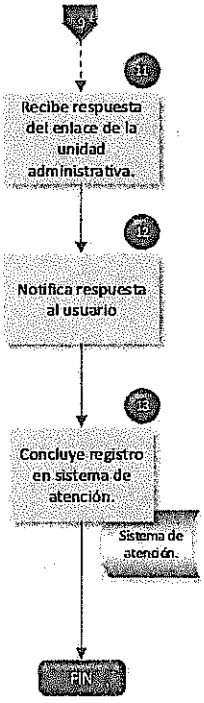
Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
SUPERVISOR (SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN)	8	Concluye registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). ***FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE SEGUNDO NIVEL.***	
ENLACE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (TERCER NIVEL DE ATENCIÓN)	9	Recibe correo electrónico a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). **¿Es competente para atender la consulta?**	
	10	**Sí:** Elabora consulta *(se puede enlazar con alguno de los subprocesos C y D)* y la reasigna al servidor público del CAS que escaló el servicio a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
	10a	**No:** Funda y motiva su incompetencia. Previa consulta, reasigna el caso a la unidad administrativa apta para atender, o a personal del CAS si corresponde a primer o segundo nivel de atención, lo anterior a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). **Puede enlazarse con las actividades 3, 6 u 8.**	

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía correo electrónico.

Última actualización: **Mes:** 08 **Año:**2016 **Elaboró:**CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
AGENTE	11	Recibe respuesta del enlace de la unidad administrativa a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
	12	Notifica al usuario a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
	13	Concluye registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). ***FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL.***	



Página 4/4

7.3. Procedimiento de Atención presencial.

Disposiciones generales:

El servicio que brinda el CAS de manera presencial, se realiza mediante dos vías:

a) En las oficinas de dicho Centro ubicadas en Av. Insurgentes Sur # 3211, Planta Baja, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México.

b) En los Módulos Itinerantes del CAS (MiCAS), ubicados temporalmente fuera de las instalaciones del Instituto.

La atención vía presencial en las oficinas del CAS se otorgará en horas y días hábiles, dentro del horario establecido. En el MiCAS en los días y horarios que se determinen.

Las unidades administrativas que reciban consultas vía presencial, deberán canalizar a los usuarios de forma inmediata a las oficinas del CAS.

La atención presencial se brindará en los módulos destinados para ello.

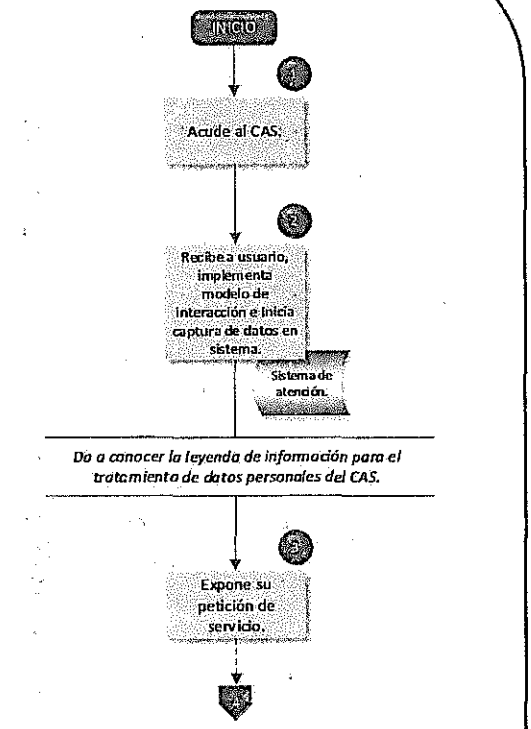
La asignación de agentes para atención presencial se hará de acuerdo a la demanda de los usuarios.

Se podrá negar el servicio del CAS a las personas que utilicen ofensas, amenazas, insultos o, lo cual quedará registrado en la bitácora del CAS.

Los usuarios podrán hacer uso de la impresora para obtener acuses de recibo de solicitudes de información, recursos de revisión y/o documentales exclusivamente para aquellas relacionadas con servicios que brinda este Instituto.

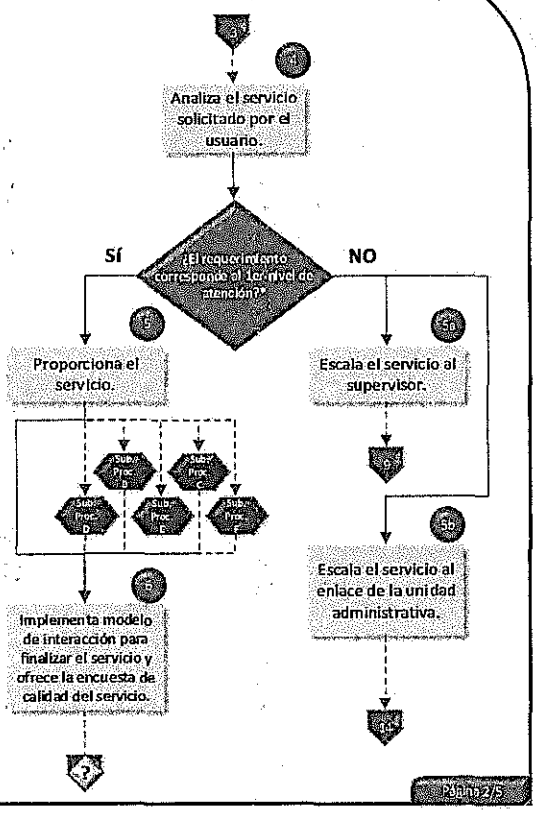
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS.	Última actualización: Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
USUARIO	1	Acude a instalaciones del Centro de Atención a la Sociedad.	
AGENTE	2	Recibe al usuario, implementa modelo de interacción y comienza registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). *Da a conocer la leyenda de información para el tratamiento de datos personales del CAS.*	
USUARIO	3	Expone su petición de servicio.	

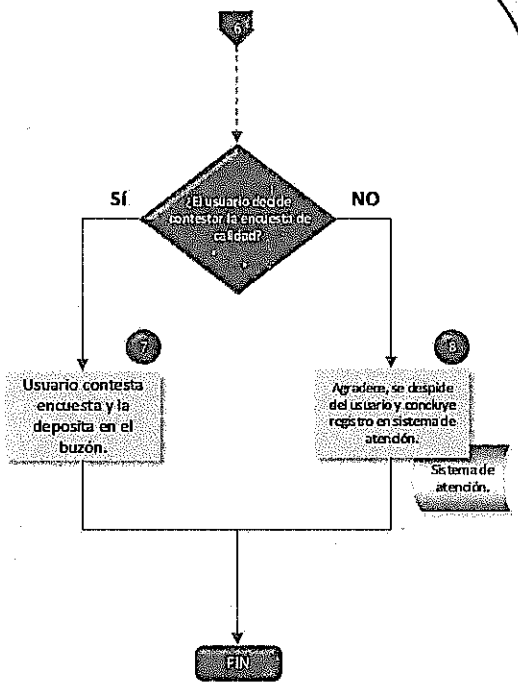


Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS. | **Última actualización:** Mes: 08 Año:2016 | Elaboró:CAS

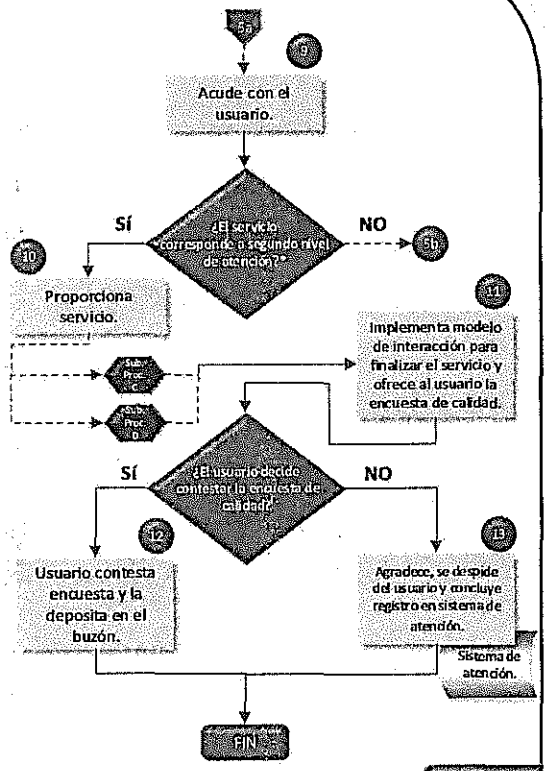
Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
AGENTE	4	Analiza el servicio solicitado por el usuario. ***¿El requerimiento corresponde a primer nivel de atención?**** *Esta decisión se aplicará de conformidad con lo establecido en el numeral 17 de las "Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales".* **Sí: atención de primer nivel.** Proporciona el servicio. Se puede enlazar con alguno de los subprocesos B, C, D, E, F o con la actividad 6.	
	5a	**No: atención de segundo nivel.** Previa consulta, escala el servicio al supervisor y turna la consulta a través Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). Se enlaza con la actividad 9.	
	5b	**No: atención de tercer nivel.** Previa consulta, escala el servicio al(los) enlace(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) y turna la consulta a través Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad. Se enlaza con la actividad 14.	
	6	Implementa modelo de interacción para finalizar el servicio y ofrece al usuario la encuesta de calidad.	

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
		¿El usuario decide contestar la encuesta de calidad del servicio?	
USUARIO	7	**Sí:** Usuario contesta encuesta y la deposita en el buzón colocado en el Centro de Atención a la Sociedad.	
AGENTE	8	**No:** Agradece, se despide del usuario y concluye registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). ***FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL.***	



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.		
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS.	**Última actualización:** Mes: 08	Año:2016	Elaboró:CAS

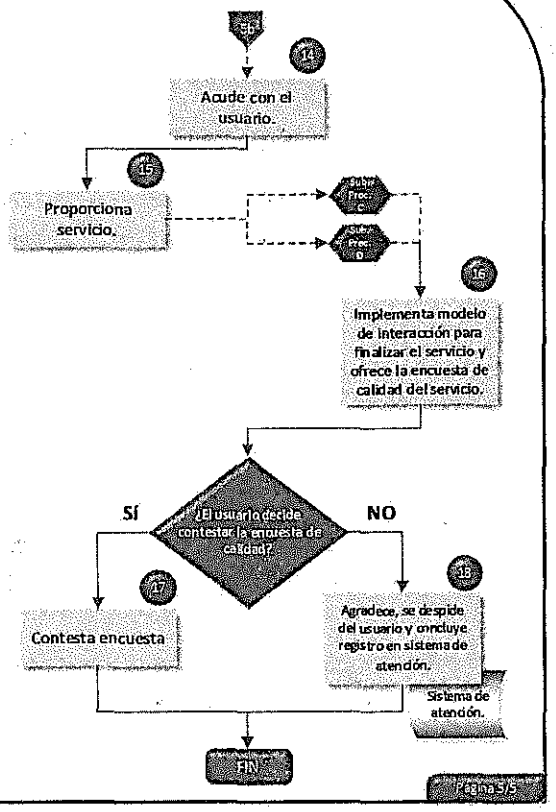
Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
SUPERVISOR (SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN)	9	Acude con el usuario, y recibe la consulta a través Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). **¿El servicio corresponde a segundo nivel de atención?*** *Esta decisión se aplicará de conformidad con lo establecido en el numeral 17 de las "Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales".*	
	10	**Sí:** Proporciona el servicio, *(se puede enlazar con alguno de los subprocesos C y D).* **No:** Se enlaza con la actividad 5b.	
	11	Implementa modelo de interacción para finalizar el servicio y ofrece al usuario la encuesta de calidad. **¿El usuario decide contestar la encuesta de calidad?**	
USUARIO	12	**Sí:** Usuario contesta encuesta y la deposita en el buzón colocado en el Centro de Atención a la Sociedad.	
SUPERVISOR (SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN)	13	**No:** Agradece, se despide del usuario y concluye registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). ***FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE SEGUNDO NIVEL.***	



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.		
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS.	Última actualización: Mes: 08	Año:2016	Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción
ENLACE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (TERCER NIVEL DE ATENCIÓN)	14	Acude con el usuario, y recibe la consulta a través Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).
	15	Proporciona servicio, *(se puede enlazar con alguno de los subprocesos C y D).*
	16	Implementa modelo de interacción para finalizar el servicio y ofrece al usuario la encuesta de calidad.
		¿El usuario decide contestar la encuesta de calidad?
USUARIO	17	**Sí:** Usuario contesta encuesta.
ENLACE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (TERCER NIVEL DE ATENCIÓN)	18	**No:** Agradece, se despide del usuario y concluye registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).
		FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL.

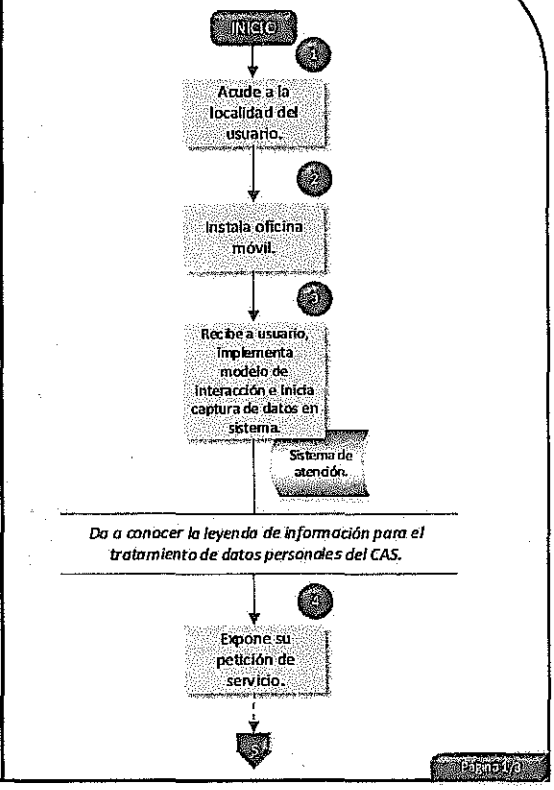
Diagrama



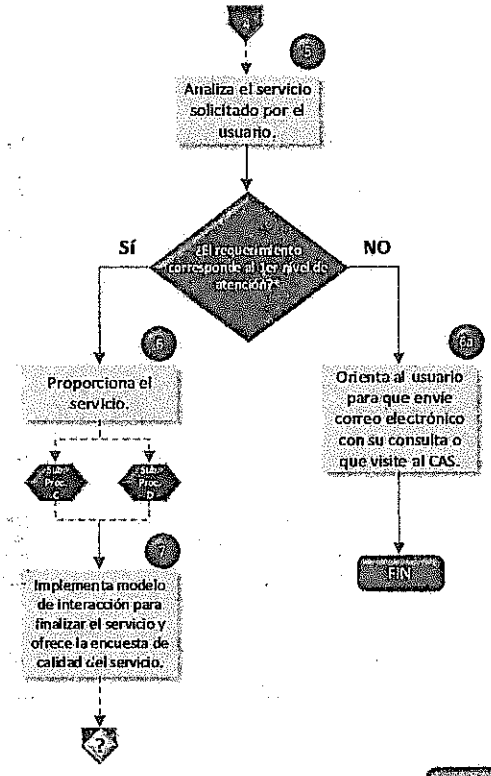
Página 3/5

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.	
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía presencial en MI CAS.	Última actualización: Mes: 08 Año:2016	Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
PERSONAL DEL CAS	1	Acude a la localidad del usuario.	
	2	Instala el stand u oficina móvil que permite brindar el servicio de atención presencial..	
	3	Recibe al usuario, implementa modelo de interacción y comienza registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
		Da a conocer la leyenda de información para el tratamiento de datos personales del CAS.	
USUARIO	4	Expone su petición de servicio.	

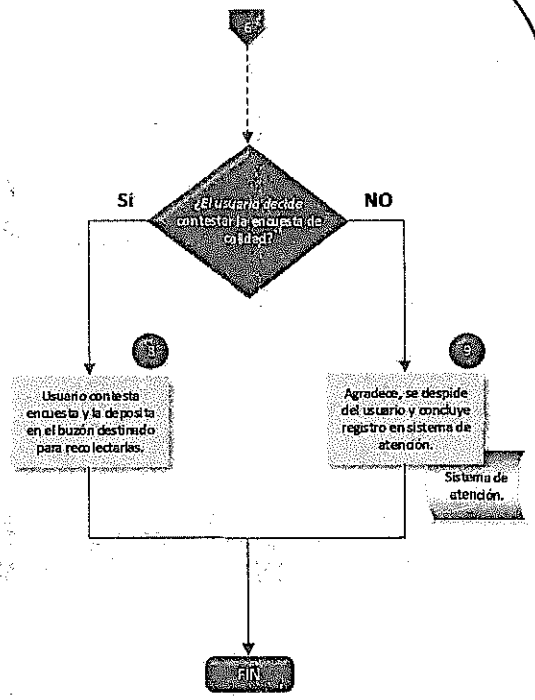


Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
PERSONAL DEL CAS	5	Analiza el servicio solicitado por el usuario.	
		¿El requerimiento corresponde a primer nivel de atención?* *Esta decisión se aplicará de conformidad con lo establecido en el numeral 17 de las "Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales".*	
	6	**Sí: atención de primer nivel.** Proporciona el servicio, se puede enlazar con alguno de los subprocesos C y D. Se enlaza con la actividad 7.	
	6a	**No: atención de segundo y tercer nivel.** Orienta al usuario para que envíe la consulta especializada al correo de atencion@inai.org.mx o que acuda a las instalaciones del Centro de Atención a la Sociedad, ubicado en: Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04530.	
	7	Implementa modelo de interacción para finalizar el servicio y ofrece al usuario la encuesta de calidad.	



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.		
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía presencial en MI CAS.	Última actualización: Mes: 08	Año:2016	Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
		¿El usuario decide contestar la encuesta de calidad del servicio?	
USUARIO	8	**Sí:** Usuario contesta encuesta y la deposita en el buzón destinado para recolectarlas.	
AGENTE	9	**No:** Agradece, se despide del usuario y concluye registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
		FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN VÍA PRESENCIAL A TRAVÉS DEL MÓDULO ITINERANTE DEL CAS (MiCAS).	



7.4. Procedimiento de Atención vía postal.

Disposiciones generales.

El servicio que presta el CAS a través de correo postal, se realiza por medio de la recepción física de escritos en el domicilio de dicho centro, ubicado en Av. Insurgentes Sur # 3211, Planta Baja, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530. Ciudad de México.

Las Unidades Administrativas del Instituto que, en su caso, reciban consultas vía postal, deberán remitirlas, al Titular de dicho Centro, en un plazo no mayor a 3 días hábiles; a partir de que conste la recepción del documento por parte del CAS comenzarán a correr los plazos de respuesta.

Los supervisores y evaluadores son los responsables de analizar y generar el registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad, por este medio se turnarán las consultas recibidas a los niveles de atención correspondientes.

La atención a escritos de usuarios se otorgará en horas y días hábiles.

Tiempo de atención vía postal.

Primer nivel de atención: máximo 48 horas.

Segundo nivel de atención: máximo 72 horas.

Tercer nivel de atención: máximo de 10 días hábiles, salvo que implique un pronunciamiento del Pleno.

Cuando por medio del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad, se escale una consulta al Tercer Nivel de Atención, la Unidad Administrativa elaborará y turnará la respuesta al CAS, misma que será notificada al usuario por el medio que haya señalado o, en su caso, por estrados.

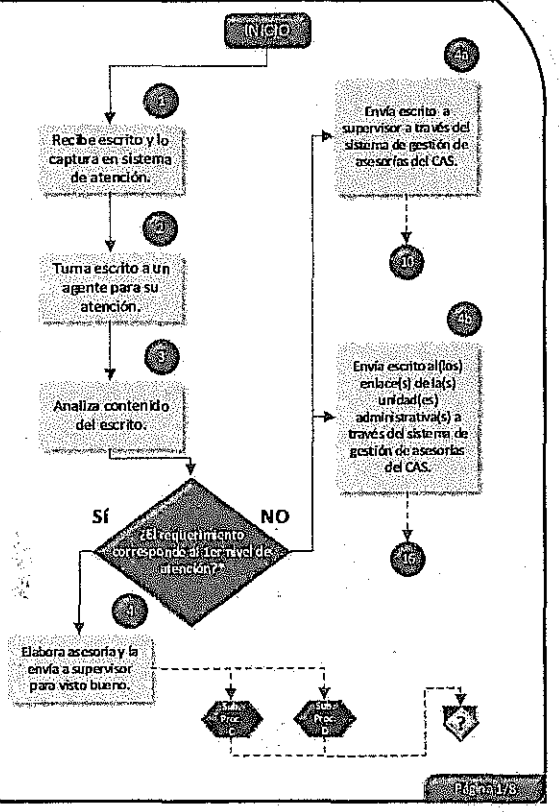
En caso de retrasos en la atención, se deberán documentar los motivos para extender los plazos indicados y comunicar a las personas los motivos y la fecha programada de respuesta.

Se podrán negar los servicios del CAS a las personas que utilicen ofensas, amenazas o insultos, situación que se asentará en la bitácora correspondiente.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía postal.	Última actualización: Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción
SUPERVISOR	1	Recibe escrito con petición de servicio y lo captura de manera manual a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).
	2	Turna el escrito a un agente para su atención y adicionalmente lo envía a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).
AGENTE	3	Analiza el contenido del escrito.
		¿El requerimiento corresponde a primer nivel de atención?* *Esta decisión se aplicará de conformidad con lo establecido en el numeral 17 de las "Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales".*
	4	**Sí: atención de primer nivel.** Elabora propuesta de asesoría *(se puede enlazar con alguno de los subprocesos C y D)* y la envía a supervisor para visto bueno. Se enlaza con la actividad 5.
	4a	**No: atención de segundo nivel.** Previa consulta, envía escrito al supervisor a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad. Se enlaza con la actividad 10.
	4b	**No: atención de tercer nivel.** Previa consulta, envía escrito al(los) enlace(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) y turna la consulta a través Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad. Se enlaza con la actividad 16.

Diagrama



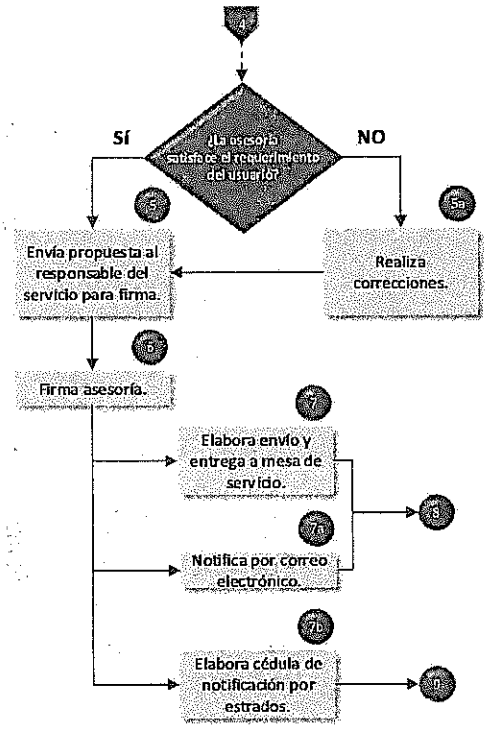
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía postal.

Última actualización: Mes: 08 Año:2016 **Elaboró:**CAS

Responsable	Paso	Descripción
SUPERVISOR		**¿La asesoría satisface requerimiento del usuario?**
	5	**Sí:** Envía propuesta al responsable del servicio del CAS para firma.
AGENTE	5a	**No:** Realiza correcciones realizadas por el supervisor y regresa a la actividad 5.
RESPONSABLE DEL SERVICIO	6	Firma asesoría y puede enlazarse con alguna de las siguientes actividades: 7, 7a o 7b.
AGENTE	7	**Notificación en domicilio,** elabora envío y entrega a mesa de servicio. Se enlaza con la actividad 8.
	7a	**Notificación por correo electrónico,** envía respuesta a la cuenta otorgada por el usuario. Se enlaza con la actividad 8.
	7b	**Notificación por estrados del CAS,** elabora cédula de notificación por estrados cuando el usuario no refiere algún medio de notificación. Se enlaza con la actividad 9.

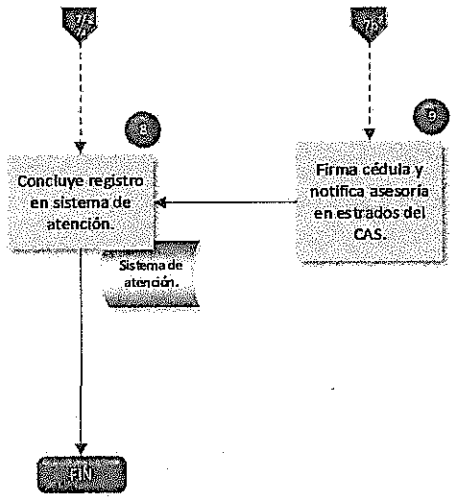
Diagrama



Página 2/3

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.		
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía postal.	Última actualización: Mes: 08	Año:2016	Elaboró:CAS

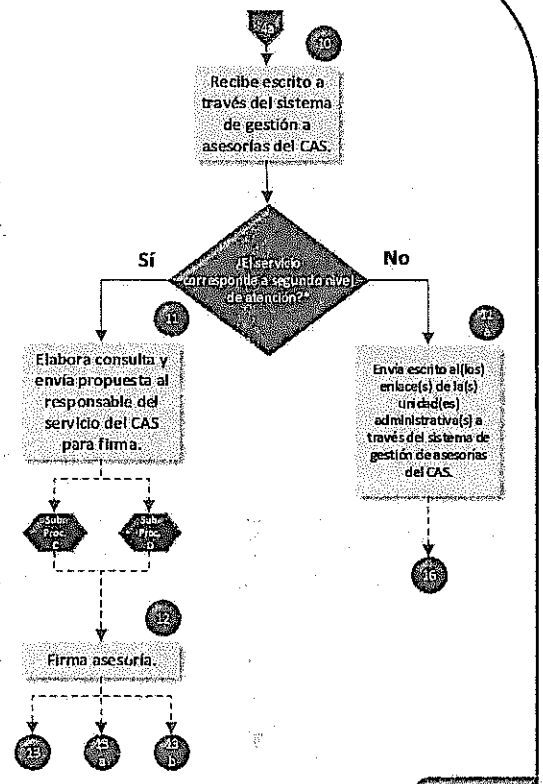
Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
AGENTE	8	Concluye registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.	9	Firma cédula y notifica asesoría en los estrados del Centro de Atención a la Sociedad.	
AGENTE		Se enlaza con la actividad 8.	
		FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PRIMER NIVEL.	



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía postal. | **Última actualización:** Mes: 08 Año:2016 | Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
SUPERVISOR (SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN)	10	Recibe escrito a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). **¿El servicio corresponde a segundo nivel de atención?*** *Esta decisión se aplicará de conformidad con lo establecido en el numeral 17 de las "Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales".*	
	11	**Sí:** Elabora consulta *(se puede enlazar con alguno de los subprocesos C y D)* y envía propuesta al responsable del servicio del CAS para firma. Se enlaza con la actividad 12.	
	11a	**No:** Previa consulta, envía correo electrónico al(los) enlace(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) y turna la consulta a través Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad. Se enlaza con la actividad 16.	
RESPONSABLE DEL SERVICIO	12	Firma asesoría y puede enlazarse con alguna de las siguientes actividades: 13, 13a o 13b.	



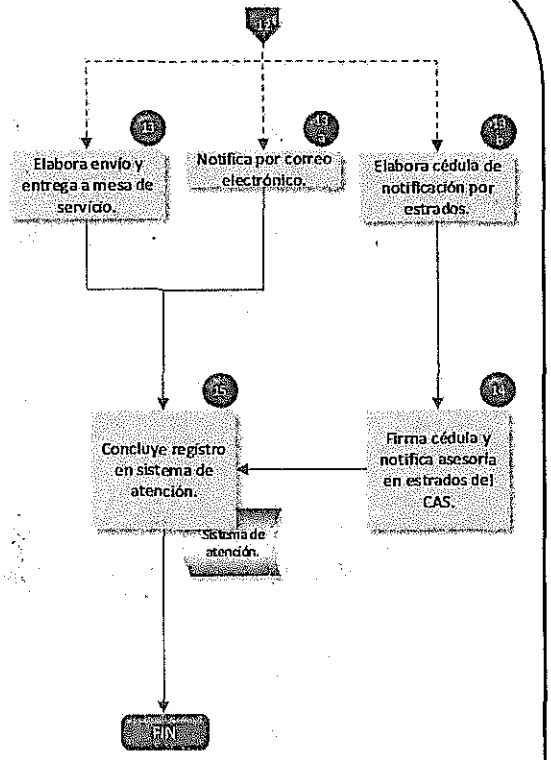
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad

Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía postal.

Última actualización: **Mes:** 08 **Año:**2016 **Elaboró:**CAS

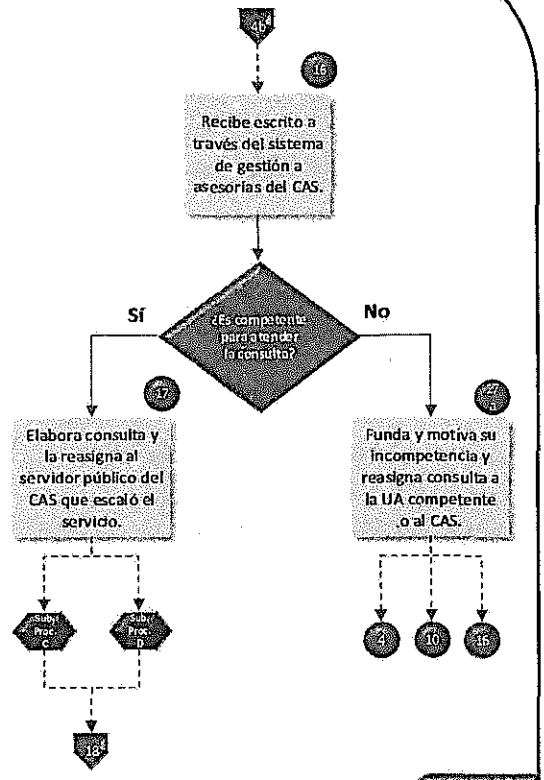
Responsable	Paso	Descripción
SUPERVISOR (SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN)	13	**Notificación en domicilio**, elabora envío y entrega a mesa de servicio. Se enlaza con la actividad 15.
	13a	**Notificación por correo electrónico**, envía respuesta a la cuenta otorgada por el usuario. Se enlaza con la actividad 15.
	13b	**Notificación por estrados del CAS**, elabora cédula de notificación por estrados cuando el usuario no refiere algún medio de notificación.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.	14	Firma cédula y notifica asesoría en los estrados del Centro de Atención a la Sociedad.
SUPERVISOR (SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN)	15	Concluye registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).
		FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE SEGUNDO NIVEL.

Diagrama



Página 5/8

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía postal.	Última actualización: Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

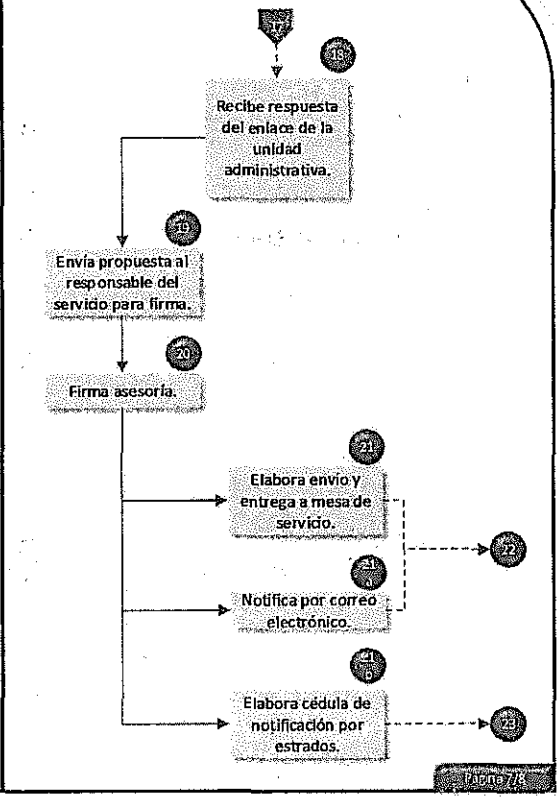
Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
ENLACE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (TERCER NIVEL DE ATENCIÓN)	16	Recibe escrito a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). **¿Es competente para atender la consulta?** **Sí:** Elabora consulta *(se puede enlazar con alguno de los subprocesos C y D)* y la reasigna al servidor público del CAS que escaló el servicio a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). **No:** Funda y motiva su incompetencia. Previa consulta, reasigna el caso a la unidad administrativa apta para atender, o a personal del CAS si corresponde a primer o segundo nivel de atención, lo anterior a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). **Puede enlazarse con las actividades 4, 10 y 16.**	
	17		
	17a		

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

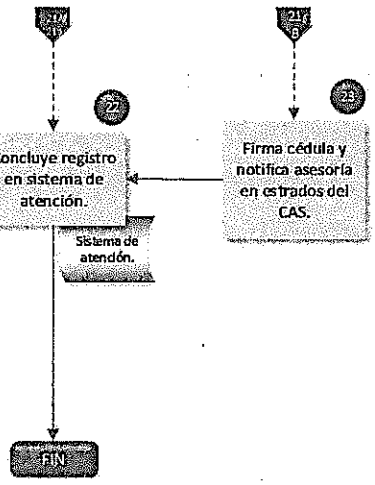
Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI/ Procedimiento de atención vía postal.

Última actualización: Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
AGENTE	18	Recibe respuesta del enlace de la unidad administrativa a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
	19	Envía propuesta al responsable del servicio del CAS para firma.	
RESPONSABLE DEL SERVICIO	20	Firma asesoría y puede enlazarse con alguna de las siguientes actividades: 21, 21a o 21b.	
AGENTE	21	**Notificación en domicilio,** elabora envío y entrega a mesa de servicio. Se enlaza con la actividad 22.	
	21a	**Notificación por correo electrónico,** envía respuesta a la cuenta otorgada por el usuario. Se enlaza con la actividad 22.	
	21b	**Notificación por estrados del CAS,** elabora cédula de notificación por estrados cuando el usuario no refiere algún medio de notificación. Se enlaza con la actividad 23.	



Responsable	Paso	Descripción	Diagrama
AGENTE	22	Concluye registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.	23	Firma cédula y notifica asesoría en los estrados del Centro de Atención a la Sociedad.	
AGENTE		Se enlaza con la actividad 22.	
		FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE TERCER NIVEL.	



7.5 Subprocesos de atención.

En este apartado se detallen los actores que intervienen así como las actividades realizadas en seis subprocesos de atención que realiza el CAS, y que dan muestra de servicios recurrentes por los usuarios, y toda vez que se consideran parte sustantiva del actuar del personal del CAS y de los enlaces de las unidades administrativas designados para atender tercer nivel de atención.

Estos subprocesos de atención son:

- Subproceso A "captura de solicitud de información o datos personales a través de Tel-INAI."
- Subproceso B "Apoyo en la elaboración de Recurso de Revisión contra sujetos obligados de la Federación."
- Subproceso C "Orientaciones a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, así como sobre las atribuciones y actividades del Instituto."
- Subproceso D "Asesoría y asistencia técnica que se deriven del uso del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)."
- Subproceso E "Captura de notificaciones de incumplimientos a las resoluciones del Pleno, en contra de los sujetos obligados de la federación."
- Subproceso F "Facilitar la elaboración e interposición de denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia realizadas en contra de los sujetos obligados de la Federación."

7.5.1 Subproceso A "captura de solicitud de información o datos personales a través de Tel-INAI."

Con la finalidad de que las personas ejerzan efectivamente los derechos de acceso a la información y protección de sus datos personales, a través del servicio de Tel-INAI, se ofrece el registro de solicitudes de información pública en los tres niveles de gobierno, así como el registro de solicitudes de protección de datos personales para sujetos obligados de la Federación, de esta manera los usuarios de CAS pueden ingresar solicitudes con solo llamar al 01 800 835 43 24, los agentes apoyan a los usuarios a estructurar las peticiones de manera clara y precisa, por lo tanto se evitan requerimientos de información adicional por parte de las Unidades de Transparencia. Este servicio facilita el ejercicio de los derechos a las personas que no pueden trasladarse a las Unidades de Transparencia, que no desean hacerlo, que se resisten a hacerlo o que no hacen uso de herramientas tecnológicas. En este subproceso solo interviene primer nivel de atención a través del procedimiento de atención vía telefónica.

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

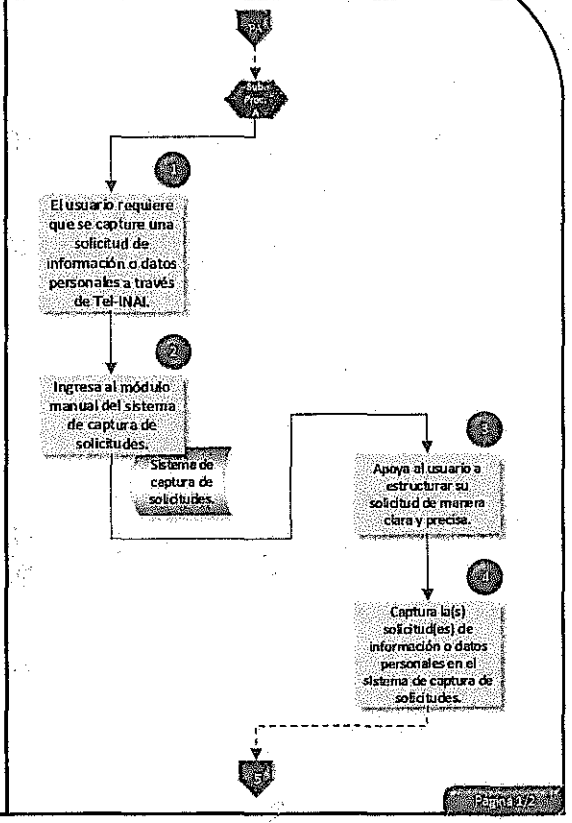
COORDINACIÓN EJECUTIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.		
Manual de procedimientos del CAS / Subproceso A "captura de solicitud de información o datos personales a través de Tel-INAI."	Última actualización: Mes: 08	Año:2016	Elaboró:CAS

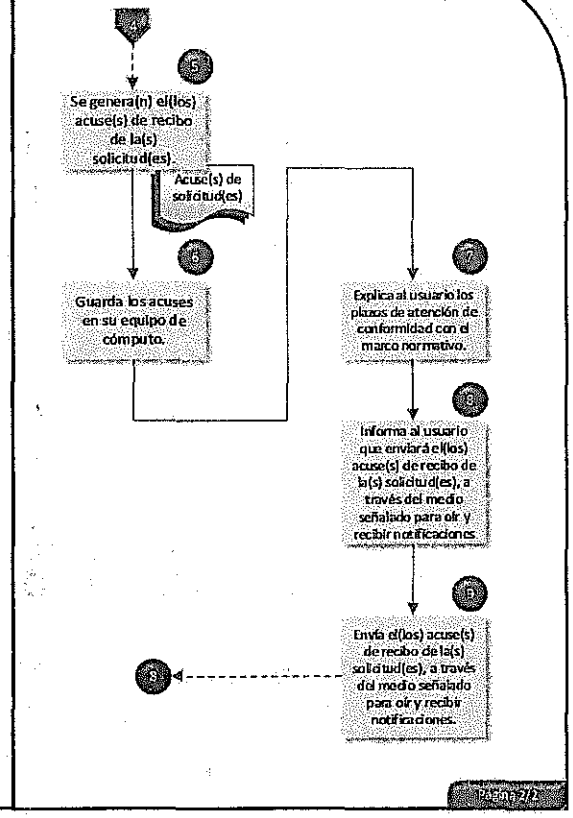
Responsable	Paso	Descripción del subproceso	Diagrama
		Viene de la actividad 7 del Procedimiento de atención vía telefónica.	
USUARIO	1	El usuario requiere que se capture una solicitud de información pública o datos personales a través de Tel-INAI.	
AGENTE	2	Ingresa al módulo manual del sistema de captura de solicitudes.	
	3	Apoya al usuario a estructurar su solicitud de manera clara y precisa.	
	4	Captura la(s) solicitud(es) de información o datos personales en el sistema de captura de solicitudes.	



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

Manual de procedimientos del CAS / Subproceso A "captura de solicitud de información o datos personales a través de Tel-INAI." | Última actualización: Mes: 08 Año:2016 | Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción del subproceso	Diagrama
AGENTE	5	Se genera(n) el(los) acuse(s) de recibo de la(s) solicitud(es).	
	6	Guarda los acuses en su equipo de cómputo.	
	7	Explica al usuario los plazos de atención de conformidad con el marco normativo.	
	8	Informa al usuario que enviará el(los) acuse(s) de recibo de la(s) solicitud(es), a través del medio señalado para oír y recibir notificaciones en un plazo que no exceda de dos días hábiles. *De conformidad con lo establecido en los "Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública."*	
	9	Envía el(los) acuse(s) de recibo de la(s) solicitud(es), a través del medio señalado para oír y recibir notificaciones.	
		Se enlaza con la actividad 8 del Procedimiento de atención vía telefónica.	



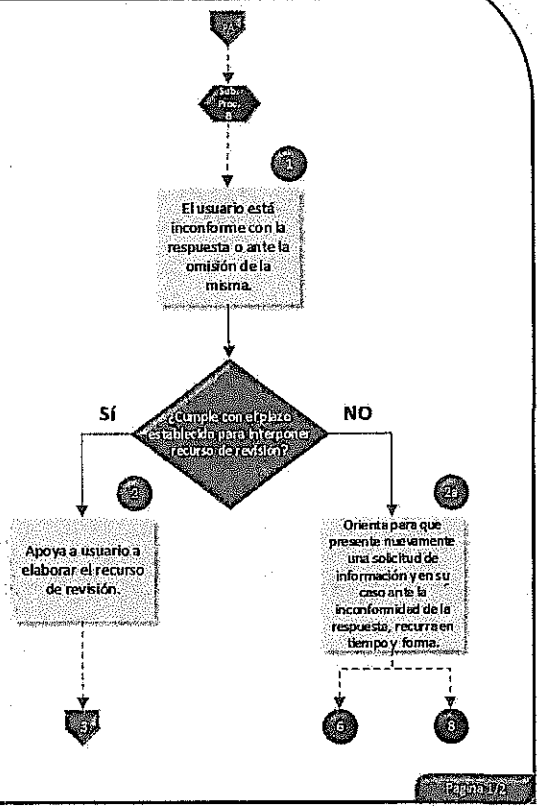
7.5.2 Subproceso B "Apoyo en la elaboración de Recurso de Revisión contra sujetos obligados de la Federación."

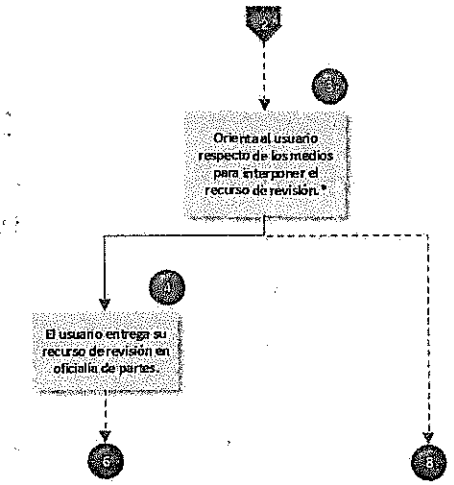
Cuando los usuarios ejercieron su derecho de acceso o protección de sus datos personales, y están inconformes con las respuestas otorgadas por las Unidades de Transparencia, o ante la omisión de

las mismas, la Ley faculta la opción de impugnar las respuestas ante este Instituto, el recurso de revisión es el mecanismo mediante el cual el INAI verifica la legalidad de las respuestas otorgadas. Los usuarios del CAS reciben una orientación cálida y sencilla acerca de este procedimiento, pues al ser un derecho humano, constitucional, no se discrimina o favorece para que únicamente puedan ejercerlo doctos. En este subproceso solo interviene primer nivel de atención y en los canales vía telefónica y presencial.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.			Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.
Manual de procedimientos del CAS / Subproceso B "Apoyo en la elaboración de Recurso de Revisión contra sujetos obligados de la Federación."		Última actualización: Mes: 08	Año:2016	Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción del subproceso	Diagrama
		Viene de la actividad 7 del procedimiento de atención vía telefónica y de la actividad 5 del procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS.	
USUARIO	1	El usuario está inconforme con la respuesta otorgada por el sujeto obligado de la federación o ante la omisión de la misma.	
AGENTE		***¿Cumple con el plazo establecido en el artículo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), para interponer recurso de revisión?***	
	2	**Sí:** Apoya a usuario a elaborar el recurso de revisión en concordancia con los artículos 148 y 149 de la LFTAIP. Se enlaza con la actividad 3.	
	2a	**No:** Informa al usuario tal situación y orienta para que presente nuevamente una solicitud de información y/o datos personales y en su caso si la dependencia proporciona la misma respuesta motivo de inconformidad, presente su recurso de revisión en tiempo y forma. Si la atención es de manera presencial se enlaza con la actividad 6 de ese procedimiento. Si la atención es de vía telefónica se enlaza con la actividad 8, de ese procedimiento.	



Responsable	Paso	Descripción del subproceso	Diagrama
AGENTE	3	Orienta al usuario respecto de los medios para interponer el recurso de revisión.* *Lo anterior en armonía con los artículo 147 de la LFTAIP y el Capítulo IV de la Ley, referente al Recurso de Revisión de Asuntos Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.*	
USUARIO	4	Si la atención es de manera presencial, el usuario entrega su recurso de revisión en oficialía de partes del Instituto, y se enlaza con la actividad 6 de ese procedimiento.	
AGENTE		Si la atención es de vía telefónica se enlaza con la actividad 8, de ese procedimiento.	

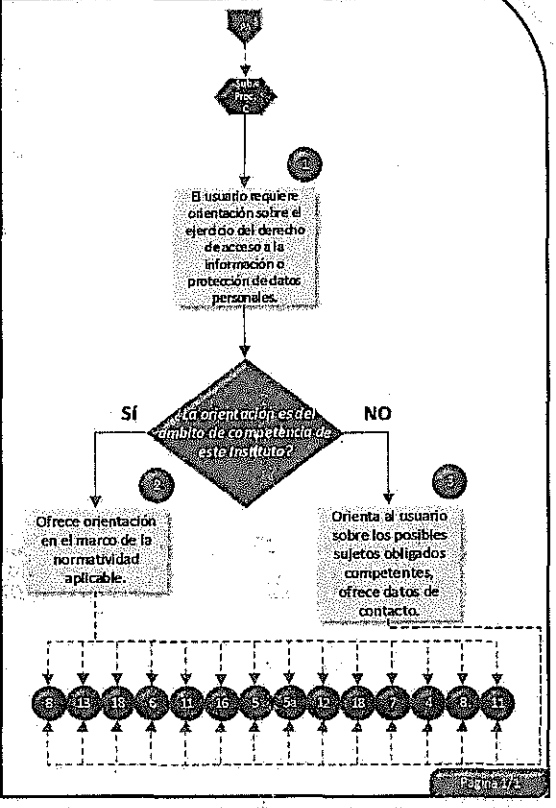
7.5.3 Subproceso C "Orientaciones a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, así como sobre las atribuciones y actividades del Instituto."

En este subproceso se incluye la atención otorgada a aquellas orientaciones que versan sobre diversos temas, como pueden ser dudas generales de marcos normativos, consultas sobre eventos institucionales, capacitación que ofrece el instituto, convocatorias, concursos, actividades de que vinculan a este Instituto con la sociedad, certámenes y sus respectivos premios, información general sobre los módulos que conforman la Plataforma Nacional de Transparencia (SICOM, SIGEMI, SIPOT y SISAI). En este subproceso interviene, primero, segundo y tercer nivel de atención, en todos los canales de atención.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

Manual de procedimientos del CAS / Subproceso C "Orientaciones a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, así como sobre las atribuciones y actividades del Instituto." | **Última actualización:** Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción del subproceso	Diagrama
		Viene de las actividades 7, 12 y 15 del procedimiento de atención vía telefónica; 5, 10 y 15 del procedimiento de atención presencial en instalaciones del CAS, 4, 11 y 17 del procedimiento de atención vía postal, 6 del procedimiento de atención presencial vía MICAS, 3, 7 y 10 del procedimiento de atención vía correo electrónico.	
USUARIO	1	El usuario requiere orientación sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información, de acceso a datos personales y de corrección de los mismos en posesión de los sujetos obligados de la Federación, u orientación a las personas sobre el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en posesión de particulares, en el marco de la normatividad aplicable.	
AGENTE		*¿La orientación es del ámbito de competencia de este Instituto?*	
	2	Sí: Ofrece orientación en el marco de la normatividad aplicable. Se enlaza con las actividades 8, 13 o 18 del procedimiento de atención vía telefónica y de las actividades 6, 11 o 16 del procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS, 5, 5a, 12, 18 del procedimiento vía postal, 7 de l procedimiento de atención vía presencial en MiCAS, 4, 8 u 11 del procedimiento de atención vía correo electrónico.	
	3	No: Orienta al usuario sobre los posibles sujetos obligados competentes, conforme a la normatividad aplicable, y de ser posible otorga datos de contacto que faciliten al usuario allegarse a la información de su interés. Se enlaza con las actividades 8, 13 o 18 del procedimiento de atención vía telefónica y de las actividades 6, 11 o 16 del procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS, 5, 5a, 12, 18 del procedimiento vía postal, 7 de l procedimiento de atención vía presencial en MiCAS, 4, 8 u 11 del procedimiento de atención vía correo electrónico.	



7.5.4 Subproceso D "Asesoría y asistencia técnica que se deriven del uso del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)."

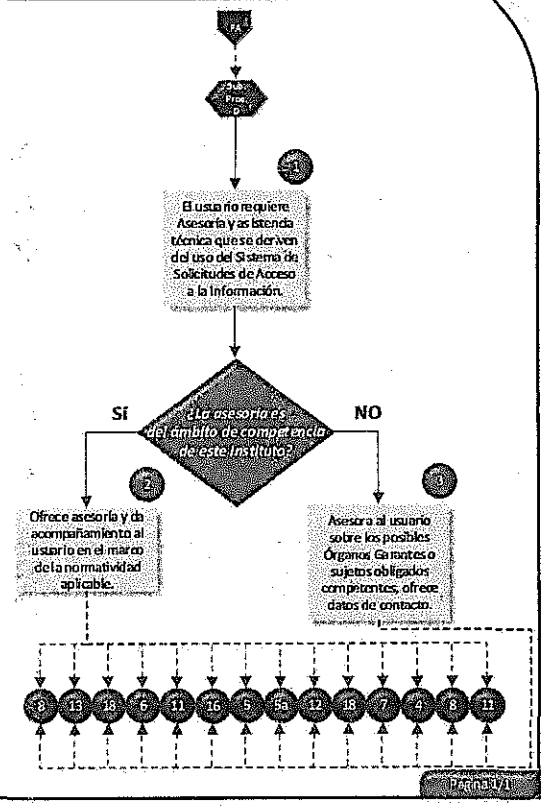
Este servicio se otorga a todo usuario que desee ingresar solicitudes a través de una cuenta Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, y que por desconocimiento de particularidades técnicas se vea imposibilitado. Se apoya a los usuarios para que se familiaricen con la herramienta, conozcan los campos que deben capturar, se informa acerca de los caracteres, formatos que acepta el sistema, cómo debe estar conformada su contraseña al momento de construirla, se explica la manera de acceder para visualizar sus respuestas, notificaciones, etc. En este subproceso interviene, primero, segundo y tercer nivel de atención, en todos los canales de atención.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

Manual de procedimientos del CAS / Subproceso D "Asesoría y asistencia técnica que se deriven del uso del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)."

Última actualización: Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción del subproceso	Diagrama
		Viene de las actividades 7, 12 y 15 del procedimiento de atención vía telefónica, 5, 10 y 15 del procedimiento de atención presencial en instalaciones del CAS, 4, 11 y 17 del procedimiento de atención vía postal, 6 del procedimiento de atención presencial vía MiCAS, 3, 7 y 10 del procedimiento de atención vía correo electrónico.	
USUARIO	1	El usuario requiere Asesoría y asistencia técnica que se deriven del uso del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información. De conformidad con lo establecido en los *Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2016.*	
AGENTE		*¿La asesoría es del ámbito de competencia de este Instituto?*	
	2	**Sí:** Ofrece asesoría y da acompañamiento al usuario en el marco de la normatividad aplicable. Se enlaza con las actividades 8, 13 o 18 del procedimiento de atención vía telefónica y de las actividades 6, 11 o 16 del procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS, 5, 5a, 12, 18 del procedimiento vía postal, 7 de l procedimiento de atención vía presencial en MiCAS, 4, 8 u 11 del procedimiento de atención vía correo electrónico.	
	3	**No:** Asesora al usuario sobre los posibles Órganos Garantes o sujetos obligados competentes, conforme a la normatividad aplicable, y de ser posible otorga datos de contacto que faciliten al usuario allegarse a la información de su interés. Se enlaza con las actividades 8, 13 o 18 del procedimiento de atención vía telefónica y de las actividades 6, 11 o 16 del procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS, 5, 5a, 12, 18 del procedimiento vía postal, 7 de l procedimiento de atención vía presencial en MiCAS, 4, 8 u 11 del procedimiento de atención vía correo electrónico.	



7.5.5 Subproceso E "Captura de notificaciones de incumplimientos a las resoluciones del Pleno, en contra de los sujetos obligados de la federación."

Este servicio facilita a los usuarios el dar a conocer a este instituto probables incumplimientos a las resoluciones del pleno por parte de los sujetos obligados de la federación. De manera presencial o vía telefónica los usuarios con apoyo de los agentes, elaboran los argumentos para que sean remitidos a la Unidad Administrativa que de conformidad con sus atribuciones da seguimiento a este procedimiento, la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades. En este subproceso interviene, primero nivel de atención, en los canales de atención telefónico y presencial.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

Manual de procedimientos del CAS / Subproceso E "Captura de notificaciones de incumplimientos a las resoluciones del Pleno, en contra de los sujetos obligados de la federación." | **Última actualización:** **Mes:** 08 **Año:**2016 **Elaboró:**CAS

Responsable	Paso	Descripción del subproceso	Diagrama
		Viene de la actividad 7 del procedimiento de atención vía telefónica y de la actividad 5 del procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS.	
USUARIO	1	El usuario requiere informar al instituto de un probable incumplimiento a las resoluciones del Pleno.	
AGENTE	2	Verifica que el sentido de la resolución haya sido: modificar o revocar la respuesta del sujeto obligado.	
	3	Verifica la fecha en que se notificó resolución al sujeto obligado, lo anterior con el enlace de la Dirección General de Atención al Pleno con el CAS.	



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

COORDINACIÓN EJECUTIVA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

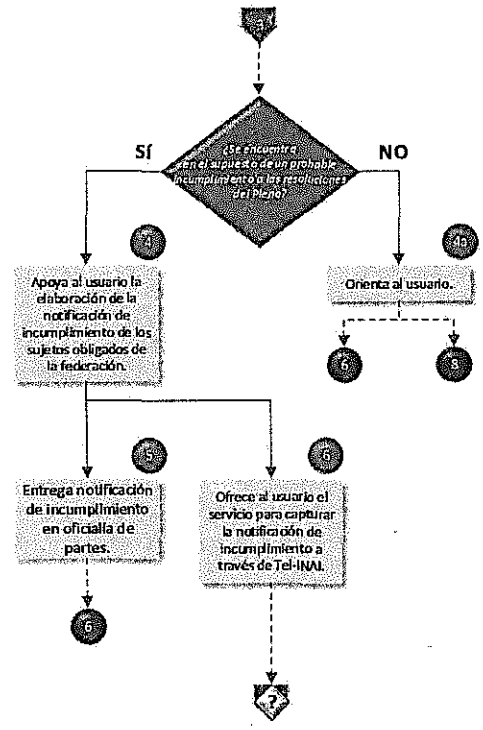
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | **Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.**

Manual de procedimientos del CAS / Subproceso E "Captura de notificaciones de incumplimientos a las resoluciones del Pleno, en contra de los sujetos obligados de la federación."

Última actualización: Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción del subproceso	Diagrama
USUARIO		***¿Se encuentra en el supuesto de un probable incumplimiento a las resoluciones del Pleno?***	
AGENTE	4	**Si:** Apoya al usuario la elaboración de la notificación de incumplimiento de los sujetos obligados de la federación. Si la atención es de manera presencial se enlaza con la actividad 5. Si la atención es de vía telefónica se enlaza con la actividad 6.	
	4a	**No:** Orienta al usuario y se enlaza con la actividad 6 del procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS o con la actividad 8 del procedimiento de atención vía telefónica.	
USUARIO	5	Entrega notificación de incumplimiento en oficialía de partes y se enlaza con la actividad 6 del procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS.	
	6	Ofrece al usuario el servicio para capturar la notificación de incumplimiento a través de Tel-INAI.	

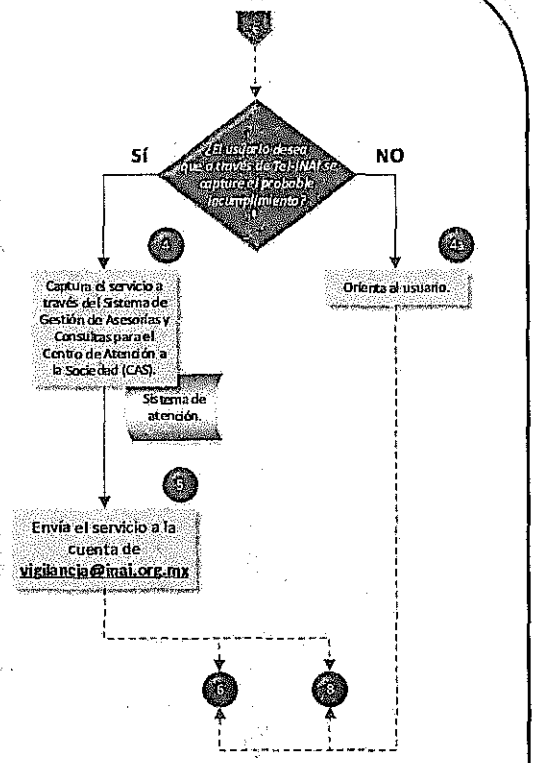


Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

Manual de procedimientos del CAS / Subproceso E "Captura de notificaciones de incumplimientos a las resoluciones del Pleno, en contra de los sujetos obligados de la federación."

Última actualización: Mes: 08 Año:2016 **Elaboró:**CAS

Responsable	Paso	Descripción del subproceso	Diagrama
USUARIO		***¿El usuario desea que a través de Tel-INAI se capture el probable incumplimiento?***	
AGENTE	4	**Sí:** Captura el servicio a través del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS).	
	4a	**NO:** orienta al usuario y se enlaza con la actividad 6 del procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS o con la actividad 8 del procedimiento de atención vía telefónica.	
	5	Envía el servicio a la cuenta de **vigilancia@inai.org.mx** administrada por la Dirección general de Cumplimientos y Responsabilidades, para su atención. Se enlaza con la actividad 6 del procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS o con la actividad 8 del procedimiento de atención vía telefónica.	



7.5.6 Subproceso F "Facilitar la elaboración e interposición de denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia realizadas en contra de los sujetos obligados de la Federación."

Posterior a una adecuada focalización del servicio, los agentes apoyarán a los usuarios a elaborar e interponer denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia, en contra de los sujetos obligados de la federación. El servicio se ofrecerá una vez que concluya el periodo establecido en seis meses después del cinco de mayo de dos mil dieciséis, de conformidad al artículo segundo transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, relativo al plazo que tienen los sujetos obligados para cargar la información. En este subproceso interviene, primero nivel de atención, en los canales de atención telefónico y presencial.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. | **Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.**

Manual de procedimientos del CAS / Subproceso F "Facilitar la elaboración e interposición de denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia realizadas en contra de los sujetos obligados de la Federación."* | **Última actualización:** Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción del subproceso	Diagrama
		Viene de la actividad 7 del procedimiento de atención vía telefónica y de la actividad 5 del procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS.	
USUARIO	1	El usuario requiere que se capture una denuncia por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia realizadas en contra de los sujetos obligados de la Federación.*	
AGENTE	2	Orienta al usuario para que su escrito cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).	
	3	Orienta al usuario respecto de los medios establecidos por por la LGTAIP en el artículo 92, para presentar la denuncia. Si la atención es de manera presencial se enlaza con la actividad 4. Si la atención es de vía telefónica se enlaza con la actividad 5.	



Página 1/2

** El servicio se ofrecerá una vez que concluya el periodo establecido en seis meses después del cinco de mayo de dos mil dieciséis, de conformidad al artículo segundo transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, relativo al plazo que tienen los sujetos obligados para cargar la información. En este subproceso interviene, primero nivel de atención, en los canales de atención telefónico y presencial.*

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

COORDINACIÓN EJECUTIVA

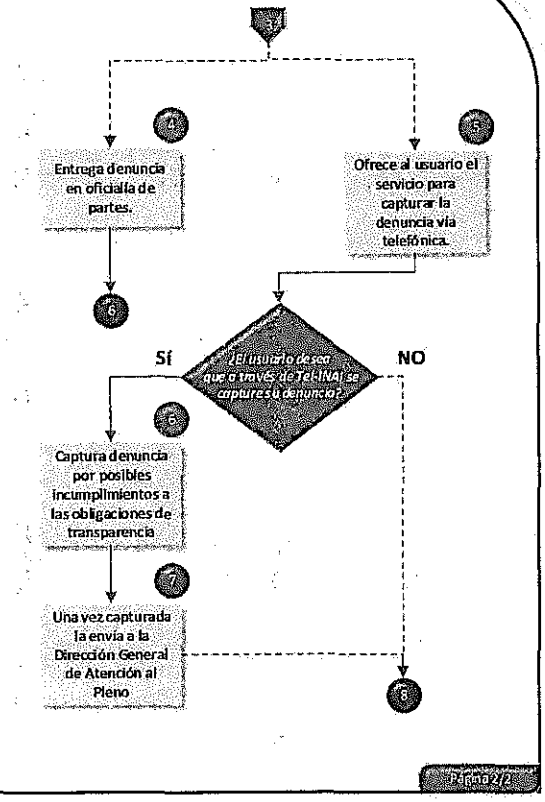
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD

"Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales." — Dirección del Centro de Atención a la Sociedad.

Manual de procedimientos del CAS / Subproceso F "Facilitar la elaboración e interposición de denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia realizadas en contra de los sujetos obligados de la Federación."

Última actualización: Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS

Responsable	Paso	Descripción del subproceso	Diagrama
USUARIO	4	Entrega "denuncia por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia realizadas en contra de los sujetos obligados de la Federación en oficialía de partes del Instituto, y se enlaza con la actividad 6 del procedimiento de atención vía presencial en instalaciones del CAS.	
	5	Ofrece al usuario el servicio para capturar la denuncia vía telefónica.	
		¿El usuario desea que a través de Tel-INAI se capture su denuncia?	
	6	**SI:** Captura denuncia por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia realizadas en contra de los sujetos obligados de la Federación.	
	7	Una vez capturada la envía a la Dirección General de Atención al Pleno para su atención. Se enlaza con la actividad 8 del procedimiento de atención vía telefónica.	
		NO: se enlaza con la actividad 8 del procedimiento de atención vía telefónica.	

Página 2/2

8. DATOS DE CONTACTO Y HORARIO DE ATENCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD (CAS).

Domicilio: Av. Insurgentes Sur # 3211, Planta Baja, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México.

Asesoría presencial y/o por Correo postal: de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 horas, en horario continuo.

Tel-INAI: 01800-83 54 324.

Horario de atención: de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 horas, en horario continuo.

Correo electrónico: atencion@inai.org.mx disponible las 24 horas del día y los 365 días del año. Las consultas recibidas por este medio fuera de horario hábil, se considerará como presentada al día hábil siguiente, a las 09:00 horas.

El CAS contará con módulos itinerantes en el país, con la finalidad de acercar los servicios de éste Centro a la población en general a sus comunidades, instalándose de manera temporal en eventos que organiza el Instituto y otras instituciones públicas y privadas en las que se cuenta con una amplia participación de personas.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.06

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN EL AMPARO EN REVISIÓN R.A. 150/2016; MISMA QUE CONFIRMÓ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO DE AMPARO 277/2016; SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE REVISIÓN RPD 0645/15, DE FECHA CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

CONSIDERANDOS

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, entre otros, el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

2. Que en términos del artículo octavo transitorio del Decreto antes invocado, en tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).

3. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

4. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y

Protección de Datos cambió su denominación por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional.

5. Que con fecha trece de julio de dos mil quince, el particular presentó mediante el sistema INFOMEX ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una solicitud de acceso a datos personales, mediante la cual requirió tres tantos de copias certificadas de los documentos, estudios, y expediente clínico que se hayan formado en el año dos mil catorce en el Hospital General de Tacuba, con respecto a un derechohabiente finado.

6. Que con fecha diez de agosto de dos mil quince, el sujeto obligado, en respuesta a la solicitud de acceso a datos personales que le fue formulada, notificó al particular la disponibilidad de 276 fojas a certificar previa acreditación de su personalidad y representación legal, y pago de costos de reproducción; al efecto agregó el formato correspondiente, el cual consigna un monto de $4,692.00 (cuatro mil seiscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.).

7. Que el diez de agosto de dos mil quince, el particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedó radicado bajo el número RPD 0645/15, turnándose a la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora.

   En ese sentido, como agravios la particular alegó el elevado costo de la reproducción de la documentación solicitada.

8. Que el cinco de noviembre de dos mil quince, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió la resolución en el recurso de revisión identificado con la clave RPD 0645/15, resolviendo confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado, toda vez que se trata de una segunda solicitud, presentada por el mismo particular en un periodo menor a 12 meses, respecto del mismo sistema de datos personales.

9. Que inconforme con la resolución de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, dictada en el expediente RPD 0645/15, la parte quejosa promovió juicio de amparo, radicándose en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el número 277/2016, mismo que fue resuelto el siete de abril de dos mil dieciséis, determinando conceder el amparo para el efecto de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 1) deje insubsistente la resolución dictada en el recurso de revisión radicado bajo el número de expediente RPD 0645/15, el cinco de noviembre de dos mil quince y; 2) emita otra, en la

que determine que el quejoso, por concepto de pago de derechos para la expedición de copias certificadas que solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pague por cada hoja tamaño carta u oficio la cantidad de $ 1.00 (un peso 00/100 moneda nacional), a fin de lograr una restitución de los derechos que indebidamente le fueron afectados.

Lo anterior, porque a criterio del Juez del conocimiento, no existe una equivalencia moderada o razonable entre el costo del servicio y la cantidad que cubrirá el contribuyente, ya que el costo del servicio prestado por el Estado pasa a uno que incluye ganancias, y, la correspondencia entre el servicio y la cuota, no puede entenderse de ningún modo como privado, por tanto, no debe perseguirse lucro alguno con la expedición de copias certificadas.

Finalmente, concluyó el A quo, que se violó en perjuicio del quejoso los principios de proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 31 Constitucional.

10. Que en contra de la sentencia referida, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales interpuso recurso de revisión, del que conoció el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 150/2016, quien en sesión de fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis resolvió confirmar la sentencia recurrida.

11. Que en ese sentido, en acatamiento a la ejecutoria que resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo para el efecto de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 1) deje insubsistente la resolución dictada en el recurso de revisión radicado bajo el número de expediente RPD 0645/15, el cinco de noviembre de dos mil quince y; 2) emita otra, en la que determine que el quejoso, por concepto de pago de derechos para la expedición de copias certificadas que solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pague por cada hoja tamaño carta u oficio la cantidad de $ 1.00 (un peso 00/100 moneda nacional), a fin de lograr una restitución de los derechos que indebidamente le fueron afectados; se propone dejar insubsistente la resolución emitida en el recurso de revisión RPD 0645/15 de fecha cinco de noviembre de dos mil quince.

12. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciséis, notificado el siete de julio siguiente, requirió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como a la Comisionada Presidente de dicho Instituto; para que en el plazo de tres días, remitan las constancias que acrediten el cumplimiento del fallo protector.

13. Que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas

las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asimismo que el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables.

14. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción III la facultad del Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados.

15. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno

16. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 21, fracción II, III y IV del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente propone al Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 150/2016, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 277/2016; se deja sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión RPD 0645/15, de fecha cinco de noviembre de dos mil quince.

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en los artículos 6º, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos Transitorios Segundo, Octavo y Noveno del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 3, fracción XIII y los transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y III, y 21, fracciones II, III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- En estricto cumplimiento a los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO de la ejecutoria de fecha veintitrés de junio dos mil dieciséis, emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 150/2016, misma que confirmó la dictada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 277/2016; se deja sin efectos la resolución relativa al recurso de revisión RPD 0645/15 de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo el expediente del recurso de revisión RPD 0645/15, a la Comisionada Ponente, a efecto de que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el proyecto de resolución que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dentro del término que el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó para el cumplimiento de la sentencia.

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término de ley comunique al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han llevado a cabo para dar cumplimiento al fallo protector.

CUARTO.- Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INAI.

QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidente

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

Yuri Zuckermann Pérez
Coordinador Técnico del Pleno

Luis Gustavo Parra Noriega
Coordinador de Protección de Datos Personales

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13-07-2016.06, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/05/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 003/2016
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora

ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.07

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 003/2016, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.

ANTECEDENTES

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, modificando entre otros, el artículo 6º, apartado A, fracción VIII el cual establece que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional.

4. Que el artículo 6º, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo III, del Título Octavo.

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04)

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT-PUB/05/11/2015.09)

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General.

9. Que en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades Federativas.

10. Que el 04 de julio de 2016, se recibió en la dirección electrónica facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que textualmente señaló:

"Se remite recurso de revisión de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 2 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Toda la información inherente al presente recurso de revisión se encuentra en archivo adjunto al presente."

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con formato *pdf* diversa documentación inherente al recurso de revisión número 003/2016 del índice del Organismo Garante de la Entidad Federativa, y sus antecedentes.

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Instituto), registró el expediente con el número ATR/NOT/JAL/05/2016-INAI, cuya Presidente lo turnó el día cuatro de julio de dos mil dieciséis a sí misma, para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales.

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el correspondiente estudio preliminar, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo a la Comisionada Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales.

CONSIDERANDO

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa señalar de previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el artículo 95, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante Ley Estatal), determinó remitir a este Instituto el recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo enviado por su Presidenta. El mencionado precepto es del tenor siguiente:

"Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación

1. El recurso de revisión debe presentarse ante la Unidad del sujeto obligado o ante el Instituto, por escrito y por duplicado, o en forma electrónica cuando el sujeto obligado cuente con el sistema que genere el comprobante respectivo, dentro de los quince días hábiles siguientes, según el caso, contados a partir de:

> I. La notificación de la respuesta impugnada;
> II. El acceso o la entrega de la información, o
> III. El término para notificar la respuesta de una solicitud de información, o para permitir el acceso o entregar la información, sin que se hayan realizado.
>
> 2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General."

2. Que como se puede apreciar, si bien es cierto que la remisión realizada por el Organismo Garante de la Entidad Federativa fue con base en el citado artículo 95, punto 2, de la Ley Estatal, también lo es que dicha disposición recoge en esencia el contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo Ley General). Este numeral es del tenor siguiente:

> "Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo."

3. Que para efectos prácticos, al ser el punto 2 del artículo 95 de la Ley Estatal una disposición esencialmente igual al párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General, se considera que aun cuando este último precepto no fue invocado por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, de cualquier modo, se estima aplicable para los efectos del presente acuerdo.

4. En ese tenor, en lo que aquí interesa, los invocados artículos establecen que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, éste deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso.

5. Que además, dichos dispositivos encuentran identidad con lo previsto en el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, mismo que refiere:

> "**Noveno.** El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.
>
> En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente."

6. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo siguiente:

> "**Décimo.** La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos."

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales.

7. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se encuentra inmerso en el Capítulo II de los Lineamientos Generales denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICIÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado, pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante; o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la posibilidad de que las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído.

8. Que en ese sentido, el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales aludidos, pues según se desprende de los antecedentes, el Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado con la solicitud de información que diera origen al recurso de revisión en comento y por lo tanto, procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado en la normatividad invocada.

9. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

   Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

10. Que adicionalmente, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia.

11. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, en donde no se dejó duda alguna de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente:

> "El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten."[1]

12. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto (aquí sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada).

13. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible.

14. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta facultad.

15. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho.

---

[1] Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal".

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente:

"**Artículo 21.** El Instituto tendrá las siguientes atribuciones...

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General..."

16. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente tesis aislada:

"Época: Novena Época
Registro: 182637
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVIII, Diciembre de 2003
Materia(s): Común
Tesis: 1a. LXXXIV/2003
Página: 82

FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo "podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de la controversia.

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda."

17. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya consistido en el artículo 95, punto 2, de la ley local, que como se ha apuntado es coincidente con el contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, y el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, lo cierto es que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado.

18. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto; sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica propiamente una solicitud por parte del organismo garante local.

19. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos:

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, y
2. El caso revista interés y trascendencia.

20. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende:

- Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso).
- El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el Capítulo III, del Título Octavo, de la Ley General.

21. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los principios señalados en el artículo 6º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

22. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General:

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

23. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General.

24. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información".

25. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este

Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

26. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

27. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción.

28. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial:

"Época: Novena Época
Registro: 169885
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Abril de 2008
Materia(s): Común
Tesis: 1a./J. 27/2008
Página: 150

FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a

las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.
Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe.

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho."

29. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al entendimiento del tema abordado:

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de

atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos susceptibles de ser atraídos.

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo.

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: "gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", "importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", "interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", "interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad".

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos".

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico (trascendencia histórica, política, interés nacional).

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico.

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para referirse a unos y a otros conceptos.

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos *"... que por su interés y trascendencia así lo ameriten"* (artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la

Constitución), no parece razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto utilizando dos términos distintos.

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de la conectiva lógica de la disyunción "o".

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de la palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común.

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal (jurídica, histórica, política, económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de solución que se adoptan ordinariamente.

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia de este Alto Tribunal (...)"

30. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma las características de interés y trascendencia:

"**Cuarto.** Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:

I. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos,

delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y

II. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

La valoración de elementos, así como los razonamientos que realice el Instituto sobre un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos en los presentes lineamientos.".

31. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información[2]. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el mismo.

32. Por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

33. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los

[2] Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo.

Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente.

34. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto.

35. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida.

Y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada.

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 27/2008 que sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su competencia.

36. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación de algunos hechos que pueden dar luz para entender la materia de la solicitud que dio

origen al recurso notificado por la Presidenta del Organismo Garante de la Entidad Federativa:

1.- El pasado doce de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobó el acuerdo legislativo número 331-LXI-2016 para la convocatoria a elección de dos Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y dos suplentes respectivos.

2.- A través de diverso Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, aprobado el día diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se modificó el Acuerdo mencionado en el punto anterior, y se expidió nuevamente la convocatoria relativa con algunas modificaciones en sus bases[3].

3.- En diverso acuerdo legislativo AL-599-LXI-2016 aprobado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, específicamente en sus páginas diez y once, aparece una lista con los nombres de los participantes para ocupar el cargo de comisionado en el Organismo Garante de la Entidad Federativa, entre quienes se encuentra la persona a que se hace referencia en la solicitud.

4.- En el mismo acuerdo legislativo a que se refiere el punto que antecede[4], se declaró desierta la convocatoria en mención.

5.- Por último, a través de diverso Acuerdo Legislativo número 600-LXI-2016 aprobado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se emitió la nueva convocatoria para elegir a los Comisionados del Organismo Garante de la Entidad Federativa[5].

37. Precisadas estas situaciones de hecho, se procede a hacer una relación de los aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa:

1.- El particular solicitó la siguiente información:

---

[3] El Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, del cual también se puede desprender que existió el acuerdo legislativo antecedente, esto es, el número 331-LXI-2016, se puede consultar en http://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-9/convocatoria_comisionados_2016.pdf

[4] El Acuerdo Legislativo AL-599-LXI-2016 que declaró desierta la anterior convocatoria y en que aparece como uno de los participantes la persona a que se hace referencia en la solicitud, es consultable en http://www.congresojal.gob.mx/sites/default/files/convocatorias/AL599-LXI-16.pdf

[5] Este acuerdo se puede consultar en el enlace http://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-9/segunda_convocatoria.pdf

"Quiero saber si Ricardo de Alba, recibió expedientes para aspirantes a Comisioonados delITEI."

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los siguientes términos:

"Guadalajara, Jalisco, a 27 de junio de 2016

C. Solicitante
Presente

[...]

...En ese tenor se resuelve en sentido afirmativo su solicitud, de conformidad con la normatividad aplicable[1]. 2 Se hace de su conocimiento que el C. Ricardo Alfonso de Alba Moreno, colaboró en la recepción de dos expedientes de aspirantes en la primera convocatoria. En ese orden de ideas se pone a su disposición la "**Relatoría de la Participación del Consejo Consultivo en el Proceso de Elección de Aspirantes a Comisionados del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco**" en la cual usted podrá conocer a detalle el proceso de selección de Dos aspirantes a Comisionados del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en el siguiente hipervínculo:

http://www.itei.org.mx/v3/documentos/consejo_consultivo/proceso/relatoria_de_la_participacion_del_consejo_consultivo_en_el_proceso_de_eleccion_de_comisionados.pdf

[...]"

4.- Al consultar el enlace proporcionado en la respuesta mencionada se advierte que efectivamente, como ahí se menciona, aparece (a la fecha y hora en que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia realizó la consulta mientras elaboraba el estudio preliminar [11:58 del día ocho de julio de 2016]), el documento denominado "**RELATORÍA DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE ASPIRANTES A COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO**", de cuyo contenido, entre otra información es posible obtener una tabla cuyas columnas contienen los datos siguientes:

1. Folio.

2. Clave.
3. Apellido paterno.
4. Apellido materno.
5. Nombre.
6. Fecha de recepción de documentos.
7. Hora.
8. "Recibió".

5.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, aparece el documento "**ACUSE DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN**" fechado el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, del que se advierte lo siguiente:

"ACUSE DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio del 2016

Se tiene por recibido el recurso de revisión presentado en fecha 29 de junio del 2016 por el C.javier Zavala, respecto de la solicitud RR00038916 en contra de se anexa inconformidad, por el supuesto señalado en la fracción del artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dentro del plazo de cinco hábiles se resolverá sobre la admisión del mismo, por parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4°, 9° y 15 de la Constitución Política del Estado Jalisco; y el artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."

En la impresión del documento con título "**Registro del recurso de revisión**", que envió el Organismo Garante de la Entidad Federativa, específicamente en el apartado de "**Descripción de su inconformidad**", el recurrente especificó:

"Se anexa inconformidad".

Y posteriormente aparece la leyenda "No hay archivo adjunto".

38. Que si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las exigencias que prevén los

Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley General, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la solicitud consistió en si Ricardo de Alba recibió expedientes de aspirantes para participar en el proceso de selección de comisionados del propio Organismo Garante de la Entidad Federativa.

39. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación se dio acceso al ahora recurrente a un enlace para su consulta, para ponerle a su disposición la expresión documental que sustentara la respuesta.

40. Que con esa respuesta es dable suponer que para el sujeto obligado existió claridad en los siguientes aspectos:

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste;
2.- Que la información solicitada es pública, y
3.- Que, además, es posible consultar en forma digitalizada la información, desde luego accediendo al enlace que puso a su disposición en la propia respuesta.

41. Que entonces, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información.

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito *sine qua non* es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

42. Que lo anterior es así porque se trata de un caso con características que pueden actualizarse de forma común, pues se está en presencia de un asunto en que se puso a disposición un enlace electrónico en el cual era posible consultar la información, con su correspondiente expresión documental, lo cual hace injustificable la intervención de

este Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le corresponde conocer de forma original, pues dicha respuesta incluso, da la pauta para suponer que existió claridad para el sujeto obligado por cuanto al carácter público de la información solicitada.

43. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino que el único objetivo que persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia.

44. Que en abono a lo anterior, es posible advertir de la Ley Estatal que en su Título Sexto denominado "De los Recursos y de la Facultad de Atracción", se encuentra el Capítulo I que regula "Del Recurso de Revisión". En el artículo 96 se prevé lo siguiente:

> "Artículo 96. Recurso de Revisión - Escrito inicial
> 1. El escrito de presentación del recurso de revisión debe contener:
>
> I. Autoridad ante quien se impugna, que es el Instituto;
> II. Nombre o seudónimo de quien lo promueve;
> III. Sujeto obligado que conoció de la solicitud de acceso a la información pública o emitió la respuesta que se impugna;
> IV. Número y fecha de la respuesta que se impugna;
> V. Argumentos sobre las omisiones del sujeto obligado o la improcedencia de la respuesta, si lo desea;
> VI. Nombre y domicilio del tercero afectado, en su caso, así como razón de la afectación, y
> VII. Lugar y fecha de presentación; y
> VIII. Correo electrónico o domicilio para recibir notificaciones.
> 2. En caso de haber proporcionado domicilio, las notificaciones se realizarán por correo certificado. En caso de no señalar correo electrónico ni domicilio las notificaciones se harán mediante estrados electrónicos.
>
> 3. Al escrito de presentación del recurso de revisión debe acompañarse copia de la solicitud de información pública presentada y, en su caso, copia de la respuesta impugnada.
>
> 4. Al escrito de presentación del recurso de revisión puede acompañarse copia de los documentos públicos o privados que sustenten sus argumentos o indicar el lugar de consulta de los primeros.
>
> 5. El Instituto subsanará las deficiencias del recurso interpuesto."

45. Que del numeral acabado de copiar se desprende que como parte de los requisitos del recurso de revisión, se encuentran los argumentos sobre las omisiones del sujeto obligado o la improcedencia de la respuesta. Y en ese requisito específico se hace la aclaración de que sólo debe contenerse, si así lo desea el recurrente.

46. Que de tal manera, al ser optativo para el particular la formulación de los argumentos que sustentan sus pretensiones en el recurso, según se advierte del texto del artículo 96, punto 1, fracción V, y ante la omisión de ese requisito, no se aportan elementos a través de los motivos de inconformidad que permitan arribar a una determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y trascendencia del asunto.

47. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se encuentra *sub júdice* por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta proporcionó un enlace en que, según su dicho, era consultable la información solicitada.

48. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo.

49. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino solo se consideran para examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los elementos necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto.

50. Que sirve de modo orientador el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Época: Novena Época
Registro: 199793
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo IV, Diciembre de 1996
Materia(s): Común
Tesis: P. CLI/96
Página: 6

ATRACCIÓN, FACULTAD DE. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO.

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad.

Varios 631/96. Manuel Camacho Solís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis."

51. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse que en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que se está en presencia de un caso en que para dar respuesta se remitió a la consulta de un *link* en que podría consultarse, lo cual por sí solo no se cree que justifique ese interés pero además, la omisión del recurrente de expresar motivos de inconformidad hace que no se cuente con elementos adicionales a la solicitud y a la respuesta para estimar el interés referido.

Sin dejar de advertir que tampoco existe alguna disposición normativa que obligue al particular a desarrollar motivos de inconformidad para demostrar el interés y trascendencia de su recurso pero, se repite, al no existir tampoco esa obligación al momento de interponer el recurso es por lo que esta valoración se hace sin agravios de por medio.

52. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien,

tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta consistente en la consulta del *link* mencionado y, en todo caso, la contextualización del asunto parece indicar que la litis se circunscribiría a determinar si con la consulta a ese enlace se satisface o no lo solicitado por el particular, desde luego, en opinión de este Instituto y a reserva de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa opinara distinto al momento de resolver.

53. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta que en apariencia no niega la información solicitada, sin que se aporten mayores argumentos por parte del recurrente al formular su impugnación.

54. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la Comisionada Ximena Puente de la Mora, toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables.

55. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción III, la facultad del Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados.

56. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno.

57. Que en términos del artículo 21, fracción II del Reglamento Interior, la Comisionada Ximena Puente de la Mora, en ejercicio de la facultades conferidas a este Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo.

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y III, 21, fracciones II, III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 003/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el presente Acuerdo al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número 003/2016, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación.

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INAI.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/05/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 003/2016
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora

Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidente

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

Yuri Zuckermann Pérez
Coordinador Técnico del Pleno

Federico Guzmán Tamayo
Coordinador del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.07, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/05/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: 003/2016

Comisionado Ponente: Ximena Puente de la Mora

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 003/2016, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 003/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en virtud de que no se reunían los requisitos de interés y trascendencia para su procedencia.

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a continuación expongo.

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la notificación realizada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, del recurso de revisión número 003/2016, considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco jurídico que la regula.

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: **1) el interés y la trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada del organismo garante.**

Ahora bien, en el Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, **debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia**.

Por otro lado, en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma,* se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera es procedente la atracción.

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes:

1. **Es discrecional reglada y por tanto potestativa,** ya que es el órgano que cuenta con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

2. **Es excepcional,** ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en específico.

3. Para que opere **deben cumplirse los siguientes requisitos:** 1) Que dada la naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en

lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.[1]

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir **una petición fundada por parte del organismo garante.** Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los Lineamientos Generales.

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: *"En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo."*, lo cual se replica en el numeral noveno de los Lineamientos Generales de la materia.

Cabe precisar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el artículo 95, punto 2, dispone lo mismo que lo señalado en el artículo 182 de la Ley General.

Con respecto a lo anterior, en el Acuerdo aprobado por mayoría se señala en el considerando 7 que *"aunque pareciera hablar de una especie de 'remisión en automático' por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción], ... no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado* ***pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos***

[1] Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro **"FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."**[1], que si bien está referida a la atribución de la Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto.

opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído."

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, **que se ejerza de oficio por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia.**

Así, la normatividad analizada lleva a concluir que la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente:

> *"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (...), sino únicamente sobre las resoluciones de los recursos de revisión (...) que se estima que por su interés o relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal.*[2]*"*

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados.

No obstante, en el considerando 17 del Acuerdo se establece "*independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ..., lo cierto es que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este*

[2] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado."

Asimismo, en el considerando 22 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y el subsecuente que consiste en *"un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos;* ***lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia."*****, caso que, según lo previsto en el considerando 25 del Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante estatal** "*al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar.*"

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 27 del instrumento, en el sentido que *"de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción"*

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el párrafo segundo del artículo 182 –así como el correlativo 95, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deben interpretarse a partir de una visión constitucional y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, **únicamente debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para que ejercite su facultad de atracción.**

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de legalidad[3], y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados.

Además, el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, así como el diverso 95 punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios no pueden ser interpretados, como se intenta en el presente Acuerdo, **en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción,** siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del acceso a la información.

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, **se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto** de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente.

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés.

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia

---

[3] Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.)

tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos.

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, y en el caso concreto, bajo la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite.

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, **no son de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.**

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio preliminar, bajo el principio *de mayoría de razón*, no podría existir una obligación en los casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia del caso.

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública[4], los cuales se ven trastocados.

[4] Artículos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión.

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad originaria.

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando dicha disposición.

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal.

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido.

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales y de acceso a la información.

En ese sentido, el INAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el legislador como *"eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia"*[5].

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en condiciones de determinar si la ejerce o no.

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **emito**

[5] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en razón de los argumentos antes señalados.

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/05/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: 003/2016

Comisionado Ponente: Ximena Puente de la Mora

09F

VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 003/2016, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, VOTADO EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016.

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó la solicitud del Organismo Garante de Jalisco.

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto:

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 003/2016, del índice Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sostiene lo siguiente en relación con la interpretación del artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales:

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído.

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos escenarios:

   a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

   b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado, actualizando con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. .

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto.

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica una petición por parte del organismo garante local.

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad de atracción.

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa.

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere **de manera oficiosa** si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no.

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar.

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados.

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten.

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante nacional.

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los recurrentes. Lo anterior, como se observa:

> **Artículo 181.** El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, **de oficio o a petición de los Organismos garantes**, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
>
> El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos.
>
> **Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que de oficio podría conocer.**

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante nacional, **el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante el INAI dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso:**

> **Artículo 182.** Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> **En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo.**

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de manera oficiosa **o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.**

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso que revista interés y trascendencia.

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los *LINEAMIENTOS GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA MISMA*, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte conducente lo siguiente:

> ***Segundo.*** *Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:*
>
> ...
>
> ***XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción:*** *La petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución* ***que por su interés y trascendencia así lo amerite****, y*
>
> ***Cuarto.*** *Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las*

entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:

*I. **Por su interés**, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y*

*II. **Por su trascendencia**, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.*

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos garantes de las entidades federativas:

I. De oficio, o
II. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas.
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer.

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de

conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante de la entidad federativa.

***Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto**; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.*

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente.

***Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción** realizada por el organismo garante de la entidad federativa **deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción** descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos.*

***Décimo segundo.** La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios **para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos**, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional.*

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad

federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del plazo establecido en el requerimiento.

Décimo tercero. *El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción.*

Décimo séptimo. *Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.*

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas será el siguiente:

I. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados;
II. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado recurrido, y
III. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el

estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el ejercicio de la facultad de atracción.

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por presentada la misma.

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral Segundo, fracción XV la *Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción*, se entiende como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución **que por su interés y transcendencia así lo amerite.**

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la *Facultad de atracción* ***a petición*** *del organismo garante de la entidad federativa,* cuando el organismo garante de una entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, **la solicitud de atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y trascendencia, ya que así esta descrito en su definición.**

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos.

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando se trate de un asunto que revista interés y trascendencia.

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la **EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA:**

> **CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS)**
>
> *c) De la atracción de los recursos de revisión*
> *Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. En este sentido,* ***el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten****, tomando en consideración la definición que sobre éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por*

su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a petición fundada del organismo garante competente.

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el organismo garante nacional.

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 003/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sino que regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada.

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica en el capítulo II denominado "**DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICIÓN** DEL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el capítulo V de los Lineamientos.

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al correo electrónico y documento adjunto, remitido por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, considero lo siguiente:

En el caso concreto, en el correo citado, se informa que "Se remite recurso de revisión de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 2 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco [...]".

En el artículo citado por el organismo garante local se establece lo siguiente:

> En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General.

De acuerdo con lo anterior, se observa que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco fundó dicha solicitud en una disposición de la normativa local que prevé hacer del conocimiento de este Instituto

el recurso de revisión para que sea ejercida la facultad de atracción, pero no motivó las razones por las que considera que el recurso de revisión 003/2016 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza que amerite que este Instituto lo atraiga.

Lo anterior, aunado al estudio que debía hacerse en relación con su presentación o no dentro del plazo legal previsto para ello.

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Jalisco que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata de una petición del organismo garante.

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior –lo cual no aconteció en el presente asunto-, entonces resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

de Transparencia, en el que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podría ser o no susceptible de atracción.

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era susceptible de atracción.

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión.

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Jalisco que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

Finalmente, no debe pasar desapercibido que el caso en comento reviste una característica especial.

Como fue señalado, el organismo garante local de Jalisco utilizó como fundamento lo dispuesto en el artículo 95, numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece:

> Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación

...

2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General.

Si bien es cierto, el fundamento invocado por el organismo garante local de Jalisco en el escrito que nos hizo llegar es similar a lo previsto en el artículo 182 de la Ley General de Transparencia en el sentido de que en los casos en que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido deberá notificarlo al Instituto en un plazo que no exceda de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, también lo es que, al leer el artículo citado en relación con el artículo 35, numeral 1, fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios también se desprende que en este último artículo se excluye de las atribuciones del organismo garante local, la competencia para conocer y resolver el recurso de revisión en el que dicho Instituto sea el sujeto recurrido.

Esto último es relevante porque, de acuerdo con la Ley local, se señala expresamente que el organismo garante local carece de competencia para conocer de recursos de revisión donde sea el sujeto obligado recurrido, por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tampoco tiene competencia para conocer de todos los recursos de revisión interpuestos en contra del organismo garante local, sino únicamente de aquéllos que de ser el caso sean relevantes y trascendentes, lo que deja en estado de indefensión a los particulares ya que a la luz del marco normativo citado, no existe una vía para que los particulares impugnen la respuesta que el organismo garante local emita en atención a una solicitud de acceso presentada ante éste, pues la ley local niega la competencia para que el organismo garante local conozca de los recursos de revisión interpuestos en su contra y, por su parte, este Instituto sólo tiene atribuciones para conocer de asuntos que por su interés y trascendencia así lo ameriten, es decir, no de todos.

En virtud de lo anterior, considero relevante que se realice una orientación al particular sobre su derecho a acudir ante el Poder Judicial de la Federación para hacer valer la garantía del derecho de acceso a la información.

Oscar Mauricio Guerra Ford

Comisionado

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/05/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 003/2016
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el artículo 21, fracción X del *Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*, y la Regla Décima Tercera, numeral 6 de las *Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, respecto del *Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 003/2016, del Índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco*, votado en la sesión plenaria de fecha 13 de julio de 2016.

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 003/2016, del Índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno, por ello emito mi **voto disidente** a partir de las razones siguientes:

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del Órgano garante.

Ahora bien, en el Capítulo III de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, el cual es consistente con lo previsto en la *Constitución*, porque se reitera que la facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés.

Por otro lado, debe considerarse que en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma* –en lo sucesivo *Lineamientos Generales*-, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros establecidos en la *Constitución* y en *la Ley General de Transparencia y Acceso a*

la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a dichos preceptos fundantes de la atribución.

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos futuros o complejidad de sistemas en los mismos.

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los *Lineamientos Generales*.

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley General, se prevé lo siguiente:

> Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo. (énfasis añadido).

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo

garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el Órgano garante local.

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los *Lineamientos Generales* se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a consideración del Pleno.

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la

efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad ordinaria.

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si se reunían los requisitos de procedibilidad.

Respetuosamente

Joel Salas Suárez
Comisionado

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/07/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 005/2016
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.08

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 005/2016, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.

ANTECEDENTES

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional.

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo III, del Título Octavo.

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04)

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT-PUB/05/11/2015.09)

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General.

9. Que en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades Federativas.

10. Que el 04 de julio de 2016, se recibió en la dirección electrónica facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que textualmente señaló:

"Se remite recurso de revisión de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 2 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Toda la información inherente al presente recurso de revisión se encuentra en archivo adjunto al presente."

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con formato *pdf* diversa documentación inherente al recurso de revisión número 005/2016 del índice del Organismo Garante de la Entidad Federativa, y sus antecedentes.

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Instituto), registró el expediente con el número ATR/NOT/JAL/07/2016-INAI, cuya Presidente lo turnó el día 04 de julio de 2016 al Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales.

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el correspondiente estudio preliminar, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales.

CONSIDERANDO

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa señalar de previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el artículo 95, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante Ley Estatal), determinó remitir a este Instituto el recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo enviado por su Presidenta. El mencionado precepto es del tenor siguiente:

"Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación

1. El recurso de revisión debe presentarse ante la Unidad del sujeto obligado o ante el Instituto, por escrito y por duplicado, o en forma electrónica cuando el sujeto obligado cuente con el sistema que genere el comprobante respectivo, dentro de los quince días hábiles siguientes, según el caso, contados a partir de:

I. La notificación de la respuesta impugnada;
II. El acceso o la entrega de la información, o

> III. El término para notificar la respuesta de una solicitud de información, o para permitir el acceso o entregar la información, sin que se hayan realizado.
>
> 2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General."

2. Que como se puede apreciar, si bien es cierto que la remisión realizada por el Organismo Garante de la Entidad Federativa fue con base en el citado artículo 95, punto 2, de la Ley Estatal, también lo es que dicha disposición recoge en esencia el contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo Ley General). Este numeral es del tenor siguiente:

> "Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo."

3. Que para efectos prácticos, al ser el punto 2 del artículo 95 de la Ley Estatal una disposición esencialmente igual al párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General, se considera que aun cuando este último precepto no fue invocado por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, de cualquier modo, se estima aplicable para los efectos del presente acuerdo.

4. En ese tenor, en lo que aquí interesa, los invocados artículos establecen que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, éste deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso.

5. Que además, dichos dispositivos encuentran identidad con lo previsto en el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, mismo que refiere:

> "**Noveno.** El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea

interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente."

6. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo siguiente:

"**Décimo.** La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos."

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales.

7. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se encuentra inmerso en el Capítulo II de los Lineamientos Generales denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICIÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado, pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante; o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la posibilidad de que las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído.

8. Que en ese sentido, el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales aludidos, pues según se desprende de los antecedentes, el Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado con la solicitud de información que diera origen al recurso de revisión en

comento y por lo tanto, procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado en la normatividad invocada.

9. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

10. Que adicionalmente, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia.

11. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente:

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten."[1]

12. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto (aquí sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada).

13. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible.

14. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta facultad.

15. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho.

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente:

"**Artículo 21.** El Instituto tendrá las siguientes atribuciones...

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General..."

[1] Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal".

16. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente tesis aislada:

> "Época: Novena Época
> Registro: 182637
> Instancia: Primera Sala
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
> Tomo XVIII, Diciembre de 2003
> Materia(s): Común
> Tesis: 1a. LXXXIV/2003
> Página: 82
>
> **FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**
>
> El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo "podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de la controversia.
>
> Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda."

17. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya consistido en el artículo 95, punto 2, de la ley local, que como se ha apuntado es coincidente con el contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, y el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, lo cierto es que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante

nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado.

18. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto; sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica propiamente una solicitud por parte del organismo garante local.

19. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos:

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, y
2. El caso revista interés y trascendencia.

20. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende:

- Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso).
- El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el Capítulo III, del Título Octavo, de la Ley General.

21. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

22. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General:

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

23. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General.

24. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información".

25. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

26. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

27. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción.

28. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial:

"Época: Novena Época
Registro: 169885
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Abril de 2008
Materia(s): Común
Tesis: 1a./J. 27/2008
Página: 150

FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe.

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho."

29. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al entendimiento del tema abordado:

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos susceptibles de ser atraídos.

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo.

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: "gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", "importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los

sectores de la sociedad", "interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", "interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad".

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos".

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico (trascendencia histórica, política, interés nacional).

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico.

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para referirse a unos y a otros conceptos.

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos *"... que por su interés y trascendencia así lo ameriten"* (artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto utilizando dos términos distintos.

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de la conectiva lógica de la disyunción "o".

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de la palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común.

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal (jurídica, histórica, política, económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de solución que se adoptan ordinariamente.

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia de este Alto Tribunal (...)"

30. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma las características de interés y trascendencia:

"**Cuarto.** Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:

I. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y

II. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

La valoración de elementos, así como los razonamientos que realice el Instituto sobre un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos en los presentes lineamientos.".

31. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información[2]. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el mismo.

32. Por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

33. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente.

34. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto.

35. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo

[2] Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo.

que se requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida.

Y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6º de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada.

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 27/2008 que sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su competencia.

36. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación de algunos hechos que pueden dar luz para entender la materia de la solicitud que dio origen al recurso notificado por la Presidenta del Organismo Garante de la Entidad Federativa:

1.- El pasado doce de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobó el acuerdo legislativo número 331-LXI-2016 para la convocatoria a elección de dos Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y dos suplentes respectivos.

2.- A través de diverso Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, aprobado el día diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se modificó el Acuerdo mencionado en el punto anterior, y se expidió nuevamente la convocatoria relativa con algunas modificaciones en sus bases[3].

[3] El Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, del cual también se puede desprender que existió el acuerdo legislativo antecedente, esto es, el número 331-LXI-2016, se puede consultar en http://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-9/convocatoria_comisionados_2016.pdf

3.- En diverso acuerdo legislativo AL-599-LXI-2016 aprobado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, específicamente en sus páginas diez y once, aparece una lista con los nombres de los participantes para ocupar el cargo de comisionado en el Organismo Garante de la Entidad Federativa, entre quienes se encuentra la persona a que se hace referencia en la solicitud.

4.- En el mismo acuerdo legislativo a que se refiere el punto que antecede[4], se declaró desierta la convocatoria en mención.

5.- Por último, a través de diverso Acuerdo Legislativo número 600-LXI-2016 aprobado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se emitió la nueva convocatoria para elegir a los Comisionados del Organismo Garante de la Entidad Federativa[5].

37. Precisadas estas situaciones de hecho, se procede a hacer una relación de los aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa:

1.- El particular solicitó la siguiente información:

> "Hora, día y minutos con segundo en los que Ricardo de Alba presentó su documentación para participar como Comisionado, quien se la recibió y las constancias que acrediten su recepción."

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los siguientes términos:

> "Guadalajara, Jalisco, a 28 de junio de 2016
>
> **C. Solicitante**
> **Presente**
>
> [...]
>
> "...En ese tenor se resuelve en sentido afirmativo su solicitud, de conformidad con la normatividad aplicable[1]. Se hace de su conocimiento que de acuerdo con el "ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTACIÓN PARA PARTICIÁR EN EL PROCESO

[4] El Acuerdo Legislativo AL-599-LXI-2016 que declaró desierta la anterior convocatoria y en que aparece como uno de los participantes la persona a que se hace referencia en la solicitud, es consultable en http://www.congresojal.gob.mx/sites/default/files/convocatorias/AL599-LXI-16.pdf

[5] Este acuerdo se puede consultar en el enlace http://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-9/segunda_convocatoria.pdf

DE RENOVACIÓN DE COMISIONADOS DEL INSTITUO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES". el expediente del C. Ricardo Alfonso de Alba Moreno, consta que se recibió a las 10:55 horas del día 06 de junio del año en curso, por el C. Emiliano Briseño Castellanos, Técnico Especializado en Procesos de esta Institución. Sirva para lo anterior el acuse antes mencionado.

[...]"

Además, adjuntó a las constancias como respaldo a dicha respuesta una imagen.

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, aparece el documento "**ACUSE DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN**" fechado el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, del que se advierte lo siguiente:

"ACUSE DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio del 2016

Se tiene por recibido el recurso de revisión presentado en fecha 29 de junio del 2016 por el C.javier Zavala, respecto de la solicitud RR00039116 en contra de se aneza inconformidad, por el supuesto señalado en la fracción del artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dentro del plazo de cinco hábiles se resolverá sobre la admisión del mismo, por parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4°, 9° y 15 de la Constitución Política del Estado Jalisco; y el artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Es una burla que quien le recibió los papeles es amigo incondicional de Ricardo de Alab quien además es amigo y empleado del Secretario Ejecutivo,

El Secretario Ejecutivo a través de sus empleados le recibió el expediente a Ricardo sin excusarse. Lo que evidencia el conflicto de intereses.

La respuesta no la firma el titular de la unidad de transparencia y se me niega la información"

38. Que si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la

naturaleza y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley General, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se hizo consistir en quien certificó la cédula a Ricardo de Alba para participar en el proceso de selección de comisionados del propio Organismo Garante de la Entidad Federativa.

39. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación se dio acceso al ahora recurrente sobre los datos requeridos y además se adjuntó la expresión documental que sustenta dicha respuesta, consistente en el oficio UT/1159//2016.

40. Que con esa respuesta es dable suponer que para el sujeto obligado existió claridad en los siguientes aspectos:

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste;
2.- Que la información solicitada es pública, y
3.- Que, además, era posible adjuntar un documento digitalizado en apoyo a la respuesta.

41. Que entonces, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información.

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito *sine qua non* es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

42. Que lo anterior es así porque se trata de un caso con características que pueden actualizarse de forma común, pues se está en presencia de un asunto en que además

de que se le dio respuesta haciendo uso de texto, también se adjuntó una copia digitalizada con que se pretendió demostrar lo dicho, lo cual hace injustificable la intervención de este Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le corresponde conocer de forma original, pues dicha respuesta incluso, da la pauta para suponer que existió claridad para el sujeto obligado por cuanto al carácter público de la información solicitada.

43. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino que el único objetivo que persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia.

44. Que en abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente hace consistir su inconformidad, esencialmente, en que se le niega la información, a pesar de que en forma concurrente emite algunas consideraciones a la luz del contenido de la respuesta proporcionada; por lo cual la litis, al menos en apariencia, sólo se circunscribiría a determinar si se proporcionó o no la información materia de la solicitud lo cual, como ha quedado bien evidenciado, no es un tema novedoso o atípico, y la propia publicidad de la información no parece estar sujeta a debate pues, se repite, al darle respuesta el sujeto obligado adjuntó una constancia que contenía la información solicitada.

45. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se encuentra *sub júdice* por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta proporcionó datos relacionados con la materia de la información solicitada.

46. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo.

47. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino solo se consideran para examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los

elementos necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto.

48. Que sirve de modo orientador el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

> "Época: Novena Época
> Registro: 199793
> Instancia: Pleno
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
> Tomo IV, Diciembre de 1996
> Materia(s): Común
> Tesis: P. CLI/96
> Página: 6
>
> **ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO.**
>
> El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad.
>
> Varios 631/96. Manuel Camacho Solís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García.
>
> El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis."

49. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse que en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta aduciendo que no fue entregado lo solicitado.

50. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta a la cual, incluso, se anexó una constancia con que se pretendió sustentar dicha respuesta.

51. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta aduciendo que no fue entregado lo solicitado.

52. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables.

53. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción III, la facultad del Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados.

54. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno.

55. Que en términos del artículo 21, fracción II del Reglamento Interior, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, en ejercicio de la facultades conferidas a este Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo.

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y III, 21, fracciones II, III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 005/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el presente Acuerdo al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número 005/2016, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación.

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INAI.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/07/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 005/2016
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidente

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

Yuri Zuckermann Pérez
Coordinador Técnico del Pleno

Federico Guzmán Tamayo
Coordinador del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.08, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/07/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: 005/2016

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 005/2016, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 005/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en virtud de que no se reunían los requisitos de interés y trascendencia para su procedencia.

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a continuación expongo.

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la notificación realizada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, del recurso de revisión número 005/2016, considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco jurídico que la regula.

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: **1) el interés y la trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada del organismo garante.**

Ahora bien, en el Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, **debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia.**

Por otro lado, en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma*, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera es procedente la atracción.

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes:

1. **Es discrecional reglada y por tanto potestativa**, ya que es el órgano que cuenta con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

2. **Es excepcional**, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en específico.

3. Para que opere **deben cumplirse los siguientes requisitos:** 1) Que dada la naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en

lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.[1]

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir **una petición fundada por parte del organismo garante.** Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los Lineamientos Generales.

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: *"En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo."*, lo cual se replica en el numeral noveno de los Lineamientos Generales de la materia.

Cabe precisar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el artículo 95, punto 2, dispone lo mismo que lo señalado en el artículo 182 de la Ley General.

Con respecto a lo anterior, en el Acuerdo aprobado por mayoría se señala en el considerando 7 que *"aunque pareciera hablar de una especie de 'remisión en automático' por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción], ... no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado* ***pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o***

[1] Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro **"FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."**[1], que si bien está referida a la atribución de la Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto.

bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído."

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, **que se ejerza de oficio por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia.**

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente:

> *"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (...), sino únicamente sobre las resoluciones de los recursos de revisión (...) que se estima que por su interés o relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal.[2]"*

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados.

No obstante, en el considerando 17 del Acuerdo, se establece "*independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ..., lo cierto es que se*

[2] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado."

Asimismo, en el considerando 22 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y el subsecuente que consiste en *"un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos;* ***lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia."*****, caso que, según lo previsto en el considerando 24 del Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante estatal** *"al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar."*

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 27 del instrumento, en el sentido que *"de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción"*

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el párrafo segundo del artículo 182 –así como el correlativo 95, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deben interpretarse a partir de una visión constitucional y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, **únicamente debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición fundada, a efecto**

de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para que ejercite su facultad de atracción.

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de legalidad[3], y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados.

Además, el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, así como el diverso 95 punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios no pueden ser interpretados, como se intenta en el presente Acuerdo, **en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción,** siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del acceso a la información.

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, **se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto** de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente.

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés.

---

[3] Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.)

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos.

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, y en el caso concreto, bajo la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite.

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, **no son de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.**

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio preliminar, bajo el principio *de mayoría de razón*, no podría existir una obligación en los casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia del caso.

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública[4], los cuales se ven trastocados.

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión.

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad originaria.

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando dicha disposición.

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal.

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate

[4] Artículos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido.

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales y de acceso a la información.

En ese sentido, el INAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el legislador como *"eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia"*[5].

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en condiciones de determinar si la ejerce o no.

[5] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/07/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: 005/2016

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **emito voto disidente**, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en razón de los argumentos antes señalados.

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/07/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: 005/2016

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 005/2016, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, VOTADO EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016.

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó la solicitud del Organismo Garante de Jalisco.

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto:

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 005/2016, del índice Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sostiene lo siguiente en relación con la interpretación del artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales:

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído.

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos escenarios:

   a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

   b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado, actualizando con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. .

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto.

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica una petición por parte del organismo garante local.

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad de atracción.

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa.

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere **de manera oficiosa** si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no.

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar.

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados.

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten.

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante nacional.

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los recurrentes. Lo anterior, como se observa:

> **Artículo 181.** El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, **de oficio o a petición de los Organismos garantes**, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
>
> El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos.
>
> **Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que de oficio podría conocer.**

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante nacional, **el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante el INAI dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso:**

> **Artículo 182.** Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> **En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo.**

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de manera oficiosa **o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.**

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso que revista interés y trascendencia.

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los *LINEAMIENTOS GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA MISMA*, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte conducente lo siguiente:

> ***Segundo.*** *Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:*
>
> *...*
>
> ***XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción:*** *La petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución* ***que por su interés y trascendencia así lo amerite****, y*
>
> ***Cuarto.*** *Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las*

entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:

*I. **Por su interés**, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y*

*II. **Por su trascendencia**, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.*

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos garantes de las entidades federativas:

I. De oficio, o
II. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas.
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer.

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de

conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante de la entidad federativa.

*Noveno. **El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto**; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.*

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente.

***Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción** realizada por el organismo garante de la entidad federativa **deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción** descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos.*

***Décimo segundo.** La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios **para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos**, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional.*

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad

federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del plazo establecido en el requerimiento.

Décimo tercero. *El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción.*

Décimo séptimo. *Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.*

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas será el siguiente:

I. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados;
*II. **La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia corroborará que** el recurso de revisión que se somete a la consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción **haya sido admitido,** y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado recurrido, y*
III. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el

estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el ejercicio de la facultad de atracción.

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por presentada la misma.

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral Segundo, fracción XV la *Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción*, se entiende como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución **que por su interés y transcendencia así lo amerite.**

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la *Facultad de atracción* ***a petición*** *del organismo garante de la entidad federativa,* cuando el organismo garante de una entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, **la solicitud de atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y trascendencia, ya que así está descrito en su definición.**

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos.

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando se trate de un asunto que revista interés y trascendencia.

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA:

> CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS)
>
> *c) De la atracción de los recursos de revisión*
> *Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. En este sentido, el **Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten**, tomando en consideración la definición que sobre éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por*

su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a petición fundada del organismo garante competente.

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el organismo garante nacional.

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 005/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sino que regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada.

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica en el capítulo II denominado "**DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICIÓN** DEL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el capítulo V de los Lineamientos.

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al correo electrónico y documento adjunto, remitido por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, considero lo siguiente:

En el caso concreto, en el correo citado, se informa que "Se remite recurso de revisión de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 2 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco [...]".

En el artículo citado por el organismo garante local se establece lo siguiente:

> En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General.

De acuerdo con lo anterior, se observa que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco fundó dicha solicitud en una disposición de la normativa local que prevé hacer del conocimiento de este Instituto el recurso de revisión para que sea ejercida la facultad de atracción, pero no motivó las

razones por las que considera que el recurso de revisión 005/2016 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza que amerite que este Instituto lo atraiga.

Lo anterior, aunado al estudio que debía hacerse en relación con su presentación o no dentro del plazo legal previsto para ello.

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Jalisco que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata de una petición del organismo garante.

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior –lo cual no aconteció en el presente asunto-, entonces resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

de Transparencia, en el que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podría ser o no susceptible de atracción.

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era susceptible de atracción.

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión.

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Jalisco que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

Finalmente, no debe pasar desapercibido que el caso en comento reviste una característica especial.

Como fue señalado, el organismo garante local de Jalisco utilizó como fundamento lo dispuesto en el artículo 95, numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece:

> Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación

...

2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General.

Si bien es cierto, el fundamento invocado por el organismo garante local de Jalisco en el escrito que nos hizo llegar es similar a lo previsto en el artículo 182 de la Ley General de Transparencia en el sentido de que en los casos en que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido deberá notificarlo al Instituto en un plazo que no exceda de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, también lo es que, al leer el artículo citado en relación con el artículo 35, numeral 1, fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios también se desprende que en este último artículo se excluye de las atribuciones del organismo garante local, la competencia para conocer y resolver el recurso de revisión en el que dicho Instituto sea el sujeto recurrido.

Esto último es relevante porque, de acuerdo con la Ley local, se señala expresamente que el organismo garante local carece de competencia para conocer de recursos de revisión donde sea el sujeto obligado recurrido, por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tampoco tiene competencia para conocer de todos los recursos de revisión interpuestos en contra del organismo garante local, sino únicamente de aquéllos que de ser el caso sean relevantes y trascendentes, lo que deja en estado de indefensión a los particulares ya que a la luz del marco normativo citado, no existe una vía para que los particulares impugnen la respuesta que el organismo garante local emita en atención a una solicitud de acceso presentada ante éste, pues la ley local niega la competencia para que el organismo garante local conozca de los recursos de revisión interpuestos en su contra y, por su parte, este Instituto sólo tiene atribuciones para conocer de asuntos que por su interés y trascendencia así lo ameriten, es decir, no de todos.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/07/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: 005/2016

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

En virtud de lo anterior, considero relevante que se realice una orientación al particular sobre su derecho a acudir ante el Poder Judicial de la Federación para hacer valer la garantía del derecho de acceso a la información.

Oscar Mauricio Guerra Ford

Comisionado

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/07/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 005/2016
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el artículo 21, fracción X del *Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*, y la Regla Décima Tercera, numeral 6 de las *Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, respecto del *Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 005/2016, del Índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco*, votado en la sesión plenaria de fecha 13 de julio de 2016.

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 005/2016, del Índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno, por ello emito mi **voto disidente** a partir de las razones siguientes:

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del Órgano garante.

Ahora bien, en el Capítulo III de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, el cual es consistente con lo previsto en la *Constitución*, porque se reitera que la facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés.

Por otro lado, debe considerarse que en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma* –en lo sucesivo *Lineamientos Generales-*, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros establecidos en la *Constitución* y en *la Ley General de Transparencia y Acceso a*

la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a dichos preceptos fundantes de la atribución.

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos futuros o complejidad de sistemas en los mismos.

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los *Lineamientos Generales*.

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley General, se prevé lo siguiente:

> Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo. (énfasis añadido).

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo

garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el Órgano garante local.

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los *Lineamientos Generales* se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a consideración del Pleno.

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la

efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad ordinaria.

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si se reunían los requisitos de procedibilidad.

Respetuosamente

Joel Salas Suárez
Comisionado

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/08/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 006/2016
Comisionada Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.09

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 006/2016, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.

ANTECEDENTES

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, modificando entre otros, el artículo 6º, apartado A, fracción VIII el cual establece que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional.

4. Que el artículo 6º, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas,

podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo III, del Título Octavo.

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04)

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT-PUB/05/11/2015.09)

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General.

9. Que en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades Federativas.

10. Que el cuatro de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del

Estado de Jalisco (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que textualmente señaló:

> "Se remite recurso de revisión de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 2 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
>
> Toda la información inherente al presente recurso de revisión se encuentra en archivo adjunto al presente."

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con formato *pdf* diversa documentación inherente al recurso de revisión número 006/2016 del índice del Organismo Garante de la Entidad Federativa, y sus antecedentes.

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Instituto), registró el expediente con el número ATR/NOT/JAL/08/2016-INAI, cuya Presidente lo turnó el día cuatro de julio de dos mil dieciséis a la Comisionada Areli Cano Guadiana para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de la Federación el tres de marzo de dos mil dieciséis.

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el correspondiente estudio preliminar, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo a la Comisionada Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales.

14. Que posteriormente, mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, la Comisionada Areli Cano Guadiana, a quien inicialmente se le había turnado el asunto, determinó devolver a la Comisionada Presidente el expediente que le fue turnado, al estimar que no existe una petición fundada y motivada para que este Instituto ejerza la facultad de atracción.

15. Que con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el expediente a que se refiere este acuerdo el doce de julio de dos mil dieciséis, a la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/08/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 006/2016
Comisionada Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

CONSIDERANDO

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente estudio preliminar, precisa señalar de previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el artículo 95, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante Ley Estatal), determinó remitir a este Instituto el recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo enviado por su Presidenta. El mencionado precepto es del tenor siguiente:

> "Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación
>
> 1. El recurso de revisión debe presentarse ante la Unidad del sujeto obligado o ante el Instituto, por escrito y por duplicado, o en forma electrónica cuando el sujeto obligado cuente con el sistema que genere el comprobante respectivo, dentro de los quince días hábiles siguientes, según el caso, contados a partir de:
>
> I. La notificación de la respuesta impugnada;
> II. El acceso o la entrega de la información, o
> III. El término para notificar la respuesta de una solicitud de información, o para permitir el acceso o entregar la información, sin que se hayan realizado.
>
> 2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General."

2. Que como se puede apreciar, si bien es cierto que la remisión realizada por el Organismo Garante de la Entidad Federativa fue con base en el citado artículo 95, punto 2, de la Ley Estatal, también lo es que dicha disposición recoge en esencia el contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo Ley General). Este numeral es del tenor siguiente:

> "Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo."

3. Que para efectos prácticos, al ser el punto 2 del artículo 95 de la Ley Estatal una disposición esencialmente igual al párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General, se considera que aun cuando este último precepto no fue invocado por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, de cualquier modo, se estima aplicable para los efectos del presente estudio preliminar.
4. En ese tenor, en lo que aquí interesa, los invocados artículos establecen que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, éste deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso.

5. Que además, dichos dispositivos encuentran identidad con lo previsto en el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, mismo que refiere:

> "**Noveno.** El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.
>
> En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente."

6. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo siguiente:

> "**Décimo.** La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos."

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales.

7. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que el referido numeral Noveno, pareciera regular una especie de "remisión en automático" por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se encuentra inmerso en el Capítulo II de los

Lineamientos Generales denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICIÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la posibilidad de que las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído.

8. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales aludidos, pues según se desprende de los antecedentes del presente estudio preliminar, el Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado con la solicitud de información que diera origen al recurso de revisión en comento y por lo tanto, procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado en la normatividad invocada.

9. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

10. Que adicionalmente, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el

Instituto para conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia.

11. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente:

> "El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten."[1]

12. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto (aquí sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada).

13. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible.

14. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos

[1] Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal".

quedarán excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta facultad.

15. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho.

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente:

"**Artículo 21.** El Instituto tendrá las siguientes atribuciones...

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General..."

16. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente tesis aislada:

"Época: Novena Época
Registro: 182637
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVIII, Diciembre de 2003
Materia(s): Común
Tesis: 1a. LXXXIV/2003
Página: 82

FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia

así lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo "podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de la controversia.

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda."

17. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya consistido en el artículo 95, punto 2, de la ley local, que como se ha apuntado es coincidente con el contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, y el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, lo cierto es que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado.

18. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto; sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica propiamente una solicitud por parte del organismo garante local.

19. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos:

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, y
2. El caso revista interés y trascendencia.

20. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende:

- Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso).
- El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el Capítulo III, del Título Octavo, de la Ley General.

21. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los principios señalados en el artículo 6º, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

22. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General:

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

23. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General.

24. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto

atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información".

25. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

26. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

27. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción.

28. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial:

"Época: Novena Época
Registro: 169885
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Abril de 2008
Materia(s): Común
Tesis: 1a./J. 27/2008
Página: 150

FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un

criterio que sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe.

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho."

29. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al entendimiento del tema abordado:

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos susceptibles de ser atraídos.

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo.

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: "gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", "importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", "interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", "interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad".

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos".

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico (trascendencia histórica, política, interés nacional).

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico.

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y,

por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para referirse a unos y a otros conceptos.

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos *"... que por su interés y trascendencia así lo ameriten"* (artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto utilizando dos términos distintos.

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de la conectiva lógica de la disyunción "o".

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de la palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común.

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal (jurídica, histórica, política, económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de solución que se adoptan ordinariamente.

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia de este Alto Tribunal (...)"

30. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma las características de interés y trascendencia:

"**Cuarto.** Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:

> **I. Por su interés**, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y
>
> **II. Por su trascendencia**, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.
>
> La valoración de elementos, así como los razonamientos que realice el Instituto sobre un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos en los presentes lineamientos.".

31. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información[2]. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el mismo.

32. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

---

[2] Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo.

33. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente.

34. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto.

35. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida.

Y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada.

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1a./J.

27/2008 que sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su competencia.

36. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación de algunos hechos que pueden dar luz para entender la materia de la solicitud que dio origen al recurso notificado por la Presidenta del Organismo Garante de la Entidad Federativa:

1.- El pasado doce de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobó el acuerdo legislativo número 331-LXI-2016 para la convocatoria a elección de dos Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y dos suplentes respectivos.

2.- A través de diverso Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, aprobado el día 17 de mayo de 2016, se modificó el Acuerdo mencionado en el punto anterior, y se expidió nuevamente la convocatoria relativa con algunas modificaciones en sus bases[3].

3.- En diverso acuerdo legislativo AL-599-LXI-2016 aprobado el 23 de junio de 2016, específicamente en sus páginas diez y once, aparece una lista con los nombres de los participantes para ocupar el cargo de comisionado en el Organismo Garante de la Entidad Federativa, entre quienes se encuentra la persona a que se hace referencia en la solicitud.

4.- En el mismo acuerdo legislativo a que se refiere el punto que antecede[4], se declaró desierta la convocatoria en mención.

5.- Por último, a través de diverso Acuerdo Legislativo número 600-LXI-2016 aprobado el 23 de junio de 2016, se emitió la nueva convocatoria para elegir a los Comisionados del Organismo Garante de la Entidad Federativa[5].

37. Que precisadas estas situaciones de hecho, se procede a hacer una relación de los aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa:

---

[3] El Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, del cual también se puede desprender que existió el acuerdo legislativo antecedente, esto es, el número 331-LXI-2016, se puede consultar en http://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-9/convocatoria_comisionados_2016.pdf

[4] El Acuerdo Legislativo AL-599-LXI-2016 que declaró desierta la anterior convocatoria y en que aparece como uno de los participantes la persona a que se hace referencia en la solicitud, es consultable en http://www.congresojal.gob.mx/sites/default/files/convocatorias/AL599-LXI-16.pdf

[5] Este acuerdo se puede consultar en el enlace http://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-9/segunda_convocatoria.pdf

1.- El particular solicitó la siguiente información:

"Copia del examen a comisionado que realizó Ricardo de Alba."

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los siguientes términos:

"Guadalajara, Jalisco, a 27 de junio de 2016

C. Solicitante
Presente

[...]

"...En ese tenor se resuelve en sentido afirmativo su solicitud, de conformidad con la normatividad aplicable[1]. Se anexa al presente oficio copia del exámen solicitado..."

[...]"

Además, adjuntó a las constancias como respaldo a dicha respuesta la copia del examen respetivo.

Cabe hacer mención que, de acuerdo con el dicho del Secretario Ejecutivo del Organismo Garante de la Entidad Federativa en el documento referido como "Informe de Ley", el examen de mérito se entregó al particular que pidió la información, con motivo del consentimiento expreso, por escrito, del C. Ricardo Alfonso De Alba Moreno.

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, aparece el documento "**ACUSE DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN**" fechado el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, del que se advierte lo siguiente:

"ACUSE DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio del 2016

Se tiene por recibido el recurso de revisión presentado en fecha 29 de junio del 2016 por el C.javier Zavala, respecto de la solicitud RR00039116 en contra de se aneza inconformidad, por el supuesto señalado en la fracción del artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dentro del plazo de cinco hábiles se resolverá sobre la admisión del mismo, por parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4°, 9° y 15 de la Constitución Política del Estado Jalisco; y el artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El examen está mal contestado y le dieron puntos que no merecía, por ejemplo., la preguinta 5, le dicen que diga que es información pública y lo contestó muy mal, no dijo que era aquella que se poseea, administre o genere. Le ayudaron en el examen. Es una burla.

No contesta el titular de la unidad, se niega información pública"

38. Que con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley General, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se hizo consistir en la copia del examen a comisionado que realizó Ricardo de Alba en el proceso de selección de comisionados del propio Organismo Garante de la Entidad Federativa.

39. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que la contestación se le resuelve "en sentido afirmativo" al solicitante. Incluso, en los documentos que envía el Organismo Garante de la Entidad Federativa se agrega en la respuesta, una copia del examen solicitado con la que se pretendió demostrar el dicho del Coordinador de la Unidad de Transparencia del Organismo Garante de la Entidad Federativa.

40. Que con esa respuesta es dable concluir que para el sujeto obligado existió claridad en los siguientes aspectos:

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste;
2.- Que la información solicitada es pública (lo cual incluso sustenta en el hecho de que se otorgó consentimiento expreso por parte de quien contestó el examen), y
3.- Que, además, era posible adjuntar un documento digitalizado que demostrara lo anterior.

41. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información.

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito *sine qua non* para ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

42. Que lo anterior es así porque se trata de un caso con características que pueden actualizarse de forma común, pues se está en presencia de un asunto en que se dio respuesta adjuntando una copia digitalizada del documento que se solicitó, según lo resuelto por el sujeto obligado, lo cual hace injustificable la intervención de este Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le corresponde conocer de forma original, pues dicha respuesta incluso, da la pauta para suponer que existió claridad para el sujeto obligado por cuanto al carácter público de la información solicitada y la expresión documental que tenía.

43. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino que el único objetivo que se persigue es, insistimos, poner de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia.

44. Que en abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente hace consistir su inconformidad, esencialmente, en que "El examen está mal contestado y le dieron puntos que no merecía, por ejemplo., la pregunta 5, le dicen que diga que es información pública y lo contestó muy mal, no dijo que era aquella que se posea, administre o genere. Le ayudaron en el examen. Es una burla.", de lo que se advierte que sus manifestaciones aparentan ser una especie de señalamientos respecto al contenido de las respuestas del examen y la manera de proceder de quien o quienes evaluaron, por lo cual son aspectos que bien podrían ser calificados por el Organismo

Garante de la Entidad Federativa para determinar si, en principio, deberían formar parte de la litis, aunado a que la propia publicidad de la información no parece estar sujeta a debate pues, se repite, al darle respuesta el sujeto obligado adjuntó una constancia que contenía la información solicitada, es decir, copia del examen solicitado.

45. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se encuentra *sub júdice* por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta anexó copia del examen a comisionado que realizó Ricardo Alfonso De Alba Moreno, a que se refiere la solicitud.

46. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo.

47. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los elementos necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto.

48. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Época: Novena Época
Registro: 199793
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo IV, Diciembre de 1996
Materia(s): Común
Tesis: P. CLI/96
Página: 6

ATRACCIÓN, FACULTAD DE. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO.

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad.

Varios 631/96. Manuel Camacho Solís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis."

49. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse que para esta Coordinación, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta aduciendo que se niega información pública, pero a la vez agregando algunos señalamientos respecto a lo que se entregó por parte del sujeto obligado.

50. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta a la cual, incluso, se anexó una constancia con que se pretendió sustentar dicha respuesta.

51. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta aduciendo que se niega información pública.

52. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables.

53. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción III, la facultad del Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados.

54. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno.

55. Que en términos del artículo 21, fracción II del Reglamento Interior, la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, en ejercicio de la facultades conferidas a este Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo.

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y III, 21, fracciones II, III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/08/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 006/2016
Comisionada Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 006/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el presente Acuerdo al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número 006/2016, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación.

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INAI.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/08/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 006/2016
Comisionada Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidente

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

Yuri Zuckermann Pérez
Coordinador Técnico del Pleno

Federico Guzmán Tamayo
Coordinador del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.09, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/08/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: 006/2016

Comisionado Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 006/2016, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 006/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en virtud de que no se reunían los requisitos de interés y trascendencia para su procedencia.

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a continuación expongo.

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la notificación realizada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, del recurso de revisión número 006/2016, considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco jurídico que la regula.

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: **1) el interés y la trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada del organismo garante.**

Ahora bien, en el Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, **debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia**.

Por otro lado, en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma,* se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera es procedente la atracción.

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes:

1. **Es discrecional reglada y por tanto potestativa,** ya que es el órgano que cuenta con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

2. **Es excepcional,** ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en específico.

3. Para que opere **deben cumplirse los siguientes requisitos:** 1) Que dada la naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en

lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.[1]

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir **una petición fundada por parte del organismo garante.** Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los Lineamientos Generales.

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: *"En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo.",* lo cual se replica en el numeral noveno de los Lineamientos Generales de la materia.

Cabe precisar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el artículo 95, punto 2, dispone lo mismo que lo señalado en el artículo 182 de la Ley General.

Con respecto a lo anterior, en el Acuerdo aprobado por mayoría se señala en el considerando 7 que *"aunque pareciera regular una especie de 'remisión en automático' por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción], ... no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado* ***pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o***

[1] Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro **"FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."**[1], que si bien está referida a la atribución de la Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto.

bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído."

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, **que se ejerza de oficio por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia.**

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente:

> *"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (...), sino únicamente sobre las resoluciones de los recursos de revisión (...) que se estima que por su interés o relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal.*[2]*"*

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados.

No obstante, en el considerando 17 del Acuerdo se establece "*independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ..., lo cierto es que se*

[2] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado."

Asimismo, en el considerando 22 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y el subsecuente que consiste en *"un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos;* ***lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia."*, caso que, según lo previsto en el considerando 25 del Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante estatal** "*al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar.*"

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 27 del instrumento, en el sentido que *"de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción"*

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el párrafo segundo del artículo 182 –así como el correlativo 95, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deben interpretarse a partir de una visión constitucional y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, **únicamente debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición fundada, a efecto**

de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para que ejercite su facultad de atracción.

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de legalidad[3], y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados.

Además, el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, así como el diverso 95 punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios no pueden ser interpretados, como se intenta en el presente Acuerdo, **en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción,** siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del acceso a la información.

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, **se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto** de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente.

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés.

---

[3] Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.)

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos.

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, y en el caso concreto, bajo la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite.

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, **no son de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.**

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio preliminar, bajo el principio *de mayoría de razón*, no podría existir una obligación en los casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia del caso.

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública[4], los cuales se ven trastocados.

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión.

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad originaria.

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando dicha disposición.

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal.

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate

[4] Artículos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido.

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales y de acceso a la información.

En ese sentido, el INAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el legislador como *"eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia"*[5].

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en condiciones de determinar si la ejerce o no.

[5] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/08/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: 006/2016

Comisionado Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **emito voto disidente**, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en razón de los argumentos antes señalados.

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/08/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: 006/2016

Comisionado Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 006/2016, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, VOTADO EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016.

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó la solicitud del Organismo Garante de Jalisco.

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto:

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 006/2016, del índice Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sostiene lo siguiente en relación con la interpretación del artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales:

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído.

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos escenarios:

   a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

   b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado, actualizando con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. .

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto.

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica una petición por parte del organismo garante local.

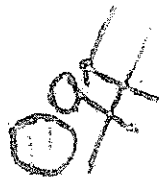
6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad de atracción.

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa.

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere **de manera oficiosa** si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no.



En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar.

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados.

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten.

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante nacional.

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los recurrentes. Lo anterior, como se observa:

> **Artículo 181.** El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, **de oficio o a petición de los Organismos garantes**, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
>
> El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos.
>
> **Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que de oficio podría conocer.**

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante nacional, **el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante el INAI dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso:**

> **Artículo 182.** Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> **En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo.**

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de manera oficiosa **o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.**

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso que revista interés y trascendencia.

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los *LINEAMIENTOS GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA MISMA*, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte conducente lo siguiente:

> ***Segundo.*** *Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:*
>
> ...
>
> ***XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción:*** *La petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución* ***que por su interés y trascendencia así lo amerite****, y*
>
> ***Cuarto.*** *Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las*

entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:

*I. **Por su interés**, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y*

*II. **Por su trascendencia**, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.*

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos garantes de las entidades federativas:

I. De oficio, o
II. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas.
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer.

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de

conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante de la entidad federativa.

*Noveno. **El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto**; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.*

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente.

***Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción** realizada por el organismo garante de la entidad federativa **deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción** descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos.*

***Décimo segundo.** La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios **para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos**, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional.*

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad

federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del plazo establecido en el requerimiento.

***Décimo tercero.** El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción.*

***Décimo séptimo.** Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.*

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas será el siguiente:

I. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados;
***II. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia corroborará que** el recurso de revisión que se somete a la consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción **haya sido admitido**, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado recurrido, y*
III. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el

estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el ejercicio de la facultad de atracción.

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por presentada la misma.

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral Segundo, fracción XV la *Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción,* se entiende como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución **que por su interés y transcendencia así lo amerite.**

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la *Facultad de atracción* ***a petición*** *del organismo garante de la entidad federativa,* cuando el organismo garante de una entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, **la solicitud de atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y trascendencia, ya que así está descrito en su definición.**

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos.

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando se trate de un asunto que revista interés y trascendencia.

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA:

> CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS)
>
> *c) De la atracción de los recursos de revisión*
> *Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. En este sentido,* ***el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten****, tomando en consideración la definición que sobre éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por*

su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a petición fundada del organismo garante competente.

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el organismo garante nacional.

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 006/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sino que regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada.

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica en el capítulo II denominado "**DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICIÓN** DEL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el capítulo V de los Lineamientos.

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al correo electrónico y documento adjunto, remitido por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, considero lo siguiente:

En el caso concreto, en el correo citado, se informa que "Se remite recurso de revisión de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 2 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco [...]".

En el artículo citado por el organismo garante local se establece lo siguiente:

> En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General.

De acuerdo con lo anterior, se observa que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco fundó dicha solicitud en una disposición de la normativa local que prevé hacer del conocimiento de este Instituto el recurso de revisión para que sea ejercida la facultad de atracción, pero no motivó las



razones por las que considera que el recurso de revisión 006/2016 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza que amerite que este Instituto lo atraiga.

Lo anterior, aunado al estudio que debía hacerse en relación con su presentación o no dentro del plazo legal previsto para ello.

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Jalisco que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata de una petición del organismo garante.

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior –lo cual no aconteció en el presente asunto-, entonces resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

de Transparencia, en el que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podría ser o no susceptible de atracción.

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era susceptible de atracción.

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión.

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Jalisco que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

Finalmente, no debe pasar desapercibido que el caso en comento reviste una característica especial.

Como fue señalado, el organismo garante local de Jalisco utilizó como fundamento lo dispuesto en el artículo 95, numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece:

> Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación

...

2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General.

Si bien es cierto, el fundamento invocado por el organismo garante local de Jalisco en el escrito que nos hizo llegar es similar a lo previsto en el artículo 182 de la Ley General de Transparencia en el sentido de que en los casos en que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido deberá notificarlo al Instituto en un plazo que no exceda de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, también lo es que, al leer el artículo citado en relación con el artículo 35, numeral 1, fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios también se desprende que en este último artículo se excluye de las atribuciones del organismo garante local, la competencia para conocer y resolver el recurso de revisión en el que dicho Instituto sea el sujeto recurrido.

Esto último es relevante porque, de acuerdo con la Ley local, se señala expresamente que el organismo garante local carece de competencia para conocer de recursos de revisión donde sea el sujeto obligado recurrido, por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tampoco tiene competencia para conocer de todos los recursos de revisión interpuestos en contra del organismo garante local, sino únicamente de aquéllos que de ser el caso sean relevantes y trascendentes, lo que deja en estado de indefensión a los particulares ya que a la luz del marco normativo citado, no existe una vía para que los particulares impugnen la respuesta que el organismo garante local emita en atención a una solicitud de acceso presentada ante éste, pues la ley local niega la competencia para que el organismo garante local conozca de los recursos de revisión interpuestos en su contra y, por su parte, este Instituto sólo tiene atribuciones para conocer de asuntos que por su interés y trascendencia así lo ameriten, es decir, no de todos.

En virtud de lo anterior, considero relevante que se realice una orientación al particular sobre su derecho a acudir ante el Poder Judicial de la Federación para hacer valer la garantía del derecho de acceso a la información.



Oscar Mauricio Guerra Ford

Comisionado

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/08/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 006/2016
Comisionada Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el artículo 21, fracción X del *Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*, y la Regla Décima Tercera, numeral 6 de las *Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, respecto del *Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 006/2016, del Índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco*, votado en la sesión plenaria de fecha 13 de julio de 2016.

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 006/2016, del Índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno, por ello emito mi **voto disidente** a partir de las razones siguientes:

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del Órgano garante.

Ahora bien, en el Capítulo III de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, el cual es consistente con lo previsto en la *Constitución*, porque se reitera que la facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés.

Por otro lado, debe considerarse que en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma* –en lo sucesivo *Lineamientos Generales-*, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros establecidos en la *Constitución* y en *la Ley General de Transparencia y Acceso a*

la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a dichos preceptos fundantes de la atribución.

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos futuros o complejidad de sistemas en los mismos.

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los *Lineamientos Generales*.

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley General, se prevé lo siguiente:

> Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo. (énfasis añadido).

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo

garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el Órgano garante local.

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los *Lineamientos Generales* se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a consideración del Pleno.

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la

efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad ordinaria.

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si se reunían los requisitos de procedibilidad.

Respetuosamente

Joel Salas Suárez
Comisionado

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/09/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 007/2016
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.10

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 007/2016, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.

ANTECEDENTES

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional.

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo III, del Título Octavo.

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04)

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT-PUB/05/11/2015.09)

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General.

9. Que en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades Federativas.

10. Que el cuatro de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Comisionada Presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que textualmente señaló:

"Se remite recurso de revisión de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 2 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Toda la información inherente al presente recurso de revisión se encuentra en archivo adjunto al presente."

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con formato *pdf* diversa documentación inherente al recurso de revisión número 007/2016 del índice del Organismo Garante de la Entidad Federativa, y sus antecedentes.

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Instituto), registró el expediente con el número ATR/NOT/JAL/09/2016-INAI, cuya Presidente lo turnó el día cuatro de julio de dos mil dieciséis al Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales.

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el correspondiente estudio preliminar, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales.

14. Que posteriormente, mediante acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, a quien inicialmente se le había turnado el asunto, determinó devolver a la Comisionada Presidente el expediente que le fue turnado al estimar que al no cumplir con diversos requisitos de procedencia analizados, no era posible tramitar la petición del Organismo Garante de la Entidad Federativa.

15. Que con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el expediente a que se refiere este acuerdo el doce de julio de dos mil dieciséis, al Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

CONSIDERANDO

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente estudio preliminar, precisa señalar de previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el

artículo 95, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante Ley Estatal), determinó remitir a este Instituto el recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo enviado por su Presidenta. El mencionado precepto es del tenor siguiente:

> "Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación
>
> 1. El recurso de revisión debe presentarse ante la Unidad del sujeto obligado o ante el Instituto, por escrito y por duplicado, o en forma electrónica cuando el sujeto obligado cuente con el sistema que genere el comprobante respectivo, dentro de los quince días hábiles siguientes, según el caso, contados a partir de:
>
> I. La notificación de la respuesta impugnada;
> II. El acceso o la entrega de la información, o
> III. El término para notificar la respuesta de una solicitud de información, o para permitir el acceso o entregar la información, sin que se hayan realizado.
>
> 2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General."

2. Que como se puede apreciar, si bien es cierto que la remisión realizada por el Organismo Garante de la Entidad Federativa fue con base en el citado artículo 95, punto 2, de la Ley Estatal, también lo es que dicha disposición recoge en esencia el contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo Ley General). Este numeral es del tenor siguiente:

> "Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo."

3. Que para efectos prácticos, al ser el punto 2 del artículo 95 de la Ley Estatal una disposición esencialmente igual al párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General, se considera que aun cuando este último precepto no fue invocado por el Organismo

Garante de la Entidad Federativa, de cualquier modo, se estima aplicable para los efectos del presente estudio preliminar.

4. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, los invocados artículos establecen que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, éste deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso.

5. Que además, dichos dispositivos encuentran identidad con lo previsto en el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, mismo que refiere:

> "**Noveno.** El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.
>
> En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente."

6. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo siguiente:

> "**Décimo.** La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos."

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales.

7. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se encuentra inmerso en el Capítulo II de los Lineamientos Generales

denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICIÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado, pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante; o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la posibilidad de las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído.

8. Que en ese sentido, el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales aludidos, pues según se desprende de los antecedentes del presente estudio preliminar, el Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado con las solicitud de información que diera origen al recurso de revisión en comento y por lo tanto, procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado en la normatividad invocada.

9. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

10. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la

conclusión sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia.

11. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente:

> "El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten."[1]

12. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto (aquí sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada).

13. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible.

14. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y

[1] Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal".

trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta facultad.

15. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho.

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente:

> "**Artículo 21.** El Instituto tendrá las siguientes atribuciones...
>
> **IV.** Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General..."

16. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente tesis aislada:

> "Época: Novena Época
> Registro: 182637
> Instancia: Primera Sala
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
> Tomo XVIII, Diciembre de 2003
> Materia(s): Común
> Tesis: 1a. LXXXIV/2003
> Página: 82
>
> **FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**
>
> El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo "podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción

por parte de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de la controversia.

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda."

17. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya consistido en el artículo 95, punto 2, de la ley local, que como se ha apuntado es coincidente con el contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, y el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, lo cierto es que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado.

18. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto; sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica propiamente una solicitud por parte del organismo garante local.

19. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos:

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, y
2. El caso revista interés y trascendencia.

20. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende:

- Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso).
- El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el Capítulo III, del Título Octavo, de la Ley General.

21. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

22. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General:

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

23. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General.

24. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto

atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información".

25. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

26. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

27. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción.

28. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial:

"Época: Novena Época
Registro: 169885
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Abril de 2008
Materia(s): Común
Tesis: 1a./J. 27/2008
Página: 150

FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria,

pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe.

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho."

29. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al entendimiento del tema abordado:

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos susceptibles de ser atraídos.

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo.

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: "gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", "importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", "interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", "interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad".

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos".

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico (trascendencia histórica, política, interés nacional).

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico.

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para referirse a unos y a otros conceptos.

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos *"... que por su interés y trascendencia así lo ameriten"* (artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto utilizando dos términos distintos.

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de la conectiva lógica de la disyunción "o".

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de la palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común.

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal (jurídica, histórica, política, económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de solución que se adoptan ordinariamente.

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia de este Alto Tribunal (...)"

30. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma las características de interés y trascendencia:

"**Cuarto.** Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales,

podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:

I. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y

II. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

La valoración de elementos, así como los razonamientos que realice el Instituto sobre un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos en los presentes lineamientos.".

31. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información[2]. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el mismo.

32. Por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información

[2] Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo.

o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

33. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente.

34. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto.

35. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida.

Y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada.

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste

resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 27/2008 que sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su competencia.

36. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación de algunos hechos que pueden dar luz para entender la materia de la solicitud que dio origen al recurso notificado por la Presidenta del Organismo Garante de la Entidad Federativa:

1.- El pasado doce de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco aprobó el acuerdo legislativo número 331-LXI-2016 para la convocatoria a elección de dos Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y dos suplentes respectivos.

2.- A través de diverso Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, aprobado el día diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, se modificó el Acuerdo mencionado en el punto anterior, y se expidió nuevamente la convocatoria relativa con algunas modificaciones en sus bases[3].

3.- En diverso acuerdo legislativo AL-599-LXI-2016 aprobado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, específicamente en sus páginas diez y once, aparece una lista con los nombres de los participantes para ocupar el cargo de comisionado en el Organismo Garante de la Entidad Federativa, entre quienes se encuentra la persona a que se hace referencia en la solicitud.

4.- En el mismo acuerdo legislativo a que se refiere el punto que antecede[4], se declaró desierta la convocatoria en mención.

5.- Por último, a través de diverso Acuerdo Legislativo número 600-LXI-2016 aprobado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se emitió la nueva convocatoria para elegir a los Comisionados del Organismo Garante de la Entidad Federativa[5].

---

[3] El Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, del cual también se puede desprender que existió el acuerdo legislativo antecedente, esto es, el número 331-LXI-2016, se puede consultar en http://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-9/convocatoria_comisionados_2016.pdf

[4] El Acuerdo Legislativo AL-599-LXI-2016 que declaró desierta la anterior convocatoria y en que aparece como uno de los participantes la persona a que se hace referencia en la solicitud, es consultable en http://www.congresojal.gob.mx/sites/default/files/convocatorias/AL599-LXI-16.pdf

37. Precisadas estas situaciones de hecho, se procede a hacer una relación de los aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa:

1.- El particular solicitó la siguiente información:

> "Tipo de participación que tuvo Ricardo de Alba, el proceso en el que los aspirantes a comisionados llevaban sus papeles."

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los siguientes términos:

> **"Oficio UT/1155/2016**
> **Asunto: Resolución de la Solicitud de Información**
> **Expediente 823/2016**
>
> Guadalajara, Jalisco, a 28 de junio de 2016
>
> **C. Solicitante**
> **Presente**
>
> Le informo que su solicitud de información a la cual corresponde el número de folio 01794016, recibida el 17 de junio del presente a través del sistema Infomex, y registrada con el número de expediente 823/2016 en la que solicita:
>
> **"Tipo de participación que tuvo Ricardo de Alba, el proceso en el que los aspirantes a Comisionados llevaban sus papeles."** (sic)
>
> En ese tenor se resuelve en sentido afirmativo su solicitud, de conformidad con la normatividad aplicable[1]. Se pone a su entera disposición la **"Relatoría de la Participación del Consejo Consultivo en el Proceso de Elección de Aspirantes a Comisionados del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco"** en la cual usted podrá conocer a detalle, la participación del C. Ricardo Alfonso de Alba Moreno
>
> http://www.itei.org.mx/v3/documentos/consejo_consultivo/proceso/relatoria_de_la_participacion_del_consejo_consultivo_en_el_proceso_de_eleccion_de_comisionados.pdf

---

[5] Este acuerdo se puede consultar en el enlace http://www.itei.org.mx/v3/documentos/art8-9/segunda_convocatoria.pdf

[...]"

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, aparece el documento "**ACUSE DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN**" fechado el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, del que se advierte lo siguiente:

" ACUSE DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio del 2016

Se tiene por recibido el recurso de revisión presentado en fecha 29 de junio del 2016 por el C. javier Zavala, respecto de la solicitud RR00039316 en contra de se anexa, por el supuesto señalado en la fracción del artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dentro del Plazo de cinco días hábiles se resolverá sobre la admisión del mismo, por parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco.

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; los artículos 4°, 9° y 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y el artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

No firma el titular de la unidad de transparencia

Se me niega la información"

38. Que con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley General, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se hizo consistir en el tipo de participación que tuvo Ricardo de Alba, el proceso en el que los aspirantes a comisionados llevaban sus papeles.

39. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación se

dio acceso al ahora recurrente a la Relatoría de la Participación del Consejo Consultivo en el proceso de Elección de Aspirantes a Comisionados del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco con la que se pretendió demostrar el dicho del Coordinador de la Unidad de Transparencia del Organismo Garante de la Entidad Federativa.

40. Que con esa respuesta es dable suponer que para el sujeto obligado existió claridad en los siguientes aspectos:

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste;
2.- Que la información solicitada es pública, y
3.- Que, además, era posible adjuntarle una liga electrónica donde de forma digitalizada se demostraba lo anterior.

41. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información.

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito *sine qua non* es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

42. Que lo anterior es así porque se está en presencia de un asunto en que se puso a disposición un enlace electrónico en el cual era posible consultar la información, con su correspondiente expresión documental, lo cual hace injustificable la intervención de este Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le corresponde conocer de forma original, pues dicha respuesta incluso, da la pauta para suponer que existió claridad para el sujeto obligado por cuanto al carácter público de la información solicitada.

43. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino que el único objetivo que persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia.

44. Que abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente hace consistir su inconformidad, esencialmente, en que se le niega la información, por lo cual la litis, al menos en apariencia, sólo se circunscribiría a determinar si se proporcionó o no la información materia de la solicitud lo cual, como ha quedado bien evidenciado, no es un tema novedoso o atípico, y la propia publicidad de la información no parece estar sujeta a debate pues, se repite, al darle respuesta el sujeto obligado remitió al particular a la consulta de un *link* en el que podría "conocer a detalle, la participación del C. Ricardo Alfonso de Alba Moreno", esto es, la materia de la información solicitada.

45. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se encuentra *sub júdice* por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta proporcionó el enlace que, según su dicho, contenía la información materia de la solicitud.

46. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo.

47. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino solo se consideran para examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los elementos necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto.

48. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Época: Novena Época
Registro: 199793
Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo IV, Diciembre de 1996
Materia(s): Común
Tesis: P. CLI/96
Página: 6

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO.

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad.

Varios 631/96. Manuel Camacho Solís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis."

49. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta aduciendo que se le niega lo solicitado.

50. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta

que consistió en la consulta de una liga electrónica en la cual, a decir del sujeto obligado, se encontraba la información.

51. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta aduciendo que no fue entregado lo solicitado.

52. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables.

53. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción III, la facultad del Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados.

54. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno.

55. Que en términos del artículo 21, fracción II del Reglamento Interior, el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en ejercicio de la facultades conferidas a este Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo.

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y III, 21, fracciones II, III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo

Noveno de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 007/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los términos de los considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el presente Acuerdo al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número 007/2016, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación.

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INAI.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/09/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 007/2016
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidente

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

Yuri Zuckermann Pérez
Coordinador Técnico del Pleno

Federico Guzmán Tamayo
Coordinador del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.10, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/09/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: 007/2016

Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 007/2016, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 007/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en virtud de que no se reunían los requisitos de interés y trascendencia para su procedencia.

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a continuación expongo.

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la notificación realizada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, del recurso de revisión número 007/2016, considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco jurídico que la regula.

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: **1) el interés y la trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada del organismo garante.**

Ahora bien, en el Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, **debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia.**

Por otro lado, en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma,* se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera es procedente la atracción.

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes:

1. **Es discrecional reglada y por tanto potestativa,** ya que es el órgano que cuenta con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

2. **Es excepcional,** ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en específico.

3. Para que opere **deben cumplirse los siguientes requisitos:** 1) Que dada la naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en

lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.[1]

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir **una petición fundada por parte del organismo garante.** Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los Lineamientos Generales.

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: *"En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo."*, lo cual se replica en el numeral noveno de los Lineamientos Generales de la materia.

Cabe precisar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el artículo 95, punto 2, dispone lo mismo que lo señalado en el artículo 182 de la Ley General.

Con respecto a lo anterior, en el Acuerdo aprobado por la mayoría se señala en el considerando 7 que *"aunque pareciera regular una especie de 'remisión en automático' por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción], ... no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado* ***pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o***

[1] Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro **"FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."**[1], que si bien está referida a la atribución de la Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto.

bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído."

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, **que se ejerza de oficio por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia.**

Así, la normatividad analizada lleva a concluir que la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente:

> *"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (...), sino únicamente sobre las resoluciones de los recursos de revisión (...) que se estima que por su interés o relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal.[2]"*

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados.

No obstante, en el considerando 17 del Acuerdo se establece "*independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que*

[2] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ..., lo cierto es que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado."

Asimismo, en el considerando 22 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y el subsecuente que consiste en *"un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos;* ***lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia."*****, caso que, según lo previsto en el considerando 25 del Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante estatal** *"al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar."*

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 27 del instrumento, en el sentido que *"de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción"*

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el párrafo segundo del artículo 182 –así como el correlativo 95, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deben interpretarse a partir de una visión constitucional y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, **únicamente debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este órgano colegiado,**

derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para que ejercite su facultad de atracción.

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de legalidad[3], y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados.

Además, el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, así como el diverso 95 punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios no pueden ser interpretados, como se intenta en el presente Acuerdo, **en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción,** siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del acceso a la información.

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, **se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto** de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente.

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés.

---

[3] Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.)

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos.

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, y en el caso concreto, bajo la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, **no son de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.**

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio preliminar, bajo el principio *de mayoría de razón*, no podría existir una obligación en los casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia del caso.

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública[4], los cuales se ven trastocados.

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión.

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad originaria.

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando dicha disposición.

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal.

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate

[4] Artículos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido.

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales y de acceso a la información.

En ese sentido, el INAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el legislador como *"eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia"*[5].

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en condiciones de determinar si la ejerce o no.

[5] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/09/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: 007/2016

Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **emito voto disidente**, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en razón de los argumentos antes señalados.

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/09/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: 007/2016

Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

09F

VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 007/2016, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, VOTADO EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016.

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó la solicitud del Organismo Garante de Jalisco.

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto:

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 007/2016, del índice Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sostiene lo siguiente en relación con la interpretación del artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales:

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído.

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos escenarios:

   a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

   b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado, actualizando con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. .

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto.

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica una petición por parte del organismo garante local.

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad de atracción.

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa.

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere **de manera oficiosa** si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no.

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar.

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados.

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten.

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante nacional.

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los recurrentes. Lo anterior, como se observa:

> **Artículo 181.** El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, **de oficio o a petición de los Organismos garantes**, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
>
> El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos.
>
> **Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que de oficio podría conocer.**

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante nacional, **el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante el INAI dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso:**

> **Artículo 182.** Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> **En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo.**

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de manera oficiosa **o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.**

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso que revista interés y trascendencia.

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los *LINEAMIENTOS GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA MISMA*, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte conducente lo siguiente:

> ***Segundo.*** *Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:*
>
> ...
>
> ***XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción:*** *La petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución* ***que por su interés y trascendencia así lo amerite****, y*
>
> ***Cuarto.*** *Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las*

entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:

***I. Por su interés**, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y*

***II. Por su trascendencia**, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.*

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos garantes de las entidades federativas:

I. De oficio, o
II. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas.
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer.

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de

conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante de la entidad federativa.

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente.

***Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción** realizada por el organismo garante de la entidad federativa **deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción** descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos.*

***Décimo segundo.** La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios **para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos**, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional.*

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad

federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del plazo establecido en el requerimiento.

Décimo tercero. *El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción.*

Décimo séptimo. *Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.*

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas será el siguiente:

I. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados;
II. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia corroborará que *el recurso de revisión que se somete a la consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción* ***haya sido admitido,*** *y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado recurrido, y*
III. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el

> *estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el ejercicio de la facultad de atracción.*
>
> *La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por presentada la misma.*

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral Segundo, fracción XV la *Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción*, se entiende como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución **que por su interés y transcendencia así lo amerite.**

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la *Facultad de atracción* ***a petición*** *del organismo garante de la entidad federativa,* cuando el organismo garante de una entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, **la solicitud de atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y trascendencia, ya que así está descrito en su definición.**

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos.

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando se trate de un asunto que revista interés y trascendencia.

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA:

> CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS)
>
> *c) De la atracción de los recursos de revisión*
> *Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. En este sentido,* ***el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten****, tomando en consideración la definición que sobre éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por*

su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a petición fundada del organismo garante competente.

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el organismo garante nacional.

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 007/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sino que regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada.

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica en el capítulo II denominado "**DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICIÓN** DEL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el capítulo V de los Lineamientos.

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al correo electrónico y documento adjunto, remitido por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, considero lo siguiente:

En el caso concreto, en el correo citado, se informa que "Se remite recurso de revisión de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 2 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco [...]".

En el artículo citado por el organismo garante local se establece lo siguiente:

> En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General.

De acuerdo con lo anterior, se observa que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco fundó dicha solicitud en una disposición de la normativa local que prevé hacer del conocimiento de este Instituto el recurso de revisión para que sea ejercida la facultad de atracción, pero no motivó las

razones por las que considera que el recurso de revisión 007/2016 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza que amerite que este Instituto lo atraiga.

Lo anterior, aunado al estudio que debía hacerse en relación con su presentación o no dentro del plazo legal previsto para ello.

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Jalisco que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata de una petición del organismo garante.

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior –lo cual no aconteció en el presente asunto-, entonces resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

de Transparencia, en el que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podría ser o no susceptible de atracción.

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era susceptible de atracción.

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión.

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Jalisco que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

Finalmente, no debe pasar desapercibido que el caso en comento reviste una característica especial.

Como fue señalado, el organismo garante local de Jalisco utilizó como fundamento lo dispuesto en el artículo 95, numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece:

> Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación

...

2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General.

Si bien es cierto, el fundamento invocado por el organismo garante local de Jalisco en el escrito que nos hizo llegar es similar a lo previsto en el artículo 182 de la Ley General de Transparencia en el sentido de que en los casos en que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido deberá notificarlo al Instituto en un plazo que no exceda de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, también lo es que, al leer el artículo citado en relación con el artículo 35, numeral 1, fracción XXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios también se desprende que en este último artículo se excluye de las atribuciones del organismo garante local, la competencia para conocer y resolver el recurso de revisión en el que dicho Instituto sea el sujeto recurrido.

Esto último es relevante porque, de acuerdo con la Ley local, se señala expresamente que el organismo garante local carece de competencia para conocer de recursos de revisión donde sea el sujeto obligado recurrido, por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tampoco tiene competencia para conocer de todos los recursos de revisión interpuestos en contra del organismo garante local, sino únicamente de aquéllos que de ser el caso sean relevantes y trascendentes, lo que deja en estado de indefensión a los particulares ya que a la luz del marco normativo citado, no existe una vía para que los particulares impugnen la respuesta que el organismo garante local emita en atención a una solicitud de acceso presentada ante éste, pues la ley local niega la competencia para que el organismo garante local conozca de los recursos de revisión interpuestos en su contra y, por su parte, este Instituto sólo tiene atribuciones para conocer de asuntos que por su interés y trascendencia así lo ameriten, es decir, no de todos.

En virtud de lo anterior, considero relevante que se realice una orientación al particular sobre su derecho a acudir ante el Poder Judicial de la Federación para hacer valer la garantía del derecho de acceso a la información.

Oscar Mauricio Guerra Ford

Comisionado

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/09/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: 007/2016
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el artículo 21, fracción X del *Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*, y la Regla Décima Tercera, numeral 6 de las *Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, respecto del *Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 007/2016, del Índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco*, votado en la sesión plenaria de fecha 13 de julio de 2016.

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 007/2016, del Índice del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno, por ello emito mi **voto disidente** a partir de las razones siguientes:

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del Órgano garante.

Ahora bien, en el Capítulo III de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, el cual es consistente con lo previsto en la *Constitución*, porque se reitera que la facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés.

Por otro lado, debe considerarse que en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma* –en lo sucesivo *Lineamientos Generales*-, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros establecidos en la *Constitución* y en *la Ley General de Transparencia y Acceso a*

la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a dichos preceptos fundantes de la atribución.

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos futuros o complejidad de sistemas en los mismos.

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los *Lineamientos Generales.*

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley General, se prevé lo siguiente:

> Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo. (énfasis añadido).

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo

garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el Órgano garante local.

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los *Lineamientos Generales* se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a consideración del Pleno.

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la

efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad ordinaria.

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si se reunían los requisitos de procedibilidad.

Respetuosamente

Joel Salas Suárez
Comisionado

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/10/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: RR00026616
Comisionada Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.11

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR00026616, DEL ÍNDICE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SAN LUIS POTOSÍ.

ANTECEDENTES

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional.

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo III, del Título Octavo.

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04)

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT-PUB/05/11/2015.09)

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General.

9. Que en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades Federativas.

10. Que el cinco de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que textualmente señaló:

> "Por medio del presente, con fundamento en el artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, remito en formato electrónico, las constancias que integran el recurso de revisión con número de folio RR00026616, interpuesto contra esta Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí."

11. Que en el correo electrónico referido en el numeral anterior se señaló el enlace https://drive.google.com/file/d/0B8uFCwdG9vQxTFhFd1FTNUpabW8/view?usp=drive_web,[1] en el que se encuentran los archivos electrónicos que contienen diversa documentación inherente al recurso de revisión número RR00026616, tales como la respuesta a la solicitud de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis; las actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Organismo Garante de la Entidad Federativa, de fechas veinticuatro, veintiséis y veintiocho de noviembre, y uno, once, doce, quince y dieciséis de diciembre de dos mil catorce; cuatro capturas de pantalla que muestran los datos de la solicitud de acceso a información y respuesta, así como el acuse de recibo del recurso.

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto, registró el expediente con el número ATR/NOT/SLP/10/2016-INAI, y la Comisionada Presidente lo turnó el día cinco de julio de dos mil dieciséis a la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales.

13. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el correspondiente estudio preliminar, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo a la Comisionada Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales.

CONSIDERANDO

1. Que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, determinó remitir a este Instituto el recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo electrónico enviado por la Secretaria Ejecutiva de dicho Organismo de conformidad con en el artículo 182 de la Ley General, que dispone:

> "**Artículo 182.** Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres

[1] En razón del tamaño de los archivos adjuntos en términos informáticos, es que fue enviado el enlace electrónico referido. Es factible apreciar cada documento una vez que se sigue la ruta "Descargar->Descargar de todos modos".

días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo."

2. Que según se observa, el invocado artículo establece en su segundo párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso.

3. Que dicho precepto encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, mismo que refiere:

> "**Noveno.** El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.
>
> En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente."

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo siguiente:

> "**Décimo.** La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos."

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales.

5. Que del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General así como del numeral Noveno de los Lineamientos citados, se advierte que el órgano garante deberá notificar a este Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo órgano garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto. Sin embargo en el mismo artículo 182, en el segundo párrafo citado, dispone que "el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión".

De una lectura aislada de dichos preceptos se podría estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

6. Que en una interpretación sistemática, esto es, procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia.

7. Que los requisitos de interés y trascendencia del recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014.

8. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba atraer el asunto por ese sólo hecho; sino que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y trascendencia que se han referido

9. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho.

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente:

"**Artículo 21.** El Instituto tendrá las siguientes atribuciones...

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General..."

10. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la tesis aislada[2] con el rubro "FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN". La cual se transcribe a continuación:

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo "podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de la controversia.

11. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya consistido en el artículo 182 de la Ley General, lo cierto es que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado.

---

[2] Tesis: 1a. LXXXIV/2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003 , p. 82

12. Que no se está en presencia de una solicitud sino de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa, lo que no implica propiamente una solicitud por parte del organismo garante local.

13. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos:

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, y
2. El caso revista interés y trascendencia.

14. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende:

- Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso).
- El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el Capítulo III, del Título Octavo, de la Ley General.

15. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

16. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General:

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud

de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

17. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General.

18. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información".

19. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

20. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

21. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción.

Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial[3], con el rubro "**FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO**", que se transcribe a continuación:

[3] Tesis 1a./J. 27/2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, p. 150

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

22. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al entendimiento del tema abordado:

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos susceptibles de ser atraídos.

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo.

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: "gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", "importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad",

"interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", "interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad".

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos".

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico (trascendencia histórica, política, interés nacional).

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico.

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para referirse a unos y a otros conceptos.

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos *"... que por su interés y trascendencia así lo ameriten"* (artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto utilizando dos términos distintos.

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de la conectiva lógica de la disyunción "o".

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de la palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común.

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal (jurídica, histórica, política, económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de solución que se adoptan ordinariamente.

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia de este Alto Tribunal (...)"

23. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma las características de interés y trascendencia:

"**Cuarto.** Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:

I. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y

II. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

La valoración de elementos, así como los razonamientos que realice el Instituto sobre un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos en los presentes lineamientos.".

24. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita

demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información[4]. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el mismo.

25. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

26. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente.

27. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto.

28. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida.

---

[4] Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo.

Y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6º de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada.

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 27/2008 que sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su competencia.

29. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno hacer una relación de que dieron origen al recurso de revisión notificado por el Organismo Garante de la Entidad Federativa:

1.- El particular solicitó la siguiente información:

"Actas del comité de adquisiciones del 1 de enero de 2014 al 16 de junio de 2016, así como sus versiones estenográficas"

2.- Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los siguientes términos:

"San Luis Potosí, S.L.P., A 27 de junio de 2016

(...)

Con lo que respecta al ejercicio 2014, se envía en versión electrónica las Actas de Comité correspondientes del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

Además se informa que durante el ejercicio 2014 el Pleno de esta Comisión autorizó la compra de insumos, servicios y adquisiciones mediante los acuerdos CEGAIP-198/2014 autorizado por acuerdo de pleno de esta Comisión en Sesión Ordinaria de fecha 16 de Octubre de 2014, acuerdo CEGAIP-467/2014.S.E. Autorizado por acuerdo de pleno de esta Comisión en Sesión Extraordinaria de fecha 25 de noviembre de 2014 y acuerdo CEGAIP-503-2014.S.E. Autorizado por acuerdo de pleno de esta Comisión en Sesión Extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 2014; es por ello que se procedió a realizar las cotizaciones y posteriormente se elaboraron actas de comité por adjudicación directa aunque dichas adquisiciones no rebasaron el monto máximo permitido para el primer semestre por la cantidad de $ 69,052.50 (Sesenta y nueve mi cincuenta y dos pesos 50/100 m.n.) y para el segundo semestre por la cantidad de $ 71,741.25, según los decretos 390 y 608 aprobados por el Poder Legislativo del Estado, publicados en el Periódico Oficial del Estado con fecha 24 de diciembre de 2013 y 28 de junio de 2014 respectivamente; en las cuales establecen los montos para el primero y segundo semestre del año 2014 para las adquisiciones, arrendamientos y servicios e insumos que usan o consumen; para tal caso la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios establece 3 figuras en su artículo 22.- "Las adquisiciones, arrendamientos y servicios, solamente podrán efectuarse mediante:

I. Licitación Pública
II. Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores, y
III. Adjudicación directa.

Uno de los parámetros a los que se deben sujetar tales esquemas son los montos mínimos y máximos".

En este sentido y tal como lo ordena el artículo 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de san Luis Potosí, a través de los decretos 390 y 608 aprobados por el Poder Legislativo del Estado, publicados en el Periódico Oficial del Estado con fecha 24 de diciembre de 2013 y 28 de junio de 2014 respectivamente, se establecieron los montos para el primero y segundo semestre del año 2014 para las Adquisiciones arrendamientos y servicios de las instituciones del Estado, para el primero y segundo semestre de 2014; sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, quedando de la siguiente manera:

(...)

En virtud de todo lo anterior se informa que las adquisiciones y servicios a que se hace alusión en las actas de comité de adquisiciones que son enviadas en versión electrónica, toda vez que no rebasaron los montos máximos totales para el primer y segundo semestre del año 2014, que se encuentran descritos en los párrafos y recuadros que anteceden, **se hicieron por adjudicación directa por lo cual no existe ni existió la obligación legal para esta Comisión de turnar y someter tales adquisiciones a ningún comité, en este caso al comité de Adquisiciones.**

No obstante lo anterior, como mero control al interior de esta Institución se elaboraron las Actas que son puestas enviadas al peticionario, en el estado en que las mismas se encuentran.

(...)

Por otro lado se le hace de su conocimiento que en el ejercicio 2015 no se realizaron adquisiciones mediante el Comité de Adquisiciones esto debido a que las adquisiciones no rebasaron el monto máximo permitido para el primer semestre por la cantidad de $ 71,741.25 (Setenta y un mil setecientos cuarenta y un pesos 25/100 m.n.) y para el segundo semestre por la cantidad de $ 76,815.00 (Setenta y seis mil ochocientos quince pesos 00/100 m.n.), con fundamento en el artículo 22 y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí según los decretos 846 y 1030 aprobados por el Poder Legislativo del Estado, publicados en el Periódico Oficial del Estado con fecha 31 de diciembre de 2014 y 01 de julio de 2015 respectivamente; en las cuales establecen los montos máximos y mínimos para el primero y segundo semestre del año 2015 para las adquisiciones, arrendamientos y servicios e insumos que usan o consumen las instituciones del estado.

Cabe mencionar que el salario mínimo para el primer semestre de 2015 se consideró la cantidad de 63.77 y para el segundo semestre se consideró la cantidad de 68.28 mismos que son multiplicados por 1125 salarios mínimos del área geográfica para la determinación de los montos máximos.

Y por último para el ejercicio 2016 se le informa que no se han realizado adquisiciones mediante el Comité de Adquisiciones esto debido a que las adquisiciones no han rebasaron el monto máximo permitido (...)
(...)

Por último se informa que no existen versiones estenográficas de las Actas de Comité.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

(...)" (sic)

Además, adjuntó los archivos electrónicos que contiene las Actas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí, correspondientes a las siguientes fechas al veinticuatro de noviembre de dos mil catorce (integrada por un total de tres fojas), veintiséis de noviembre de dos mil catorce (integrada por un total de tres fojas), veintiocho de noviembre de dos mil catorce (integrada por un total de cinco fojas), uno de diciembre de dos mil catorce (integrada por un total de seis fojas), once de diciembre de dos mil catorce (integrada por un total de dos fojas), doce de diciembre de dos mil catorce (integrada por un total de seis fojas), quince de diciembre de dos mil catorce (integrada por un total de cuatro fojas) y dieciséis de diciembre de dos mil catorce (integrada por un total de dos fojas).

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, aparece el documento "**Acuse de Recibo del Recurso de Queja**" fechado el tres de junio de dos mil dieciséis, del que se advierte lo siguiente:

"Acuse de Recibo del Recurso de Queja

Su queja, con el número de folio RR00026616 , presentada el día 03 del mes de julio , del año 2016 , a las 20:53 horas, relativa a la solicitud con número de folio: **00241916 ,** Presentada ante: (El,La): **Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública** ha sido recibida exitosamente por la **Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.**

Datos Generales

Nombre del Quejoso:
...
Persona Autorizada para oir y recibir Notificaciones:

Correo electrónico para oir y recibir Notificaciones:
...

La información que usted solicitó fue:
Actas del comité de adquisiciones del 1 de enero de 2014 al 16 de junio de 2016, así como sus versiones estenográficas.

La información proporcionada por el Ente obligado fue:
Me permito remitir en archivo adjunto, la respuesta y la información solicitada.

Descripción de su inconformidad:

Recurro la respuesta del sujeto obligado porque la información que me entrega es incompleta, porque no están en ellas todas las firmas de los funcionarios que integran el comité de adquisiciones y porque dice también que durante los plazos que yo pedí la información no celebraron actas de comité, para lo cual se debió de haber emitido un acuerdo de inexistencia por parte del comité de transparencia del sujeto obligado y no se hace así.

También recurro la respuesta, porque pedí las versiones estenográficas del comité de información y nada dice el sujeto obligado respecto de ese punto, no me contestó nada, entonces ante las evasivas procede el principio de afirmativa ficta.

Solicito la aplicación del principio de suplencia de la deficiencia de la queja, los principios de progresividad y máxima publicidad en beneficio del derecho de acceso a la información.

Fecha en que presentó su solicitud:

16/06/2016 11:17:00 a.m.

Fecha en la que le respondieron:
30/06/2016 03:34:18 p.m.

En caso de que no hubiera proporcionado correo electrónico para oir/recibir notificaciones, se le solicita revisar la lista de acuerdos de esta comisión, misma que se encuentra disponible en los estrados de éste Órgano Colegiado o bien podrá consultarla en www.cegaipslp.org.mx, en donde también podrá consultar las resoluciones emitidas.

La CEGAIP pone a su disposición el telefono 01 800 2234247 para atención a la ciudadania.

A partir del día siguiente al de la fecha de presentación de su recurso de Queja, la CEGAIP cuenta con un plazo máximo de 60 días hábiles, en caso de ampliación de plazo con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de San Luis Potosí para resolver su recurso; la resolución respectiva le será notificada a través del Sistema Infomex o del correo electrónico que señaló para tal efecto.

ATENTAMENTE,
COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"
(sic)

30. Que con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley General, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se hizo consistir en las Actas del Comité de Adquisiciones del Organismo Garante de la Entidad Federativa, del uno de enero de dos mil catorce al dieciséis de junio de dos mil dieciséis, así como sus versiones estenográficas.

31. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que, respecto al año dos mil catorce se adjuntó la expresión documental de las actas solicitadas, no obstante que señala que las adquisiciones se realizaron mediante el procedimiento de adjudicación directa, lo anterior al no rebasar los montos establecidos en la legislación correspondiente, y que por tal motivo no existía obligación legal para el Organismo Garante de la Entidad Federativa, de turnar y someter las adquisiciones al comité de

adquisiciones, sin embrago, señala que a efecto de llevar un control interno se elaboraron las actas enviadas al peticionario como respuesta a la solicitud de información.

32. Que por otra parte, por lo que ve al ejercicio fiscal dos mil quince, en la respuesta se señala que no se realizaron, adquisiciones mediante el Comité de Adquisiciones, lo anterior en virtud de que las adquisiciones no rebasaron los montos máximos permitidos por la legislación correspondiente. Y la misma razón se da para señalar que respecto al ejercicio fiscal de dos mil dieciséis tampoco se realizaron adquisiciones mediante dicho Comité, razón por la cual no se generaron las actas solicitadas.

33. Que finalmente, en cuanto a las versiones estenográficas solicitadas, se pronuncia en el sentido de que "no existen".

34. Que con esa respuesta es dable suponer que para el sujeto obligado existió claridad en los siguientes aspectos:

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste;
2.- Que la información solicitada es pública, y
3.- Que, además, era posible adjuntarle documentos digitalizados que demostraran lo anterior, por lo que se refiere al ejercicio fiscal dos mil catorce, pese a que no existía obligación legal de generar dicha información.
4.- Que en todo caso el no otorgar la información correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil quince y dos mil dieciséis, obedeció a que la información no fue generada al no existir obligación legal.
5.- Que no existen en sus archivos versiones estenográficas de las actas solicitadas.

35. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información.

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito *sine qua non* es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

36. Que se sostiene lo anterior, porque se trata de un caso con características que pueden actualizarse de forma común, pues el asunto se circunscribe determinar si es ajustada o no a derecho la respuesta que consiste, en esencia, en proporcionar una parte de la solicitado sin obligación de contar con ella, justificando que la otra parte no se proporcionaba también por esa aludida falta de obligación de generarla y, concluyendo, que el otro rubro de información relativo a las versiones estenográficas relativas a las actas solicitadas "no existen", lo cual hace injustificable la intervención de este Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le corresponde conocer de forma original, pues entonces la litis habría de circunscribirse, al menos en apariencia, a determinar si fue completa o no la respuesta o bien, si fue ajustado a derecho que parte de lo solicitado no se entregara en virtud de la falta de disposición legal que establecer una obligación para ello.

37. Que en abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente hace consistir su inconformidad, esencialmente, en que la respuesta es incompleta por cuanto a las actas que no le fueron entregadas (dos mil quince y dos mil dieciséis). En otro aspecto, por lo que ve a las versiones estenográficas, señala que debió declararse la inexistencia de la información, es de señalar que esta es una hipótesis que se actualiza cuando no se localiza la documentación solicitada, a pesar de existir obligación de contar con ella, por corresponder a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

38. Que si bien, dicho procedimiento brinda certeza jurídica respecto a la búsqueda y localización de la información y a la vez contribuye para determinar el tipo y grado de responsabilidad de los servidores públicos que intervienen en el proceso de su elaboración de la información, no representa a una figura novedosa o de tal singularidad que amerite la intervención de este Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le corresponde conocer de forma original pues en todo caso, la declaratoria de inexistencia encuentra un claro sustento en la Ley General, tal como se advierte a continuación:

"Sección Segunda
De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.

Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

Capítulo III
De los Comités de Transparencia

Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

TÍTULO SÉPTIMO
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Capítulo I
Del Procedimiento de Acceso a la Información

Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.".

39. Que por su parte, lo mismo puede decirse de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (Ley Estatal), que establece respecto al procedimiento para declarar la inexistencia de la información lo siguiente:

Sección Segunda
De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

ARTÍCULO 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.

ARTÍCULO 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

Capítulo II
De los Responsables en Cada Sujeto Obligado
Sección Primera
De los Comités de Transparencia

ARTÍCULO 52. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;

TÍTULO SEXTO
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Capítulo I
Del Procedimiento de Acceso a la Información

ARTÍCULO 160. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

ARTÍCULO 161. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan

al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma."

40. Que como corolario de lo anterior, conviene señalar que la declaración de inexistencia de información ya formaba parte del régimen legal potosino desde la recién abrogada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 18 de octubre de 2007, misma que en sus artículos 76 y 77, disponía desde un principio esa figura en el siguiente sentido:

"**ARTICULO 76.** Las unidades de información pública de cada entidad sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. De no estar en sus archivos, las unidades deberán justificar la inexistencia o pérdida de la información solicitada. La obligación de acceso se cumplirá cuando el solicitante tenga a su disposición las copias simples, certificadas o cualquier otro soporte técnico, en el que se encuentre contenida la información solicitada, o cuando realice la consulta de la información en el lugar en el que ésta se encuentre. Cuando la información solicitada ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al solicitante, el lugar donde puede consultarla y las formas para reproducir o adquirir dicha información. Una vez entregada la información, el solicitante acusará recibo por escrito en el formato que le proporcione la unidad.

ARTICULO 77. En el caso de que la información solicitada no se encuentre en los archivos de la unidad de información pública, ésta deberá remitir la solicitud al comité de información, con copia al interesado, y al Sistema Estatal de Documentación y Archivo, con el objeto de que tomen las medidas necesarias para localizar la información en la entidad pública de que se trate y, en caso de no encontrarse la información solicitada, el comité de información y el Sistema Estatal de Documentación y Archivo darán parte a la CEGAIP para que resuelva ordenar la búsqueda exhaustiva de esa información a cargo del sistema Estatal de Documentación y Archivo, confirmar la pérdida o inexistencia de los documentos que la contienen y, si lo considera pertinente, hacer la denuncia correspondiente para determinar si se cometió algún delito.".

41. Que se puede advertir que, si efectivamente se tratara de un caso de inexistencia de la información, además de tratarse de una figura jurídica que encuentra cobijo en la Ley General con bastante claridad, al menos en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información del Estado de San Luis Potosí data desde hace más de ocho años, por lo que no podría hablarse de una excepción, novedad o complejidad en la misma, derivado de su configuración en el orden jurídico en materia de transparencia y acceso a la información del Estado de San Luis Potosí.

42. Que en todo caso, el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa tiene la atribución y competencia para conocer y resolver si el actuar del servidor público

responsable de dar respuesta a la solicitud de información se ajustó a lo dispuesto por las leyes antes citadas, según su vigencia, para resolver si es o no procedente instruir en el presente asunto la emisión de una declaratoria de inexistencia, por lo que se refiere a las actas del comité de adquisiciones, así como las versiones estenográficas de las mismas, una vez que se verificaran las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables le otorgan al sujeto obligado, respecto de la materia de la solicitud de información.

43. Que además, en el resto de los agravios, al mencionar que en las actas que sí se entregaron no se encuentran todas las firmas de los funcionarios que integran el comité de adquisiciones, se advierte que aparentan ser señalamientos respecto al contenido de los documentos entregados, por lo cual son aspectos que bien podrían ser calificados por el Organismo Garante de la Entidad Federativa para determinar si, en principio, deberían formar parte de la Litis.

44. Que como ha quedado bien evidenciado, no es un tema novedoso o atípico, sino que refiere a información que deriva de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, específicamente por lo que se refiere a las actas de los comités de adquisiciones, que se generen en dichos procedimientos.

45. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se encuentra *sub júdice* por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta proporcionó parte de la información, mientras que emitió razones encaminadas a justificar el por qué no entregaba el resto.

46. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo.

Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino solo se consideran para examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los elementos necesarios para que este

Instituto pueda decidir con relación al interés y la trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto.

47. Que de modo orientador,la tesis aislada de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "**ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO**", el cual se transcribe a continuación:

> *El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad.*

48. Que a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse que para este Instituto, en el presente caso, no se actualiza el concepto de interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta por considerarla incompleta y se aduce que no se emitió la declaratoria de inexistencia respectiva, además de que en otro sentido se hace valer consideraciones respecto al contenido de los documentos que sí se entregaron (falta de firmas).

49. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta en que se proporcionó parte de lo solicitado a la cual, incluso, se anexaron diversos archivos electrónicos relacionados con la misma, y se dijo el por qué no se entregaba el resto.

50. Que no pasa inadvertido en este acuerdo que el correo mediante el cual fue enviado el recurso de revisión, fue suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; lo que no es obstáculo para que este Instituto realice este acuerdo toda vez que, como ha quedado señalado anteriormente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, y el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, estamos

ante un supuesto de mero trámite en el que los organismos garantes locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos.

51. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta que, a juicio del recurrente es incompleta y debió emitirse una resolución que sustentara la inexistencia de la información.

52. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables.

53. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción III, la facultad del Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados.

54. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno.

55. Que en términos del artículo 21, fracción II del Reglamento Interior, la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, en ejercicio de la facultades conferidas a este Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo.

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y III, 21, fracciones II, III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/10/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: RR00026616
Comisionada Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026616, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí, en los términos de los considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el presente Acuerdo a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número RR00026616, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación.

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INAI.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/10/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: RR00026616
Comisionada Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidente

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

Yuri Zuckermann Pérez
Coordinador Técnico del Pleno

Federico Guzmán Tamayo
Coordinador del Secretariado Ejecutivo d
Sistema Nacional de Transparencia

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.11, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/10/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: RR00026616

Comisionado Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR00026616, DEL ÍNDICE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026616, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que no se reunían los requisitos de interés y trascendencia para su procedencia.

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a continuación expongo.

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la notificación realizada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, del recurso de revisión número RR00026616, considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco jurídico que la regula.

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: **1) el interés y la trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada del organismo garante.**

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/10/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: RR00026616

Comisionado Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016

Ahora bien, en el Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, **debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia.**

Por otro lado, en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma,* se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera es procedente la atracción.

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes:

1. **Es discrecional reglada y por tanto potestativa,** ya que es el órgano que cuenta con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

2. **Es excepcional,** ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en específico.

3. Para que opere **deben cumplirse los siguientes requisitos:** 1) Que dada la naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en

lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.[1]

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir **una petición fundada por parte del organismo garante.** Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los Lineamientos Generales.

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: *"En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo."*, lo cual se replica en el numeral noveno de los Lineamientos Generales de la materia.

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerando 6 que *"por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia."*

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, **que se ejerza de oficio**

[1] Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro **"FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."**[1], que si bien está referida a la atribución de la Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto.

por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia.

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente:

> *"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (...), sino únicamente sobre las resoluciones de los recursos de revisión (...) que se estima que por su interés o relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal.*[2]"

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados.

No obstante, en el considerando 11 del Acuerdo, se establece que "*independientemente de que el organismo garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ..., lo cierto es que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado.*"

[2] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

Asimismo, en el considerando 16 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y el subsecuente que consiste en *"un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos;* ***lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.",*** **caso que, según lo previsto en el considerando 19 del Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante estatal** "*al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar.*"

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 21 del instrumento, en el sentido que *"de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción."*

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, **únicamente debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para que ejercite su facultad de atracción.**

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de

legalidad[3], y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados.

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende en el presente Acuerdo, **en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción,** siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del acceso a la información.

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, **se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto** de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente.

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés.

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos.

[3] Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.)

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, y en el caso concreto, bajo la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite.

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, **no son de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.**

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio preliminar, bajo el principio *de mayoría de razón*, no podría existir una obligación en los casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia del caso.

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública[4], los cuales se ven trastocados.

[4] Artículos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión.

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad originaria.

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando dicha disposición.

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal.

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido.

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales y de acceso a la información.

En ese sentido, el INAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el legislador como *"eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia"*[5].

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en condiciones de determinar si la ejerce o no.

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la

[5] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/10/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: RR00026616

Comisionado Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **emito voto disidente**, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en razón de los argumentos antes señalados.

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/10/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: RR00026616

Comisionado Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

09F

VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR00026616, DEL ÍNDICE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, VOTADO EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016.

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo y documentos contenidos en el vínculo electrónico proporcionado por el Organismo Garante de la Entidad Federativa de San Luis Potosí.

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto:

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026616, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sostiene:

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído.

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos escenarios:

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

3. De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. .

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto.

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica una petición por parte del organismo garante local.

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad de atracción.

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa.

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere **de manera oficiosa** si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no.

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar.

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados.

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten.

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante nacional.

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los recurrentes. Lo anterior, como se observa:

> **Artículo 181.** El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, **de oficio o a petición de los Organismos garantes**, podrá ejercer

> la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
>
> El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos.
>
> **Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que de oficio podría conocer.**

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante nacional, **el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante el INAI dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso:**

> **Artículo 182.** Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> **En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo.**

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su

Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de manera oficiosa **o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.**

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso que revista interés y trascendencia.

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los *LINEAMIENTOS GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA MISMA*, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte conducente lo siguiente:

> ***Segundo.*** *Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:*
>
> ...
>
> ***XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción:*** *La petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución* ***que por su interés y trascendencia así lo amerite****, y*
>
> ***Cuarto.*** *Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:*
>
> ***I. Por su interés****, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia*

reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y

*II. **Por su trascendencia**, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.*

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos garantes de las entidades federativas:

I. De oficio, o
II. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas.
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer.

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante de la entidad federativa.

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia

***de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto**; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.*

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente.

***Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción** realizada por el organismo garante de la entidad federativa **deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción** descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos.*

***Décimo segundo.** La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios **para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos**, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional.*

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del plazo establecido en el requerimiento.

***Décimo tercero.** El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por*

la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción.

***Décimo séptimo.** Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.*

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas será el siguiente:

I. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados;
***II. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia corroborará que** el recurso de revisión que se somete a la consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción **haya sido admitido,** y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado recurrido, y*
III. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el ejercicio de la facultad de atracción.

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no

podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por presentada la misma.

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral Segundo, fracción XV la *Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción*, se entiende como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución **que por su interés y transcendencia así lo amerite.**

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la *Facultad de atracción* ***a petición*** *del organismo garante de la entidad federativa,* cuando el organismo garante de una entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, **la solicitud de atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y trascendencia, ya que así esta descrito en su definición.**

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer

párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos.

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando se trate de un asunto que revista interés y trascendencia.

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA:

> **CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS)**
>
> ***c) De la atracción de los recursos de revisión***
> *Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. En este sentido,* ***el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten****, tomando en consideración la definición que sobre éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a petición fundada del organismo garante competente.*

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos

en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el organismo garante nacional.

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026616, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sino que regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada.

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica en el capítulo II denominado "**DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICIÓN** DEL

ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el capítulo V de los Lineamientos.

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, considero lo siguiente:

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del cinco de julio de dos mil dieciséis, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se advierte que, con fundamento en el artículo 182, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifestó enviar un Recurso de Revisión, interpuesto ante esta Comisión.

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en San Luis Potosí realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se trata de un asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el organismo garante local en San Luis Potosí motive las razones por las que considera que el recurso de revisión RR00026616 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza que amerite que este instituto lo atraiga.

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de San Luis Potosí que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata de una petición del organismo garante.

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior –lo cual no aconteció en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-, entonces resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podría ser o no susceptible de atracción.

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era susceptible de atracción.

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión.

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la

Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de San Luis Potosí que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

Oscar Mauricio Guerra Ford

Comisionado

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/10/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: RR00026616
Comisionada Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el artículo 21, fracción X del *Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*, y la Regla Décima Tercera, numeral 6 de las *Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, respecto del *Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026616, del Índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí*, votado en la sesión plenaria de fecha 13 de julio de 2016.

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número *RR00026616, del Índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí.*

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno, por ello emito mi **voto disidente** a partir de las razones siguientes:

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del Órgano garante.

Ahora bien, en el Capítulo III de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, el cual es consistente con lo previsto en la *Constitución*, porque se reitera que la facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés.

Por otro lado, debe considerarse que en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma* –en lo sucesivo *Lineamientos Generales*-, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros establecidos en la *Constitución* y en *la Ley General de Transparencia y Acceso a*

la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a dichos preceptos fundantes de la atribución.

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos futuros o complejidad de sistemas en los mismos.

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los *Lineamientos Generales*.

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley General, se prevé lo siguiente:

> Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo. (énfasis añadido).

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el Órgano garante local.

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los *Lineamientos Generales* se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a consideración del Pleno.

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los

particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad ordinaria.

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si se reunían los requisitos de procedibilidad.

Respetuosamente

Joel Salas Suárez
Comisionado

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/11/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: RR00026516
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.12

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR00026516, DEL ÍNDICE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

ANTECEDENTES

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, modificando entre otros, el artículo 6º, apartado A, fracción VIII el cual establece que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional.

4. Que el artículo 6º, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo III, del Título Octavo.

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04)

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT-PUB/05/11/2015.09)

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General.

9. Que en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades Federativas.

10. Que el cinco de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica facultaddeatracción@inai.org.mx, el correo suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que textualmente señaló:

"Por medio del presente, con fundamento en el artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, remito en formato electrónico, las constancias que integran el recurso de revisión con número de folio RR00026516, interpuesto contra esta Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí."

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con formato *pdf* diversa documentación inherente al recurso de revisión número RR00026516 en comento, y sus antecedentes.

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto, registró el expediente con el número ATR/NOT/SLP/11/2016-INAI, cuya Presidente lo turnó el día cinco de julio de dos mil dieciséis al Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales.

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el correspondiente estudio preliminar, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales.

CONSIDERANDO

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa señalar de previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el artículo 182 de la Ley General determinó remitir a este Instituto el recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo electrónico suscrito por la Secretaria Ejecutiva del mismo. El mencionado precepto es del tenor siguiente:

"**Artículo 182.** Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo."

2. Que según se observa, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su segundo párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa

sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso.

3. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, mismo que refiere:

> "**Noveno.** El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.
>
> En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente."

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo siguiente:

> "**Décimo.** La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos."

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales.

5. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que el referido numeral Noveno, pareciera regular una especie de "remisión en automático" por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se encuentra inmerso en el Capítulo II de los Lineamientos Generales denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICIÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la posibilidad de que las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído.

6. Que en ese sentido, el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado con la solicitud de información que diera origen al recurso de revisión en comento y por lo tanto, procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado en la normatividad invocada.

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

   Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

8. Que trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia.

9. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el

correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, en donde no se dejó duda alguna de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente:

> "El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten."[1]

10. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto (aquí sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada).

11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritan ese ejercicio, con la exigencia de que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible.

12. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta facultad.

13. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho.

[1] Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal".

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente:

"**Artículo 21.** El Instituto tendrá las siguientes atribuciones...
IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General..."

14. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente tesis aislada:

"Época: Novena Época
Registro: 182637
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVIII, Diciembre de 2003
Materia(s): Común
Tesis: 1a. LXXXIV/2003
Página: 82

FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo "podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de la controversia.

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda."

15. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de

atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya consistido en el artículo 182 de la Ley General, lo cierto es que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado.

16. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto; sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica propiamente una solicitud por parte del organismo garante local.

17. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos:

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, y
2. El caso revista interés y trascendencia.

18. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende:

- Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso).
- El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el Capítulo III, del Título Octavo, de la Ley General.

19. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en

automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

20. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General:

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

21. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General.

22. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información".

23. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

24. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

25. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción.

26. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial:

"Época: Novena Época
Registro: 169885
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Abril de 2008
Materia(s): Común
Tesis: 1a./J. 27/2008
Página: 150

FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un

interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe.

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho."

27. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al entendimiento del tema abordado:

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos susceptibles de ser atraídos.

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo.

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: "gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", "importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", "interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", "interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad".

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos".

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico (trascendencia histórica, política, interés nacional).

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico.

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para referirse a unos y a otros conceptos.

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos *"... que por su interés y trascendencia así lo ameriten"* (artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto utilizando dos términos distintos.

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de la conectiva lógica de la disyunción "o".

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de la palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común.

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal (jurídica, histórica, política, económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de solución que se adoptan ordinariamente.

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia de este Alto Tribunal (...)"

28. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma las características de interés y trascendencia:

"**Cuarto.** Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:

I. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y

II. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

La valoración de elementos, así como los razonamientos que realice el Instituto sobre un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos en los presentes lineamientos.".

29. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información[2]. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el mismo.

30. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

31. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente.

32. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto.

---

[2] Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo.

33. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida.

Y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada.

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 27/2008 que sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su competencia.

34. Ahora bien, el necesario contexto anterior, es oportuno hacer una relación de antecedentes que dieron origen al recurso de revisión notificado por el Organismo Garante de la Entidad Federativa:

1.- El particular solicitó la siguiente información:

> *"... las versiones estenográficas de las sesiones del Peno o del consejo de la CEGAIP celebradas entre el periodo del 1 de enero de 2016 al 16 de junio de 2016"*

2.- Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los siguientes términos:

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/11/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: RR00026516
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Solicitud de Información CEGAIP-S.I-112/16-00241616-INFOMEX
28 DE JUNIO DE 2016

C. ...
PRESENTE

Por medio del presente, y en atención a la solicitud de información CEGAIP-SI-112/16-00241616-INFOMEX, por medio de la cual se solicita: 'las versiones estenográficas de las sesiones del Peno o del consejo de la CEGAIP celebradas entre el periodo del 1 de enero de 2016 al 16 de junio de 2016'

Al respecto se otorga la siguiente respuesta:

Con fecha 17de junio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo aprobado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y un anexo único que estableció en el punto 4 Bases Generales y el punto consecutivo 4.1 que la Ley General de Transparencia se encuentra vigente a partir del 05 cinco de mayo de 2015, fecha posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto deberá observarse por los sujetos obligados y el órgano garante a nivel federal, con excepción de aquellos ordenamientos relacionados con procedimientos, bases y principios que adquieren efectos suspensivos al quedar sujetos a la implementación de acciones legislativas, operativas y/o normativas, en términos de lo previsto en los artículos transitorios de dicha Ley, y el punto 7.4b Obligaciones de Transparencia, que la información relacionada con las nuevas obligaciones de oficio que será incorporada en la Plataforma Nacional de Transparencia en términos de los lineamientos que para tal efecto emita el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales comprenderá aquella que generen los sujetos obligados a partir del 05 de mayo de 2015.

Relacionado a lo anterior, la Ley General de Transparencia en su artículo octavo transitorio en su párrafo cuarto señala: "...Las nuevas obligaciones establecidas en los artículos 70 a 83 de la presente Ley no contempladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de transparencia de las Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

En este sentido del artículo 74° Fracción III, inciso c) que señala: Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
...III Organismos garantes del derecho a la información pública de acceso a la información y la protección de datos personales:
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas.

Supuesto que se actualiza en la hipótesis prevista en el artículo octavo transitorio, descrito anteriormente, en la especie se tiene que la obligación de poner a disposición

del público las versiones estenográficas será aplicable a partir de la entrada en vigor de la Ley General, puesto que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial el 18 de octubre de 2007, no establece para esta Comisión la obligación de poner a disposición del público las versiones estenográficas de las actas de sesiones de pleno, tal y como se desprende de los artículos 18°, 19° y 25° de dicho ordenamiento.

Aunado a lo anterior con fecha 04 de mayo de 2016 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los **Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia**, en dichos Lineamientos se establece que:

Noveno. Fracción II. **La información derivada de las obligaciones de transparencia debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos y administrativos otorgan a los sujetos obligados, conforme lo señalado por el artículo 19 de la Ley General; en caso de que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido por parte del sujeto obligado y, en consecuencia, esté imposibilitado para publicar y actualizar alguna obligación de transparencia, no deberá incluirse como un rubro o fracción que no le aplica, sino que la información que deberá publicar y actualizar consiste en la exposición de los motivos y causas de la inexistencia de dicha información.**

Ahora bien, como ya fue mencionado líneas arriba en el caso que nos ocupa, es decir, poner a disposición del público las versiones estenográficas de las actas de pleno, es una nueva obligación para esta Comisión que se deriva de la entrada en vigor de la Ley General, sin embargo, dicha información no ha sido generada por parte de esta Comisión, por lo que se procede a elaborar la exposición de los motivos de las causas de la inexistencia de dicha información.

Se solicitó a la auxiliar de informática adscrita a la Dirección de Comunicación Social de esta Comisión a través del memorándum S.E/269/2016 de fecha 27 de junio de 2016, (anexo 01), informara si esta Comisión cuenta con las versiones estenográficas de las Sesiones de Consejo de la CEGAIP y asimismo si esta Comisión cuenta con las capacidades técnicas, humanas y de equipo para elaborar versiones estenográficas de las Sesiones de Consejo. En respuesta se recibió el memorándum DCS/068 de fecha 27 de junio de 2016, (anexo 2) del que se desprende que esta Comisión carece del equipo adecuado, así como del personal capacitado para poder elaborar correctamente versiones estenográficas de las sesiones de pleno.

A lo anterior se colige el artículo segundo Transitorio de los Lineamientos de referencia que señala:

A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, habrá un periodo de seis meses para que los sujetos obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional la información a la que se refieren los Capítulos I al IV del Título Quinto de la Ley General, de conformidad con los criterios establecidos en los presentes lineamientos y en sus respectivos anexos.

En el caso de las fracciones V y VI del artículo 70 de la Ley General, la incorporación de la información a que se refiere el párrafo anterior será de un año".

En este orden de ideas, esta Comisión acoge el plazo señalado en el articulado transitorio, para llevar acabo las gestiones necesarias para solventar las imposibilidades técnicas, materiales, operativas y humanas que dan origen a la imposibilidad de poner a disposición del público las versiones estenográficas de las actas de pleno, por lo que el asunto será tratado a la brevedad por el Pleno de esta Comisión, para aplicar las medidas provisionales necesarias para elaborar las versiones estenográficas de las próximas Sesiones de Consejo.

En tanto, el solicitante dispone de las Actas levantadas con motivo de las Sesiones de Consejo de este Órgano Garante, a las cuales puede acceder a través de la página de internet de esta Comisión en el enlace: http://www.cegaipslp.org.mx/ , en la pestaña Accesos>Actas de Pleno>Actas de Pleno 2016, o bien a través del enlace directo
https://drive.google.com/folderview?id=0B4uOB8f5mSl_ZVI3ZkJDYlkwejQ&usp=drive_web

Sin más por el momento agradezco su atención

ATENTAMENTE

LIC. ROSA MARÍA MOTILLA GARCÍA
SECRETARIA EJECUTIVA"
(Énfasis de origen)

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, aparece el documento "**Acuse de Recibo del Recurso de Queja**", en el que se lee lo siguiente:

"**Acuse de Recibo del Recurso de Queja**

Su queja, con el número de folio RR00026516 , presentada el día 03 del mes de julio , del año 2016 , a las 20:47 horas, relativa a la solicitud con número de folio: **00241616** , Presentada ante: (El,La): **Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública** ha sido recibida exitosamente por la **Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública .**

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/11/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: RR00026516
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Datos Generales

Nombre del Quejoso:

...

Persona Autorizada para oir y recibir Notificaciones:

Correo electrónico para oir y recibir Notificaciones:

...

La información que usted solicitó fue:
Versiones estenográficas de las sesiones del pleno o del consejo de la CEGAIP celebradas entre el periodo del 1 de enero de
2016 al 16 de junio de 2016.
La información proporcionada por el Ente obligado fue:
Me permito remitir en archivo adjunto, la respuesta a sus solicitud.
Descripción de su inconformidad:
Recurro la respuesta del sujeto obligado con motivo de la declaración de inexistencia de la información; también porque la entrega de la información no corresponde a la solicitada; asimismo, por la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta. Lo anterior ya que el sujeto obligado restringe y limita el acceso a la información pública solicitada relativa a las versiones estenográficas de las sesiones de Pleno de la CEGAIP y se justifica para no entregarlas sustentando su actuación diciendo que aún no transcurre el plazo legal transitorio para proceder a realizar la elaboración de las versiones estenográficas, pues a su criterio tales funciones, atribuciones y competencias no debe hacerlas sino hasta que corran 6 meses posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia del Estado. Lo anterior, no obstante que tanto la legislación general de transparencia, como los lineamientos emitidos por el sistema nacional de transparencia y el INAI, establecen que la información relacionada con las nuevas obligaciones de oficio que deban generar los sujetos obligados, corresponde a partir del cinco de mayo de dos mil quince y por tanto tienen la obligación legal de tomar las medidas atinentes para documentarlas, según corresponda, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo Octavo Transitorio de la Ley General, además que según las mismos artículos transitorios, contrarios a lo que contesta el sujeto obligado, las obligaciones comunes y específicas para los sujetos obligados son accesible a través de las solicitudes de información tal cual y como lo pedí.

Además recurro la respuesta porque dice el sujeto obligado que la información no existe, pero según las leyes para que proceda este supuesto, debe emitir tal acuerdo el comité de transparencia del sujeto obligado y no el área administrativa. No se me entregó el acuerdo de inexistencia correspondiente.
Solicito que en el recurso de revisión se aplique el principio de suplencia de la queja, los de progresividad y el máxima publicidad en beneficio del derecho de acceso a la información.
Fecha en que presentó su solicitud:
16/06/2016 11:06:43 a.m.

Fecha en la que le respondieron:
28/06/2016 03:12:17 p.m.

En caso de que no hubiera proporcionado correo electrónico para oir/recibir notificaciones, se le solicita revisar la lista de acuerdos de esta comisión, misma que se encuentra disponible en los estrados de éste Órgano Colegiado o bien podrá consultarla en www.cegaipslp.org.mx, en donde también podrá consultar las resoluciones emitidas.
La CEGAIP pone a su disposición el telefono 01 800 2234247 para atención a la ciudadania.
A partir del día siguiente al de la fecha de presentación de su recurso de Queja, la CEGAIP cuenta con un plazo máximo de 60 días hábiles, en caso de ampliación de plazo con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de San Luis Potosí para resolver su recurso; la resolución respectiva le será notificada a través del Sistema Infomex o del correo electrónico que señaló para tal efecto.

ATENTAMENTE,
COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA" (Énfasis de origen)

35. Que con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley General, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se hizo consistir en las versiones estenográficas de las sesiones del pleno del Consejo del Organismo Garante de la Entidad Federativa celebradas entre el periodo del uno de enero de dos mil dieciséis al dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

36. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación, aun cuando se reconoce que no es posible entregar la información y efectivamente no aparece constancia de su entrega, su falta de generación la justificó aduciendo ciertas imposibilidades relacionadas con aspectos técnicos (falta del equipo adecuado para generar la información), y con recursos humanos (falta de personal capacitado para elaborar correctamente versiones estenográficas de las sesiones de pleno), sin que haya puesto en discusión el carácter público de la información y reconociendo, de alguna manera, que sí se encuentra obligado a generarla.

37. Que con esa respuesta es dable concluir que para el sujeto obligado existió claridad en los siguientes aspectos:

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste;
2.- Que la información solicitada es pública, y
3.- Que su falta de generación obedece a causas atribuibles al propio sujeto obligado, pero sin involucrar algún cuestionamiento sobre el carácter público de la información entre las causas que expone.

38. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información.

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito *sine qua non* para ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

39. Que se sostiene lo anterior, en virtud de que se trata de un caso con características que pueden actualizarse de forma común, pues el asunto se circunscribe a determinar si es ajustada o no a derecho la respuesta que consiste, en esencia, en la imposibilidad de entregar la información por no haberse generado aún, pero sin poner en duda el carácter público de dicha información.

40. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino que el único objetivo que se persigue es, insistimos, poner de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia.

41. Que aunado a lo anterior, aun cuando no lo mencionara el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa (como sujeto obligado), efectivamente lo solicitado tiene que ver con las versiones estenográficas de las sesiones del pleno del Organismo Garante de la Entidad Federativa, celebradas entre el periodo del uno de enero de dos mil dieciséis al dieciséis de junio de dos mil dieciséis. A este respecto, en el artículo 74 de la Ley General, uno de los rubros correspondientes a las obligaciones de transparencia con que cuentan los Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la

protección de datos personales, es el previsto por el inciso c) de la fracción III, en la cual se prevé:

> "**Artículo 74.** Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
>
> ...
>
> III. Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales:
>
> ...
>
> c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas;

42. Que por otro lado, el cuatro de mayo de dos mil dieciséis se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos en lo sucesivo), cuyo numeral primero establece:

> **Primero.** Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el Instituto, los organismos garantes y los sujetos obligados de todo el país en sus diferentes ámbitos (federal, estatal y municipal), y tienen como propósito definir los formatos que se usarán para publicar la información prescrita en el Título Quinto de la Ley General y asegurar que sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable.
>
> Contemplan las especificaciones necesarias para la homologación en la presentación y publicación de la información, al tiempo que detallan los criterios mínimos, tanto de contenido como de forma, que los sujetos obligados deberán tomar en consideración al preparar la información que publicarán para cumplir con sus obligaciones de transparencia."

43. Que al desglosar la fracción III, inciso c) del artículo 74 la Ley General, en los Lineamientos Técnicos se prevé lo siguiente:

> "Respecto de las sesiones que ya hayan sido llevadas a cabo, el organismo garante incluirá la información correspondiente a cada sesión y las actas que de ellas se deriven. Se presentarán los documentos completos de las actas y su versión estenográfica. En caso de que los organismos garantes no hayan llevado a cabo versiones estenográficas de las sesiones, se deberá especificar mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. Se incluirá un hipervínculo a cada acta."

44. Que adicionalmente, los citado Lineamientos Técnicos establecen en su artículo Segundo Transitorio lo siguiente:

> "**Segundo.** A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, habrá un periodo de seis meses para que los sujetos obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional, la información a la que se refieren los Capítulos I al IV del Título Quinto de la Ley General, de conformidad con los criterios establecidos en los presentes lineamientos y en sus respectivos anexos."

45. Que lo mismo se puede decir de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (en adelante Ley Estatal)[3], pues en su artículo 88, fracción III, inciso c), se replicó el contenido de la fracción III, inciso c) del artículo 74 de la Ley General enunciada en líneas arriba, para quedar como sigue:

> "**ARTÍCULO 88.** Además de lo señalado en el artículo 84 de la presente Ley, los organismos constitucionales autónomos deberán poner a disposición del público, de oficio, y en forma completa y actualizada la siguiente información:
> ...
> III. La CEGAIP:
> ...
> c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas.
> ..."

46. Que sin que lo anterior implique prejuzgar la respuesta, el objetivo que sí persiguen las anteriores anotaciones es poner de manifiesto que el tema de las versiones estenográficas de las sesiones que lleve a cabo el Organismo Garante de la Entidad Federativa, por cuanto a obligación de transparencia, se encuentra claramente regulado tanto en la Ley General, la Ley Estatal y los Lineamientos Técnicos.

47. Que respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y trascendencia del asunto. Lo anterior así se estima, porque el recurrente hace consistir su inconformidad en lo siguiente:

1. Recurre la respuesta con motivo de la declaración de inexistencia de la información.
2. La entrega de la información no corresponde a la solicitada.
3. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta.

---

[3] Ley publicada en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el lunes 9 de mayo de 2016. Descargable en http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=114679&TPub=2

4. El sujeto obligado, para no entregar la información, justifica su actuación señalando que aún no transcurre el plazo previsto en el régimen transitorio en los Lineamientos Técnicos para proceder a realizar la elaboración de las versiones estenográficas.
5. No se le entregó el acuerdo de inexistencia correspondiente.

48. Que de la inconformidad del recurrente, se puede advertir que fundamentalmente va encaminada a cuestionar la legalidad de la propia respuesta, pero nada novedoso y adicional a lo arriba ponderado aportan al asunto para estimar su interés y trascendencia ya que, en resumen señala que la entrega de la información no corresponde a la solicitada, que no le fue entregada en virtud de que indebidamente el sujeto obligado atendió a un plazo transitorio, y en caso de no existir la información se le debió entregar el acuerdo de inexistencia correspondiente.

49. Que de los mencionados puntos se puede apreciar que, además de las cuestiones relacionadas con el carácter público de la información solicitada, se alude a que debió declararse la inexistencia de la información (argumento al cual también alude el Organismo Garante de la Entidad Federativa al mencionar que "sin embargo, dicha información no ha sido generada por parte de esta Comisión, por lo que se procede a elaborar la exposición de los motivos de las causas de la inexistencia de dicha información...").

50. Que en relación a esto último, es de señalar que esta es una hipótesis que se actualiza cuando no se localiza la documentación solicitada, a pesar de existir obligación de contar con ella, por corresponder a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados

51. Que si bien la figura de la inexistencia brinda certeza jurídica respecto a la búsqueda y localización de la información y a la vez contribuye para determinar el tipo y grado de responsabilidad de los servidores públicos que intervienen en el proceso de su elaboración de la información, no representa una figura novedosa o de tal singularidad que amerite la intervención de este Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le corresponde conocer de forma original, pues en todo caso dicha figura encuentra un claro sustento tanto en la Ley General, como en la Ley Estatal.

52. Que sobre dicha figura de inexistencia de la información, la Ley General dispone lo siguiente:

> "**Artículo 19.** Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.
>
> En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.

Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma."

53. Que por su parte, la Ley Estatal sobre la misma figura de la inexistencia, estatuye lo siguiente:

"**ARTÍCULO 19.** Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia.

ARTÍCULO 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.

ARTÍCULO 52. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones:
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;

ARTÍCULO 160. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia:

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;
II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento;
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.

ARTÍCULO 161. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma."

54. Que como corolario de lo anterior, conviene señalar que dicha figura ya formaba parte del régimen legal potosino desde la recién abrogada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 18 de octubre de 2007, misma que en sus artículos 76 y 77, disponía desde un principio esa figura en el siguiente sentido:

"**ARTICULO 76.** Las unidades de información pública de cada entidad sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. De no estar en sus archivos, las unidades deberán justificar la inexistencia o pérdida de la información solicitada. La obligación de acceso se cumplirá cuando el solicitante tenga a su disposición las copias simples, certificadas o cualquier otro soporte técnico, en el que se encuentre contenida la información solicitada, o cuando realice la consulta de la información en el lugar en el que ésta se encuentre. Cuando la información solicitada ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al solicitante, el lugar donde puede consultarla y las formas para reproducir o adquirir dicha información. Una vez entregada la información, el solicitante acusará recibo por escrito en el formato que le proporcione la unidad.

> **ARTICULO 77.** En el caso de que la información solicitada no se encuentre en los archivos de la unidad de información pública, ésta deberá remitir la solicitud al comité de información, con copia al interesado, y al Sistema Estatal de Documentación y Archivo, con el objeto de que tomen las medidas necesarias para localizar la información en la entidad pública de que se trate y, en caso de no encontrarse la información solicitada, el comité de información y el Sistema Estatal de Documentación y Archivo darán parte a la CEGAIP para que resuelva ordenar la búsqueda exhaustiva de esa información a cargo del sistema Estatal de Documentación y Archivo, confirmar la pérdida o inexistencia de los documentos que la contienen y, si lo considera pertinente, hacer la denuncia correspondiente para determinar si se cometió algún delito."

55. Que de ello se puede advertir que, si efectivamente se tratara de un caso de inexistencia de la información, además de tratarse de una figura jurídica que encuentra cobijo en la Ley General con bastante claridad, al menos en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información del Estado de San Luis Potosí data desde hace más de ocho años, por lo que no podría hablarse de una excepción, novedad o complejidad en la misma, derivado de su configuración en el orden jurídico en materia de transparencia y acceso a la información del Estado de San Luis Potosí.

56. Que en todo caso el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa tiene la atribución y competencia para conocer y resolver si el actuar del servidor público responsable de dar respuesta a la solicitud de información se ajustó a lo dispuesto por las leyes antes citadas, según su vigencia, para resolver si es o no procedente instruir en el presente asunto la emisión de una declaratoria de inexistencia, por lo que se refiere a las actas del comité de adquisiciones, así como las versiones estenográficas de las mismas, una vez que se verificaran las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables le otorgan al sujeto obligado, respecto de la materia de la solicitud de información.

57. Que desde luego, se aclara, tampoco tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino que el único objetivo que se persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia.

58. Que no escapa a la atención de este Instituto obstante lo anterior que le fue proporcionado al recurrente un enlace electrónico en el cual, según el dicho del sujeto obligado en su respuesta, es posible acceder a las actas de las sesiones del pleno del sujeto obligado, y señaló que el asunto *"... será tratado a la brevedad por el Pleno de esta Comisión, para aplicar las medidas provisionales necesarias para elaborar las versiones estenográficas de las próximas Sesiones de Consejo."* lo cual no se estima necesario abordar pues ni siquiera fue materia de la solicitud.

59. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se encuentra sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa como sujeto obligado, pues señaló los motivos y las circunstancias particulares por los cuales la información no ha sido generada.

Siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo.

60. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los elementos necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto.

61. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Época: Novena Época
Registro: 199793
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo IV, Diciembre de 1996
Materia(s): Común
Tesis: P. CLI/96
Página: 6

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO.

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia,

sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad.

Varios 631/96. Manuel Camacho Solís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis."

62. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse que para este Instituto, en el presente, no se actualiza el concepto de interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que se está en presencia de un caso en que se esgrimieron las razones por las cuales no se ha generado la información solicitada, sin poner en tela de juicio el carácter público de dicha información.

63. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información. Menos aún se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta en la que el sujeto obligado explica el por qué no se encuentra en posibilidad de proporcionar la información, y adicionalmente, señaló que el asunto "... será tratado a la brevedad por el Pleno de esta Comisión, para aplicar las medidas provisionales necesarias para elaborar las versiones estenográficas de las próximas Sesiones de Consejo.", de lo cual es posible inferir que es un tema que se tiene presente al interior del sujeto obligado, reconociendo implícitamente, de alguna manera, que los motivos son atribuibles al mismo sujeto obligado.

64. Que por último, no pasa inadvertido que el correo mediante el cual fue enviado el recurso de revisión, fue suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; lo que no es obstáculo para que este Instituto realice el presente análisis toda vez que, como ha quedado señalado anteriormente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, y el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, estamos ante un supuesto de mero trámite en el que los organismos garantes locales se limitan

a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos.

65. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta aduciendo que no fue entregado lo solicitado, pero en donde nunca estuvo en duda el carácter público de la información por parte del sujeto obligado y, en todo caso, de actualizarse la hipótesis de inexistencia de la información, ésta es una figura jurídica de la cual se tienen antecedentes legales en el propio orden jurídico en materia de transparencia de la Entidad Federativa desde hace ya varios años.

66. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables.

67. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción III, la facultad del Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados.

68. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno.

69. Que en términos del artículo 21, fracción II del Reglamento Interior, el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en ejercicio de la facultades conferidas a este Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo.

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

14, 15, fracciones I y III, 21, fracciones II, III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026516, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en los términos de los considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el presente Acuerdo a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número RR00026516, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación.

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INAI.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/11/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: RR00026516
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidente

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

Yuri Zuckermann Pérez
Coordinador Técnico del Pleno

Federico Guzmán Tamayo
Coordinador del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.12, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/11/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: RR00026516

Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR00026516, DEL ÍNDICE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el trece de julio de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026516, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que no se reunían los requisitos de interés y trascendencia para su procedencia.

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a continuación expongo.

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la notificación realizada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, del recurso de revisión número RR00026516, considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco jurídico que la regula.

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: **1) el interés y la trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada del organismo garante.**

Ahora bien, en el Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, **debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia**.

Por otro lado, en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma,* se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera es procedente la atracción.

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes:

1. **Es discrecional reglada y por tanto potestativa,** ya que es el órgano que cuenta con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

2. **Es excepcional,** ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en específico.

3. Para que opere **deben cumplirse los siguientes requisitos:** 1) Que dada la naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en

lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.[1]

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir **una petición fundada por parte del organismo garante.** Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los Lineamientos Generales.

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: *"En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo.",* lo cual se replica en el numeral noveno de los Lineamientos Generales de la materia.

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerando 5 que *"aunque pareciera hablar de una especie de 'remisión en automático' por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción], ... no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado* ***pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído."***

[1] Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro **"FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."**[1], que si bien está referida a la atribución de la Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto.

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, **que se ejerza de oficio por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia.**

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente:

> *"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (...), sino únicamente sobre las resoluciones de los recursos de revisión (...) que se estima que por su interés o relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal.*[2]"

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados.

No obstante, en el considerando 15 del Acuerdo se establece que "*independientemente de que el organismo garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ..., lo cierto es que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este*

[2] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado."

Asimismo, en el considerando 20 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y el subsecuente que consiste en *"un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos;* ***lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia."*****, caso que, según lo previsto en el considerando 23 del Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante estatal** "*al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar.*"

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 25 del isntrumento, en el sentido que *"de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción."*

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, **únicamente debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para que ejercite su facultad de atracción.**

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de legalidad[3], y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados.

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende en el presente Acuerdo, **en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción,** siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del acceso a la información.

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, **se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto** de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente.

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés.

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos.

---

[3] Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.)

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, y en el caso concreto, bajo la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite.

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, **no son de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.**

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio preliminar, bajo el principio *de mayoría de razón*, no podría existir una obligación en los casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia del caso.

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública[4], los cuales se ven trastocados.

[4] Artículos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión.

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad originaria.

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando dicha disposición.

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal.

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos

Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido.

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales y de acceso a la información.

En ese sentido, el INAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el legislador como *"eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia"*[5].

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en condiciones de determinar si la ejerce o no.

[5] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/11/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: RR00026516

Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **emito voto disidente**, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en razón de los argumentos antes señalados.

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/11/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: RR00026516

Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR00026516, DEL ÍNDICE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, VOTADO EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016.

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo y documentos contenidos en el vínculo electrónico proporcionado por el Organismo Garante de la Entidad Federativa de San Luis Potosí.

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto:

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026516, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sostiene:

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído.

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos escenarios:

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

3. De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. .

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto.

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica una petición por parte del organismo garante local.

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad de atracción.

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa.

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere **de manera oficiosa** si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no.

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar.

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados.

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten.

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante nacional.

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los recurrentes. Lo anterior, como se observa:

> **Artículo 181.** El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, **de oficio o a petición de los Organismos garantes**, podrá ejercer

> la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
>
> El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos.
>
> **Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que de oficio podría conocer.**

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante nacional, **el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante el INAI dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso:**

> **Artículo 182.** Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> **En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo.**

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su

Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de manera oficiosa **o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.**

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso que revista interés y trascendencia.

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los *LINEAMIENTOS GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA MISMA*, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte conducente lo siguiente:

> ***Segundo.*** *Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:*
>
> *...*
>
> ***XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción:*** *La petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución* ***que por su interés y trascendencia así lo amerite****, y*
>
> ***Cuarto.*** *Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:*
>
> ***I. Por su interés****, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia*

reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y

***II. Por su trascendencia**, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.*

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos garantes de las entidades federativas:

I. De oficio, o
II. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas.
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer.

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante de la entidad federativa.

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia

de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; *de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.*

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente.

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción *realizada por el organismo garante de la entidad federativa* ***deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción*** *descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos.*

Décimo segundo. *La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios* ***para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos****, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional.*

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del plazo establecido en el requerimiento.

Décimo tercero. *El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por*

la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción.

***Décimo séptimo.** Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.*

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas será el siguiente:

I. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados;
***II. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia corroborará que** el recurso de revisión que se somete a la consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción **haya sido admitido**, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado recurrido, y*
III. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el ejercicio de la facultad de atracción.

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no

podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por presentada la misma.

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral Segundo, fracción XV la *Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción,* se entiende como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución **que por su interés y transcendencia así lo amerite.**

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la *Facultad de atracción* ***a petición*** *del organismo garante de la entidad federativa,* cuando el organismo garante de una entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, **la solicitud de atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y trascendencia, ya que así está descrito en su definición.**

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer

párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos.

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando se trate de un asunto que revista interés y trascendencia.

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la **EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA:**

> **CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS)**
>
> ***c) De la atracción de los recursos de revisión***
> *Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. En este sentido,* ***el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten****, tomando en consideración la definición que sobre éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a petición fundada del organismo garante competente.*

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos

en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el organismo garante nacional.

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026516, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sino que regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada.

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica en el capítulo II denominado "**DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICIÓN** DEL

ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el capítulo V de los Lineamientos.

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, considero lo siguiente:

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del cinco de julio de dos mil dieciséis, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se advierte que, con fundamento en el artículo 182, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifestó enviar un Recurso de Revisión, interpuesto ante esta Comisión.

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en San Luis Potosí realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se trata de un asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el organismo garante local en San Luis Potosí motive las razones por las que considera que el recurso de revisión RR00026516 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza que amerite que este instituto lo atraiga.

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de San Luis Potosí que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata de una petición del organismo garante.

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior, entonces resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podría ser o no susceptible de atracción.

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era susceptible de atracción.

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión.

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite

y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de San Luis Potosí que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

Oscar Mauricio Guerra Ford

Comisionado

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/11/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: RR00026516
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el artículo 21, fracción X del *Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*, y la Regla Décima Tercera, numeral 6 de las *Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, respecto del *Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026516, del Índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí*, votado en la sesión plenaria de fecha 13 de julio de 2016.

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número *RR00026516, del Índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí*.

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno, por ello emito mi **voto disidente** a partir de las razones siguientes:

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del Órgano garante.

Ahora bien, en el Capítulo III de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, el cual es consistente con lo previsto en la *Constitución*, porque se reitera que la facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés.

Por otro lado, debe considerarse que en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma* –en lo sucesivo *Lineamientos Generales*-, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros establecidos en la *Constitución* y en *la Ley General de Transparencia y Acceso a*

la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a dichos preceptos fundantes de la atribución.

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos futuros o complejidad de sistemas en los mismos.

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los *Lineamientos Generales*.

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley General, se prevé lo siguiente:

> Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo. (énfasis añadido).

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo

garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el Órgano garante local.

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los *Lineamientos Generales* se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a consideración del Pleno.

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la

efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad ordinaria.

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si se reunían los requisitos de procedibilidad.

Respetuosamente

Joel Salas Suárez
Comisionado

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/12/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: RR00026416
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora

ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.13

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR00026416, DEL ÍNDICE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

ANTECEDENTES

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional.

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo III, del Título Octavo.

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04)

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT-PUB/05/11/2015.09)

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General.

9. Que en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades Federativas.

10. Que el cinco de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que textualmente señaló:

"... Por medio del presente, con fundamento en el artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, remito en formato electrónico, las

constancias que integran el recurso de revisión con número de folio RR00026416, interpuesto contra esta Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí..."

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior fueron adjuntados archivos con diversa documentación inherente al recurso de revisión en comento y sus antecedentes, mismos que consisten en: acuse de recibo del recurso; respuesta a la solicitud de información; relación con personal de nómina; relación de personal por honorarios; cuatro capturas de pantalla que muestran los datos de la solicitud de acceso a información y respuesta; y, siete fotocopias que contienen veinticinco credenciales de personal.

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Instituto), registró el expediente con el número ATR/NOT/SLP/12/2016-INAI, cuya Presidente lo turnó el día cinco de julio de dos mil dieciséis a sí misma para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales.

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el correspondiente estudio preliminar, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo a la Comisionada Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales.

CONSIDERANDO

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa señalar de previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el artículo 182 de la Ley General determinó remitir a este Instituto el recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo electrónico suscrito por la Secretaria Ejecutiva del mismo. El mencionado precepto es del tenor siguiente:

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo."

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su segundo párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso.

3. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, mismo que refiere:

> **Noveno.** El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.
>
> En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente."

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo siguiente:

> "**Décimo.** La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos."

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales.

5. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se encuentra inmerso en el Capítulo II de los Lineamientos Generales denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICIÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado, pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante; o bien, de oficio por parte de este Instituto,

sin que exista la posibilidad de las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído.

6. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y por lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado en la normatividad invocada.

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

   Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

8. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia.

9. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente:

> "El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten."[1]

10. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto (aquí sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada).

11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible.

12. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta facultad.

13. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho.

---

[1] Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal".

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el 09 de mayo de 2016, al tenor literal siguiente:

> "**Artículo 21.** El Instituto tendrá las siguientes atribuciones...
>
> **IV.** Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General..."

14. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente tesis aislada:

> "Época: Novena Época
> Registro: 182637
> Instancia: Primera Sala
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
> Tomo XVIII, Diciembre de 2003
> Materia(s): Común
> Tesis: 1a. LXXXIV/2003
> Página: 82
>
> **FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**
>
> El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo "podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de la controversia.
>
> Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda."

15. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya consistido en el artículo 182 de la Ley General, lo cierto es que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado.

16. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto; sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica propiamente una solicitud por parte del organismo garante local.

17. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos:

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, y
2. El caso revista interés y trascendencia.

18. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende:

- Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso).
- El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el Capítulo III, del Título Octavo, de la Ley General.

19. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en

automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

20. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General:

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

21. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General.

22. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información".

23. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

24. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

25. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción.

26. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial:

"Época: Novena Época
Registro: 169885
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Abril de 2008
Materia(s): Común
Tesis: 1a./J. 27/2008
Página: 150

FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado

en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe.

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho."

27. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al entendimiento del tema abordado:

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos susceptibles de ser atraídos.

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo.

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: "gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", "importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", "interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", "interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad".

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos".

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico (trascendencia histórica, política, interés nacional).

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico.

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para referirse a unos y a otros conceptos.

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos *"... que por su interés y trascendencia así lo ameriten"* (artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto utilizando dos términos distintos.

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de la conectiva lógica de la disyunción "o".

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de la palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común.

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal (jurídica, histórica, política, económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de solución que se adoptan ordinariamente.

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia de este Alto Tribunal (...)"

28. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma las características de interés y trascendencia:

"**Cuarto.** Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:

I. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y

II. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

> La valoración de elementos, así como los razonamientos que realice el Instituto sobre un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos en los presentes lineamientos.".

29. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información[2]. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el mismo.

30. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

31. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente.

32. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto.

---

[2] Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo.

33. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida.

Y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada.

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 27/2008 que sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su competencia.

34. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno hacer una relación de antecedentes que dieron origen al recurso de revisión notificado por el Organismo Garante de la Entidad Federativa:

1.- El particular solicitó la siguiente información:

> "Solicito se me proporcione identificaciones de todo el personal de la Comisión y el número de nómina, tanto del personal de confianza y de honorarios en caso de haberlos..."

2.- Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los siguientes términos:

"San Luis Potosí, S.L.P., A 15 de junio de 2016

C. ...

En relación a su solicitud de información interpuesta a través del sistema Infomex con el número CEGAIP-SI-103/16-00219316, en la que solicita:

... "Solicito se me proporcione identificaciones de todo el personal de la comisión y el numero de nomina, tanto de personal de confianza y de honorarios en caso de haberlos"...

Se le comunica que con fundamento en el artículo 6, 23, 143 y 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado en vigor:

Se le comunica que se le envía en versión electrónica una relación de todo el personal que labora en la Comisión, incluyendo el número de nómina tanto de personal de confianza como de personal de honorarios; así mismo se le envía la identificación de las personas que cuentan con credencial institucional.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE

C.P. AMELIA SALAZAR GONZÁLEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DE LA CEGAIP"

Además, adjuntó a las constancias como respaldo a dicha respuesta la relación con personal de nómina; relación de personal por honorarios; cuatro capturas de pantalla que muestran los datos de la solicitud de acceso a información y respuesta; y, siete fotocopias que contienen veinticinco credenciales de personal.

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, aparece el documento "**Acuse de Recibo del Recurso de Queja**" fechado el uno de julio de dos mil dieciséis, del que se advierte lo siguiente:

"Acuse de Recibo del Recurso de Queja

Su queja, con el número de folio RR00026416 , presentada el día 01 del mes de julio , del año 2016 , a las 13:46 horas, relativa a la solicitud con número de folio: 00219316 , Presentada ante: (El,La): Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública ha sido recibida exitosamente por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública .

Datos Generales

Nombre del Quejoso:
roberto lara martinez...
Persona Autorizada para oir y recibir Notificaciones;
Correo electrónico para oir y recibir Notificaciones: lararobe1975@gmail.com
La información que usted solicitó fue: Solicito se me proporcione identificaciones de todo el personal de la comisión y el numero de nomina, tanto de personal de confianza y de honorarios en caso de haberlos.
La información proporcionada por el Ente obligado fue: Me permito remitir en archivo adjunto la respuesta y la información solicitada.
Descripción de su inconformidad:
solicite identificación de todo el personal no solo de los que cuentan con credenciales, solicito se me envié por esta misma vía cualquier resolución.
Fecha en que presentó su solicitud:
03/06/2016 09:44:07 a.m.
Fecha en la que le respondieron:
17/06/2016 02:51:38 p.m.

En caso de que no hubiera proporcionado correo electrónico para oir/recibir notificaciones, se le solicita revisar la lista de acuerdos de esta comisión, misma que se encuentra disponible en los estrados de éste Órgano Colegiado o bien podrá consultarla en www.cegaipslp.org.mx, en donde también podrá consultar las resoluciones emitidas.

La CEGAIP pone a su disposición el telefono 01 800 2234247 para atención a la ciudadania.

A partir del día siguiente al de la fecha de presentación de su recurso de Queja, la CEGAIP cuenta con un plazo máximo de 60 días hábiles, en caso de ampliación de plazo con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de San Luis Potosí para resolver su recurso; la resolución respectiva le será notificada a través del Sistema Infomex o del correo electrónico que señaló para tal efecto.

ATENTAMENTE,
COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"

35. Que si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley General, habida cuenta

que como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se hizo consistir en que se proporcionaran identificaciones de todo el personal de la Comisión y el número de nómina, tanto del personal de confianza y de honorarios en caso de haberlos.

36. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación se dio acceso al ahora recurrente a la versión electrónica con una relación de todo el personal que labora en el Organismo Garante de la Entidad Federativa, incluyendo el número de nómina tanto de personal de confianza como de personal de honorarios; así mismo se le envían en forma digitalizada las credenciales institucionales de las personas que cuentan con ese documento.

37. Que con esa respuesta es dable concluir que para el sujeto obligado existió claridad en los siguientes aspectos:

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste;
2.- Que la información solicitada es pública, y
3.- Que, además, era posible adjuntarle un soporte documental para parte de ella.

38. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información.

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito *sine qua non* es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

39. Que lo anterior es así porque se trata de un caso con características que pueden actualizarse de forma común, pues se está en presencia de un asunto en que además de que se le dio respuesta haciendo uso de texto, también se da acceso a documentos digitalizados con los cuales se pretendió demostrar lo dicho, lo cual hace injustificable la intervención de este Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le corresponde conocer de forma original, pues dicha respuesta incluso, da la pauta para

suponer que existió claridad para el sujeto obligado por cuanto al carácter público de la información solicitada y la expresión documental que tenía para soportar su respuesta.

40. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino que el único objetivo que persigue es, insistimos, poner de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia.

41. Que en abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente hace consistir su inconformidad, esencialmente, en que se solicitaron identificaciones de todo el personal y no sólo de los que cuentan con credenciales, por lo cual la litis, al menos en apariencia, sólo se circunscribiría a determinar si se proporcionó o no la información materia de la solicitud en forma completa, lo cual, como ha quedado bien evidenciado, no es un tema novedoso o atípico, y la propia publicidad de la información no parece estar sujeta a debate pues, se repite, al darle respuesta el sujeto obligado adjuntó constancias que a su parecer contenían la información solicitada.

42. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se encuentra *sub júdice* por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta proporcionó datos relacionados con la materia de la información solicitada.

Siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo.

43. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino solo se consideran para examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los elementos necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto.

44. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"Época: Novena Época
Registro: 199793
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo IV, Diciembre de 1996
Materia(s): Común
Tesis: P. CLI/96
Página: 6

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO.

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad.

Varios 631/96. Manuel Camacho Solís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis."

45. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta aduciendo que no fue entregado en forma completa lo solicitado.

46. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia

del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta a la cual, incluso, se anexaron constancias con que se pretendió sustentar dicha respuesta.

47. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta aduciendo que la información es incompleta.

48. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la Comisionada Ximena Puente de la Mora, toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables.

49. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción III, la facultad del Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados.

50. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno.

51. Que en términos del artículo 21, fracción II del Reglamento Interior, la Comisionada Ximena Puente de la Mora, en ejercicio de la facultades conferidas a este Organismo garante en los artículos 6º apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo.

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6º apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV,

y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y III, 21, fracciones II, III y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026416, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en los términos de los considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el presente Acuerdo a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número RR00026416, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación.

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INAI.

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/12/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: RR00026416
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora

Ximena Puente de la Mora
Comisionada Presidente

Francisco Javier Acuña Llamas
Comisionado

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Oscar Mauricio Guerra Ford
Comisionado

María Patricia Kurczyn Villalobos
Comisionada

Rosendoevgueni Monterrey Chepov
Comisionado

Joel Salas Suárez
Comisionado

Yuri Zuckermann Pérez
Coordinador Técnico del Pleno

Federico Guzmán Tamayo
Coordinador del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.13, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/12/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: RR00026416

Comisionado Ponente: Ximena Puente de la Mora

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR00026416, DEL ÍNDICE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el trece de trece de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026416, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que no se reunían los requisitos de interés y trascendencia para su procedencia.

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a continuación expongo.

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la notificación realizada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, del recurso de revisión número RR00026416, considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco jurídico que la regula.

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: **1) el interés y la trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada del organismo garante.**

Ahora bien, en el Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, **debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia.**

Por otro lado, en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma*, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera es procedente la atracción.

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes:

1. **Es discrecional reglada y por tanto potestativa,** ya que es el órgano que cuenta con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

2. **Es excepcional,** ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en específico.

3. Para que opere **deben cumplirse los siguientes requisitos:** 1) Que dada la naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en

lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.[1]

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir **una petición fundada por parte del organismo garante.** Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los Lineamientos Generales.

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: *"En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo."*, lo cual se replica en el numeral noveno de los Lineamientos Generales de la materia.

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerando 5 que *"aunque pareciera hablar de una especie de 'remisión en automático' por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción], ... no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado* ***pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído."***

[1] Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro **"FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."**[1], que si bien está referida a la atribución de la Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto.

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, **que se ejerza de oficio por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso revista de interés y relevancia.**

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente:

> *"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (...), sino únicamente sobre las resoluciones de los recursos de revisión (...) que se estima que por su interés o relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal.[2]"*

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados.

No obstante, en el considerando 15 del Acuerdo se establece que "*independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ..., lo cierto es que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este*

[2] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado."

Asimismo, en el considerando 20 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y el subsecuente que consiste en *"un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos;* ***lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia."*****, caso que, según lo previsto en el considerando 23 del Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante estatal** "*al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar.*"

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 25 del instrumento, en el sentido que *"de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción"*

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, **únicamente debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para que ejercite su facultad de atracción.**

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de

legalidad[3], y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados.

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende en el presente Acuerdo, **en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción,** siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del acceso a la información.

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, **se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto** de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente.

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés.

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos.

---

[3] Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.)

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, y en el caso concreto, bajo la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite.

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, **no son de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.**

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio preliminar, bajo el principio *de mayoría de razón*, no podría existir una obligación en los casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia del caso.

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública[4], los cuales se ven trastocados.

[4] Artículos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión.

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad originaria.

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando dicha disposición.

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal.

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido.

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales y de acceso a la información.

En ese sentido, el INAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el legislador como "*eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia*"[5].

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en condiciones de determinar si la ejerce o no.

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **emito**

[5] Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia.

voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en razón de los argumentos antes señalados.

Areli Cano Guadiana
Comisionada

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que notifica la interposición del recurso de revisión: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí

Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/12/2016-INAI

Folio del recurso de revisión de origen: RR00026416

Comisionado Ponente: Ximena Puente de la Mora

09F

VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR00026416, DEL ÍNDICE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, VOTADO EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016.

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo y documentos contenidos en el vínculo electrónico proporcionado por el Organismo Garante de la Entidad Federativa de San Luis Potosí.

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto:

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026416, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sostiene:

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído.

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos escenarios:

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia.

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción.

3. De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. .

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto.

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica una petición por parte del organismo garante local.

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud.

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones.

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad de atracción.

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa.

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere **de manera oficiosa** si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no.

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar.

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados.

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten.

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante nacional.

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los recurrentes. Lo anterior, como se observa:

> **Artículo 181.** El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, **de oficio o a petición de los Organismos garantes**, podrá ejercer

> la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
>
> El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para ser conocidos.
>
> **Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que de oficio podría conocer.**

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante nacional, **el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante el INAI dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso**:

> **Artículo 182.** Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> **En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo.**

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su

Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de manera oficiosa **o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.**

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso que revista interés y trascendencia.

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los *LINEAMIENTOS GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA TRAMITACIÓN DE LA MISMA*, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte conducente lo siguiente:

> ***Segundo.*** *Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:*
>
> ...
>
> ***XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción:*** *La petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución* ***que por su interés y trascendencia así lo amerite****, y*
>
> ***Cuarto.*** *Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen a continuación:*
>
> ***I. Por su interés****, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia*

reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y

***II. Por su trascendencia**, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.*

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos garantes de las entidades federativas:

I. De oficio, o
II. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas.
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer.

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante de la entidad federativa.

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia

***de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto**; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa.*

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente.

***Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción** realizada por el organismo garante de la entidad federativa **deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción** descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos.*

***Décimo segundo.** La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios **para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos**, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional.*

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del plazo establecido en el requerimiento.

***Décimo tercero.** El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por*

la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción.

***Décimo séptimo.** Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente.*

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas será el siguiente:

I. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados;
***II. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia corroborará que** el recurso de revisión que se somete a la consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción **haya sido admitido,** y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado recurrido, y*
III. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el ejercicio de la facultad de atracción.

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no

podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por presentada la misma.

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral Segundo, fracción XV la *Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción,* se entiende como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución **que por su interés y transcendencia así lo amerite.**

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la *Facultad de atracción* ***a petición del organismo garante de la entidad federativa,*** cuando el organismo garante de una entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, **la solicitud de atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y trascendencia, ya que así está descrito en su definición.**

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer

párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos.

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando se trate de un asunto que revista interés y trascendencia.

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la **EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA:**

> **CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS)**
>
> ***c) De la atracción de los recursos de revisión***
> *Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. En este sentido,* ***el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten****, tomando en consideración la definición que sobre éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a petición fundada del organismo garante competente.*

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos

en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el organismo garante nacional.

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación.

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026416, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sino que regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada.

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica en el capítulo II denominado "**DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICIÓN** DEL

ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el capítulo V de los Lineamientos.

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, considero lo siguiente:

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del cinco de julio de dos mil dieciséis, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se advierte que, con fundamento en el artículo 182, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifestó enviar un Recurso de Revisión, interpuesto ante esta Comisión.

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en San Luis Potosí realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se trata de un asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el organismo garante local en San Luis Potosí motive las razones por las que considera que el recurso de revisión RR00026416 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza que amerite que este instituto lo atraiga.

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de San Luis Potosí que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata de una petición del organismo garante.

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior, entonces resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podría ser o no susceptible de atracción.

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era susceptible de atracción.

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión.

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite

y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de San Luis Potosí que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud.

Oscar Mauricio Guerra Ford

Comisionado

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Organismo Garante que solicita se ejerza la facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/12/2016-INAI
Folio del recurso de revisión de origen: RR00026416
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el artículo 21, fracción X del *Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos*, y la Regla Décima Tercera, numeral 6 de las *Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental*, respecto del *Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR00026416, del Índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí, votado en la sesión plenaria de fecha 13 de julio de 2016.*

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número *RR00026416, del Índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí*.

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno, por ello emito mi **voto disidente** a partir de las razones siguientes:

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del Órgano garante.

Ahora bien, en el Capítulo III de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, el cual es consistente con lo previsto en la *Constitución*, porque se reitera que la facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés.

Por otro lado, debe considerarse que en los *Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma* –en lo sucesivo *Lineamientos Generales-*, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros establecidos en la *Constitución* y en *la Ley General de Transparencia y Acceso a*

la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a dichos preceptos fundantes de la atribución.

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello.

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos futuros o complejidad de sistemas en los mismos.

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los *Lineamientos Generales*.

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley General, se prevé lo siguiente:

> Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información.
>
> En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo. (énfasis añadido).

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo

garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible.

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"), por lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que rigen su procedencia.

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el Órgano garante local.

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los *Lineamientos Generales* se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a consideración del Pleno.

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la

efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que tiene la facultad ordinaria.

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si se reunían los requisitos de procedibilidad.

Respetuosamente

Joel Salas Suárez
Comisionado